



**VNiVERSIDAD  
DSALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

**Escuela de Doctorado 'Studii Salmantini'**

**Programa de Doctorado "Estado de Derecho y Gobernanza  
Global"**

**EL DELITO DE CORRUPCIÓN ENTRE  
PARTICULARES. ESPECIAL REFERENCIA A LA  
CORRUPCIÓN EN EL DEPORTE**

TESIS DOCTORAL

Autor

JAVIER SÁNCHEZ BERNAL

Director

EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS

Salamanca, 2017





**VNiVERSiDAD  
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

**Escuela de Doctorado 'Studii Salmantini'**

**Programa de Doctorado "Estado de Derecho y Gobernanza  
Global"**

**EL DELITO DE CORRUPCIÓN ENTRE  
PARTICULARES. ESPECIAL REFERENCIA A LA  
CORRUPCIÓN EN EL DEPORTE**

**TESIS DOCTORAL**

Tesis Doctoral presentada para optar al título de Doctor con Mención Internacional por la Universidad de Salamanca, dirigida por el Dr. D. EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS (Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca)

Salamanca, 2017



## **AGRADECIMIENTOS:**

Al profesor EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS, por su generosidad y su dedicación. Por guiarme y acompañarme en el camino que emprendí hace algunos años y demostrarme que la Universidad es algo más que docencia e investigación: es el lugar idóneo para crecer y llegar a ser mejor persona.

Al INSTITUTO DE DIREITO PENAL ECONÓMICO E EUROPEU de la Universidad de Coímbra (Portugal), y en especial, a la profesora CLÁUDIA MARIA CRUZ SANTOS, por su acogida y su cercanía. Con su afecto, han hecho de Portugal mi casa desde el primer día.

Esta tesis doctoral ha sido realizada en el marco de una Ayuda para la Formación de Profesorado Universitario (FPU), concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Convocatoria 2012.



A mi abuelo, Agustín, por creer cuando parecía imposible.

A mis padres, Javier y Maribel, y a mi hermana, Miriam,  
por hacerlo posible.





## ÍNDICE

ABREVIATURAS .....	27
INTRODUCCIÓN .....	29

### **PRIMERA PARTE.**

#### **ASPECTOS PRELIMINARES**

<b>CAPÍTULO I. CORRUPCIÓN Y DERECHO PENAL .....</b>	<b>39</b>
1. Una aproximación a la corrupción .....	41
2. Legitimidad de la intervención del Derecho Penal en el ámbito socioeconómico .....	50
2.1. Pertinencia de la intervención del Derecho penal frente a la corrupción en el sector privado .....	54
2.1.1. Argumentos en contra de la tipificación de la corrupción privada .....	54
a) Ausencia de un previo debate serio acerca del merecimiento y necesidad de pena de las conductas recogidas en el artículo 286 bis .....	55
b) Aplicación de los límites de la intervención penal a la protección de la lealtad competitiva .....	57
c) Falta de antijuricidad de los comportamientos de soborno en el ámbito económico .....	59
d) Protección suficiente de la lealtad concurrencial por parte de otras ramas del ordenamiento jurídico .....	61
2.1.2. Argumentos a favor de la criminalización de la corrupción privada .....	62
a) Ineficacia de otras instancias de protección .....	63

b) Cumplimiento de las obligaciones supranacionales contraídas por España .....	63
3. Epílogo .....	65

## **CAPÍTULO II. EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN PRIVADA ..... 67**

1. Caracteres de la corrupción privada. Paralelismo con la corrupción pública .....	70
2. Caracteres de la corrupción privada. Elementos singulares: su ámbito típico .....	71
3. Corrupción privada: esbozo de un concepto .....	78
4. Corrupción privada: estudio de sus causas .....	82
4.1. Comentario previo .....	82
4.2. La globalización y la caída de fronteras .....	85
4.3. Los procesos de privatización masiva .....	95
5. Corrupción privada: algunos efectos negativos .....	99
5.1. Efectos sobre la economía y el sistema económico .....	100
a) Distorsión de la competencia y perpetuación de monopolios y oligopolios .....	101
b) La corrupción, un <i>impuesto</i> al crecimiento .....	102
c) Aumento de la economía sumergida .....	102
5.2. Efectos sobre el sistema y legitimidad democráticos .....	103
6. Epílogo .....	105

## **CAPÍTULO III. EL DELITO DE CORRUPCIÓN PRIVADA EN LAS INICIATIVAS SUPRANACIONALES ..... 107**

1. Breve comentario: el papel de la OCDE en la lucha contra la corrupción privada .....	109
2. Naciones Unidas: la Convención de Mérida contra la Corrupción .....	112

ÍNDICE	11
2.1. Consideraciones iniciales .....	112
2.2. El delito de soborno en el sector privado .....	114
2.3. Otras normas .....	122
3. El Convenio Penal contra la Corrupción del Consejo de Europa .....	123
3.1. Otras normas .....	130
3.2. Aplicación del Convenio Penal .....	130
3.2.1. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) .....	130
3.2.2. Los Informes del GRECO relativos a España .....	132
3.2.3. Informes en referencia a la corrupción privada .....	133
3.2.3.1. Informe adoptado en la 42ª Reunión Plenaria .....	133
3.2.3.2. Informe aprobado en la 50ª Reunión Plenaria .....	137
3.2.3.3. Informe adoptado en la 60ª Reunión Plenaria .....	139
3.2.3.4. Informes adoptados en la 65ª y 70ª Reuniones Plenarias ...	140
4. La Decisión Marco 2003/568/JAI, del Consejo, de 22 de julio de 2003 .....	141
4.1. Otras normas .....	152
4.2. Aplicación de la Decisión Marco .....	158
4.2.1. Grado de cumplimiento por parte de los Estados miembro, particularmente el caso de España .....	158
4.2.2. Controversia en torno a la obligatoriedad de la Decisión Marco .....	160
4.2.3. Panorama actual .....	166
<b>CAPÍTULO IV. MODELOS DE INCRIMINACIÓN EN DERECHO COMPARADO .....</b>	<b>169</b>

1. El delito de corrupción privada y la tutela de las relaciones laborales .....	173
1.1. Elementos político-criminales .....	173
1.2. Apuntes sobre el delito de corrupción privada en Holanda .....	174
1.3. El tipo de corrupción privada en Bélgica .....	177
1.4. Conclusiones .....	179
2. Corrupción privada y protección de la competencia en el mercado .....	181
2.1. Elementos político-criminales e <i>iter</i> normativo en Alemania ..	182
2.2. Redacción típica antes de octubre de 2015 .....	184
2.3. Regulación vigente .....	186
2.4. Conclusiones .....	190
3. Delito de corrupción entre particulares y tutela del patrimonio de la empresa .....	192
3.1. Elementos político-criminales e <i>iter</i> normativo en Italia .....	193
3.2. Redacción típica hasta abril de 2017 .....	194
3.3. Regulación vigente .....	197
3.4. Conclusiones .....	200
4. El tipo de corrupción en el sector privado en Portugal: ¿un modelo híbrido? .....	201
5. Epílogo .....	206

## **SEGUNDA PARTE.**

### **EL DELITO DE CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES EN EL ORDENAMIENTO PENAL ESPAÑOL**

<b>CAPÍTULO V. ANÁLISIS DEL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO .....</b>	<b>211</b>
1. Introducción .....	211

1.1. El bien jurídico y la utilidad de su estudio .....	212
1.2. La delimitación del bien jurídico protegido en el delito de corrupción entre particulares .....	216
2. El bien jurídico en la redacción original de 2010 .....	218
2.1. La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal .....	218
2.2. Autores críticos con el bien jurídico protegido o declarado por el legislador .....	220
2.3. La tutela exclusiva de la competencia .....	222
2.3.1. La “competencia” como bien jurídico penal .....	222
2.3.2. Bien jurídico protegido: libre competencia .....	226
2.3.3. Bien jurídico protegido: leal competencia .....	227
a) La competencia en general .....	229
b) Intereses de los competidores y de otros operadores económicos .....	231
c) Dimensión supraindividual e intereses de los operadores económicos .....	232
2.3.4. Bien jurídico protegido: libre y leal competencia .....	233
2.3.5. Dificultades para considerar la leal competencia como bien jurídico protegido .....	233
a) La exclusión del empresario .....	234
b) El elemento típico del “incumplimiento de obligaciones” .....	236
c) Redacción del tipo atenuado del artículo 286 bis. 3 CP .....	243
2.3.6. Síntesis .....	244
2.4. Salvaguarda del deber de fidelidad con el empresario o titular .....	245
2.4.1. El modelo híbrido de incriminación de la corrupción privada .....	247

2.5. Carácter patrimonial del delito de corrupción privada .....	251
2.5.1. Perjuicio patrimonial a las empresas competidoras .....	251
2.5.2. Perjuicio patrimonial para la empresa en la que desarrolla su labor el destinatario del soborno .....	252
2.5.3. Perjuicio patrimonial para los consumidores .....	256
2.5.4. Carácter patrimonial pluriofensivo .....	257
2.6. Recapitulación y síntesis: bien jurídico en la redacción original de 2010 .....	260
3. El bien jurídico en la literalidad vigente a partir de julio de 2015 .....	260
3.1. La ubicación sistemática del tipo: la nueva Sección de los “Delitos de corrupción en los negocios” .....	261
3.2. La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal .....	264
3.3. Mejoras técnicas en la redacción del delito .....	266
a) Supresión del elemento típico del “incumplimiento de obligaciones” .....	266
b) Ampliación del ámbito típico .....	269
4. Toma de postura .....	270
 <b>CAPÍTULO VI. LOS SUJETOS DEL DELITO</b> .....	279
1. El tipo de corrupción entre particulares como delito plurisubjetivo: el paralelismo con el cohecho .....	279
1.1. Orden sistemático del artículo 286 bis CP .....	281
2. Los sujetos activos en el delito de corrupción entre particulares .....	284
2.1. Los sujetos en la modalidad pasiva .....	284
2.1.1. Sujetos activos: descripción típica .....	288
2.1.2. Sujetos activos: examen de cada figura .....	292
a) Directivo .....	292

ÍNDICE	15
b) Administrador .....	296
c) Empleado .....	301
d) Colaborador .....	302
2.1.3. Sujetos activos: estudio de otras cuestiones relevantes .....	306
a) Problemática en torno a la exclusión del empresario o titular de la empresa o sociedad .....	306
a.1.) El socio o titular de la empresa no se encuentra excluido del elenco de sujetos .....	308
a.1.1.) Concepto material de administración .....	308
a.1.2.) El titular o socio está abarcado por las figuras subjetivas enunciadas .....	308
a.1.3.) Inclusión derivada de la definición de la responsabilidad penal de la persona jurídica .....	309
a.1.4.) Formas de participación delictiva .....	309
a.2.) Exclusión del socio o empresario .....	310
a.2.1.) Exclusión por razones de política-criminal .....	310
a.2.1.1.) Aplicación de los principios de proporcionalidad e intervención mínima .....	311
a.2.1.2.) Defensa de un modelo de incriminación híbrido .....	312
a.2.2.) Exclusión basada en motivaciones de Derecho supranacional y comparado .....	313
a.2.3.) Exclusión como consecuencia de deficiencias de técnica legislativa .....	315
a.3.) Toma de postura .....	315
b) Entidades del sector privado con las que el sujeto activo debe guardar relación .....	316
b.1.) La redacción original de 2010 .....	316

b.1.1.) Exclusión de empresas públicas y privadas que presten servicios públicos .....	319
b.2.) Ámbito de aplicación del delito con la reforma de 2015 .....	321
b.2.1.) Supuestos discutidos .....	328
b.2.1.1.) Las comunidades de propietarios .....	328
b.2.1.2.) Las entidades sin ánimo de lucro .....	329
2.1.4. Sujeto pasivo de la modalidad pasiva .....	330
a) Otras categorías subjetivas de la modalidad pasiva .....	331
2.2. Los sujetos en la modalidad activa .....	333
2.2.1. Consideración de la modalidad activa como delito común .....	333
2.2.2. Restricción del círculo de sujetos .....	335
a) Limitación de sujetos activos .....	335
b) Consideración de la corrupción privada activa como delito especial .....	337
2.2.3. Toma de postura .....	339
2.2.4. Sujeto pasivo de la modalidad activa .....	340
 <b>CAPÍTULO VII. LAS CONDUCTAS TÍPICAS</b> .....	341
1. Apuntes preliminares .....	341
1.1. Situación antes y después de la reforma obrada por la LO 1/2015 .....	343
2. La fórmula típica de la corrupción privada pasiva .....	345
2.1. Verbos rectores: recibir, solicitar o aceptar .....	346
2.1.1. Comportamientos no tipificados .....	349
2.2. Objeto material: beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza .....	350
a) Los términos “beneficio” o “ventaja” .....	350
b) Carácter “no justificado” .....	352



b.1.) “No justificado” como sinónimo de “indebido” .....	352
b.2.) “No justificado” como sinónimo de “no autorizado” .....	354
b.3.) Los criterios de “insignificancia” y de “adecuación social” como causa de atipicidad .....	356
c) Prestación “de cualquier naturaleza” .....	360
c.1.) Naturaleza no económica .....	360
c.2.) Naturaleza económica .....	361
c.3.) Toma de postura .....	363
2.3. Como contraprestación para favorecer indebidamente a otro .....	364
2.3.1. “Como contraprestación” .....	364
2.3.2. “Para favorecer a otro” .....	369
2.3.3. Favorecer “indebidamente” .....	371
2.4. En la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales .....	375
2.4.1. Notas introductorias .....	375
2.4.2. Adquisición o venta de mercancías .....	376
2.4.3. Contratación de servicios .....	377
2.4.4. Relaciones comerciales .....	378
3. La fórmula típica de la corrupción privada activa .....	379
3.1. Verbos rectores: prometer, ofrecer o conceder .....	379
3.2. Objeto material: beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza .....	381
3.3. Como contraprestación para que le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a otros .....	381
3.4. En la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales .....	382

4. Inexigencia de causación de un perjuicio .....	382
---	-----

## **CAPÍTULO VIII. EL TIPO SUBJETIVO DEL DELITO ..... 385**

1. Introducción .....	385
2. Comisión en modalidad de dolo eventual .....	386
3. La finalidad de favorecimiento como elemento subjetivo del injusto .....	387
4. Error de tipo .....	389

## **CAPÍTULO IX. OTROS ELEMENTOS DE LA TEORÍA JURÍDICA (I): ANTIJURIDICIDAD, CULPABILIDAD, PUNIBILIDAD Y CONDICIONES OBJETIVAS DE PERSEGUIBILIDAD ..... 391**

1. Antijuridicidad .....	391
1.1. Estado de necesidad .....	392
1.2. Consentimiento del titular del bien jurídico .....	394
2. Culpabilidad .....	395
2.1. Error de prohibición. Supuestos y consecuencias .....	396
3. Penas previstas en el artículo 286 bis CP .....	398
3.1. Introducción .....	398
a) La horquilla punitiva del tipo básico de corrupción privada supera la previsión de la Decisión Marco 2003/568/JAI .....	399
b) Previsión de idéntica penalidad para las modalidades activa y pasiva de corrupción entre particulares .....	400
c) Apreciaciones de otra índole .....	401
3.2. La pena de prisión .....	402
3.3. La pena de multa .....	404
3.4. La pena de inhabilitación especial .....	405
4. La publicación de la sentencia .....	405

ÍNDICE	19
5. La condición de perseguibilidad .....	406
<b>CAPÍTULO X. OTROS ELEMENTOS DE LA TEORÍA JURÍDICA (II): ITER CRIMINIS. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN .....</b>	<b>409</b>
1. <i>Iter Criminis</i> : consumación y formas imperfectas de ejecución ...	409
1.1. Consumación .....	409
1.2. Formas imperfectas de ejecución .....	412
2. Autoría y participación .....	414
2.1. Sujetos activos de la corrupción privada .....	414
2.2. La persona interpuesta .....	415
2.3. Otros sujetos (I): la persona beneficiada por el favorecimiento .....	417
2.4. Otros sujetos (II): el destinatario del beneficio o ventaja .....	418
<b>CAPÍTULO XI. TIPO ATENUADO Y TIPO AGRAVADO .....</b>	<b>421</b>
1. Introducción .....	421
2. El tipo atenuado del artículo 286 bis. 3 CP .....	421
2.1. Razón de ser de la atenuación .....	422
2.1.1. Motivos relacionados con el bien jurídico .....	422
2.1.2. Justificación vinculada al tipo objetivo .....	423
2.1.3. Razones penológicas .....	424
2.2. Aplicabilidad de la medida: criterios de atenuación .....	424
2.2.1. Cuantía del beneficio o valor de la ventaja .....	426
2.2.2. Trascendencia de las funciones del culpable .....	427
2.3. Críticas al delito atenuado .....	428
3. Los supuestos agravados del artículo 286 quater CP .....	429

3.1. Mecánica del tipo agravado .....	430
3.2. Circunstancias “de especial gravedad” .....	432
a) El beneficio o ventaja tenga un valor especialmente elevado .....	432
b) La acción del autor no sea meramente ocasional .....	432
c) Se trate de hechos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal .....	433
d) El objeto del negocio versara sobre bienes o servicios humanitarios o cualesquiera otros de primera necesidad .....	434

## **CAPÍTULO XII. APUNTES SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS .....**

1. Acotación del objeto de estudio .....	435
2. El sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en relación al delito de corrupción privada .....	437
3. Examen de algunas cuestiones de interés .....	439
3.1. ¿La actuación de qué personas físicas da lugar a la transferencia de responsabilidad a la persona jurídica? .....	440
3.2. ¿Puede atribuirse responsabilidad penal a la persona jurídica aunque sea perjudicada por la incorrecta actuación de la persona física? .....	442
3.3. ¿Qué rol cumplen los programas de <i>compliance</i> , en relación a los delitos de corrupción privada, en el nuevo sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas diseñado en 2015? .....	443

### **TERCERA PARTE.**

#### **EL TIPO DE CORRUPCIÓN EN EL DEPORTE EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL**

<b>CAPÍTULO XIII. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>451</b>
1. Relevancia social y económica del deporte .....	451

ÍNDICE	21
--------	----

2. <i>Ratio legis</i> del tipo de corrupción deportiva .....	457
2.1. Pertinencia de la intervención penal para sancionar la corrupción en el deporte .....	460
2.2. Incorporación al Código penal y ubicación sistemática del delito .....	462
2.2.1. Incorporación al Código penal .....	462
2.2.1.1. Justificación de la reforma de 2015 .....	463
2.2.2. Ubicación sistemática del delito .....	464
3. Críticas en torno a la figura de fraude deportivo .....	467
3.1. Ausencia de necesidad de intervención penal en la materia .....	468
3.2. Argumentos referidos a deficiencias de técnica legislativa .....	469

#### **CAPÍTULO XIV. EL DELITO DE CORRUPCIÓN DEPORTIVA EN LA NORMATIVA SUPRANACIONAL Y EN EL DERECHO COMPARADO .....**

1. Introducción .....	473
2. Normativa supranacional .....	474
2.1. El Convenio del Consejo de Europa sobre Manipulación de Competiciones Deportivas .....	474
3. Derecho comparado .....	475
3.1. Italia .....	475
3.1.1. Algunos comentarios: bien jurídico y modalidades delictivas .....	478
3.2. Portugal .....	479
3.2.1. Algunos comentarios: bien jurídico y modalidades delictivas .....	480

#### **CAPÍTULO XV. ANÁLISIS DEL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO .....**

483

1. Introducción .....	483
2. El interés tutelado según el Consejo de Europa .....	484
3. Referencias al bien jurídico en las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015 .....	485
4. Opiniones doctrinales en torno al bien jurídico protegido en el delito de fraude deportivo .....	486
4.1. Ausencia de un bien jurídico relevante .....	487
4.2. Tutela de valores deportivos: el <i>fair play</i> o juego limpio .....	488
4.2.1. La “integridad deportiva” como bien jurídico .....	490
4.2.2. Críticas a la tutela de valores deportivos .....	491
a) Críticas a la protección del juego limpio o <i>fair play</i> .....	491
b) Críticas al bien jurídico “integridad deportiva” .....	493
4.3. Protección de la dimensión económica del deporte .....	493
4.3.1. Críticas a la preservación de la vertiente económica del deporte .....	495
4.4. Corrientes eclécticas .....	496
5. Toma de postura .....	497
 <b>CAPÍTULO XVI. LOS SUJETOS DEL DELITO</b> .....	501
1. Apunte introductorio .....	501
2. Los sujetos activos en el delito de corrupción en el deporte .....	502
2.1. Los sujetos en la modalidad pasiva .....	502
2.1.1. Teoría mayoritaria: directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva y deportistas, árbitros o jueces .....	503
2.1.1.1. Directivos, administradores, empleados o colaboradores ...	504
a) Directivo .....	505
b) Administrador .....	507

ÍNDICE	23
c) Empleado .....	508
d) Colaborador .....	510
2.1.1.2. "De una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de esta" .....	511
2.1.1.3. Deportistas, árbitros o jueces .....	515
a) Deportista .....	516
b) Árbitro o juez .....	517
2.1.2. Teoría minoritaria .....	521
2.1.3. Toma de postura .....	523
2.1.4. Exclusiones del círculo de sujetos activos .....	523
a) El empresario o titular de la entidad deportiva .....	524
b) Otras personas .....	524
2.1.5. La persona interpuesta .....	525
2.2. Los sujetos en la modalidad activa .....	526
2.2.1. Teoría mayoritaria: delito especial con enumeración subjetiva amplia .....	526
2.2.2. Teoría alternativa: delito común .....	529
2.2.3. Teoría minoritaria: delito especial con restricción subjetiva .....	531
2.2.4. Toma de postura .....	531
<b>CAPÍTULO XVII. LAS CONDUCTAS TÍPICAS</b> .....	533
1. Introducción. Elementos comunes con la corrupción privada .....	533
2. Elementos típicos definidos por remisión a la corrupción privada .....	535
2.1. Verbos rectores y conductas típicas .....	535
2.2. Objeto material: beneficio o ventaja injustificados .....	539

3. Elementos característicos de la corrupción deportiva .....	539
3.1. Finalidad específica: predeterminación o alteración deliberada y fraudulenta de un resultado deportivo .....	539
3.1.1. Consideraciones previas .....	539
3.1.2. La manipulación del resultado: ¿aspecto subjetivo o elemento objetivo del tipo? .....	540
3.1.3. Relación entre el elemento del “favorecimiento indebido” y la “finalidad de predeterminar o alterar” el resultado .....	542
3.1.4. “Predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta” .....	544
3.1.4.1. Controversia jurídico-penal en torno a las <i>primas</i> .....	549
3.2. Ámbito del delito: prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva .....	553
3.2.1. Prueba, encuentro o competición deportiva .....	553
3.2.2. Naturaleza del acontecimiento deportivo .....	554
3.2.2.1. Restricción del ámbito de aplicación delictivo en 2010 .....	554
3.2.2.2. Restricción del ámbito de aplicación delictivo desde 2015 .....	558
a) “Especial relevancia económica” .....	560
b) “Especial relevancia deportiva” .....	562
c) Mecanismo de aplicación del tipo básico .....	564
d) Problemas interpretativos .....	565
4. El tipo subjetivo del delito .....	566

#### **CAPÍTULO XVIII. CUESTIONES SOBRE PENALIDAD. TIPO ATENUADO Y TIPO AGRAVADO .....**

1. Penalidad .....	569
2. El tipo atenuado del artículo 286 bis. 3 CP .....	572
3. Los supuestos agravados del artículo 286 quater CP .....	574



ÍNDICE	25
a) Finalidad de influir en el desarrollo de juegos de azar o apuestas .....	575
b) Actos cometidos en una competición deportiva oficial de ámbito estatal calificada como profesional o en una competición deportiva internacional .....	578
<b>CAPÍTULO XIX. CONCURSOS</b> .....	583
1. Concurso con el delito de estafa .....	583
2. Concurso con el delito de dopaje .....	586
3. Otras situaciones concursales .....	588
<b>CAPÍTULO XX. APUNTES SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS</b> .....	591
1. Breves consideraciones .....	591
CONCLUSIONES .....	595
INTRODUÇÃO .....	611
RESUMO .....	621
CONCLUSÕES .....	625
BIBLIOGRAFÍA .....	643



**ABREVIATURAS**

ACB	Asociación de Clubes de Baloncesto
ASOBAL	Asociación de Clubes de Balonmano de España
BOE	Boletín Oficial del Estado
CE	Constitución Española
CGPJ	Consejo General del Poder Judicial
CONMEBOL	Confederación Sudamericana de Fútbol
CP	Código Penal
D.M.	Decisión Marco
DOUE	Diario Oficial de la Unión Europea
E.M. (EEMM)	Estado (s) Miembro (s)
ETS	<i>European Treaty Series</i> (Convenios del Consejo de Europa)
FIBA	Federación Internacional de Baloncesto
FIFA	<i>Fédération Internationale de Football Association</i>
FROB	Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
GRECO	Grupo de Estudios contra la Corrupción (Consejo de Europa)
<i>EEG</i>	<i>Equipo de evaluación del GRECO</i>
JAI	Justicia y Asuntos de Interior
LD	Ley del Deporte
LO	Ley Orgánica
LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial

OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OEA	Organización de Estados Americanos
ONG (s)	Organización (es) no gubernamental (es)
ONU	Organización de Naciones Unidas
RD	Real Decreto
RDD	Real Decreto (Reglamento) de Disciplina Deportiva
TAS	Tribunal Arbitral del Deporte
TJCE	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
StGB	<i>Strafgesetzbuch</i>
S(S)TJCE	Sentencia (s) del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
S(S)TS	Sentencia (s) del Tribunal Supremo
UE	Unión Europea
UEFA	Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol

## INTRODUCCIÓN

Realizar una tesis doctoral es o, cuanto menos, debe ser, algo más que una simple aspiración académica. No se trata únicamente de conseguir la capacidad científica necesaria para desarrollar una investigación independiente dentro del contexto universitario, sino de adquirir las competencias y habilidades que permiten hacerse preguntas y ser crítico para así progresar en una concreta rama del conocimiento. En mi opinión, la investigación debe estar orientada también a resolver problemas de la realidad; debe verse como una herramienta útil para la sociedad, capaz de detectar obstáculos o deficiencias y de aportar, en lo posible, soluciones adecuadas.

Esta fue la motivación que me empujó a iniciar mis estudios de doctorado y a decidir formarme dentro del Programa de Doctorado “Estado de Derecho y Gobernanza Global” de la Universidad de Salamanca, centrandome en algunos aspectos jurídicos relacionados con la corrupción. Y dentro de ella, pronto descubrí que me despertaba una especial curiosidad la llamada corrupción privada, corrupción en el sector privado o, según la redacción original del Código penal español – tras la reforma obrada por la Ley Orgánica 5/2010–, corrupción entre particulares. Una categoría jurídica novedosa –tanto así que durante mis estudios de Máster aún no formaba parte del acervo jurídico vigente en nuestro país–, que era definida por la escasa doctrina existente en ese momento como conductas “con cuerpo de cohecho y alma de otra cosa”; comportamientos que comparten con los clásicos delitos de cohecho la denominación genérica de “corrupción” pero cuyo ámbito lesivo está fuera de la Administración pública, centrado en el ámbito económico, comercial o empresarial –y en el caso español, también en el deportivo– y en cuyos ilícitos no interviene, en ninguna de las dos caras del acuerdo corrupto, autoridad o funcionario público alguno.

Respecto de la tradicional corrupción administrativa –aquella basada en el abuso de un poder público para obtener una ventaja ilegítima en beneficio privado– era entonces y sigue siendo comúnmente conocido y aceptado –así ha sido puesto de relieve, entre otras instituciones, por Naciones Unidas– que se trata de un fenómeno social, político y econó-

mico complejo que afecta a todos los países del mundo. La preocupación por esta, como tipología delictiva, se considera perjudicial para las instituciones democráticas; responsable de la desaceleración del desarrollo económico y caldo de cultivo idóneo para la inestabilidad política. Se relacionan estos ilícitos en el sector público con la destrucción de las instituciones democráticas, el socavamiento del Estado de Derecho y el imperio de la ley y la deslegitimación de la burocracia y de las estructuras administrativas. Todo ello supone una retracción de la inversión pública y privada y un desincentivo a la creación de tejido empresarial, por las dificultades de soportar los costes derivados del pago de sobornos.

En efecto, la corrupción es una de las manifestaciones delictivas más características de las sociedades globalizadas, habiendo adquirido en los últimos años un innegable carácter transnacional y relacionándose, de forma clara, con otras formas de delincuencia económica organizada. Los modelos de corrupción se copian y transmiten de unos países a otros y, del mismo modo, los beneficios ilegales que esta genera se transfieren a distintos territorios, implicando a entidades, empresas e instituciones financieras de distintas localizaciones. Por todo esto, no es de extrañar que los gobiernos, las organizaciones supranacionales y las no gubernamentales y las empresas transnacionales se preocupen por la dimensión global de la corrupción.

Siendo ello así, como apuntamos hace un momento, en los últimos años la inquietud de los diversos actores sociales por los efectos perversos de la corrupción se ha extendido también a las conductas que se manifiestan en el ámbito privado. De nuevo por efecto de la globalización, especialmente desde finales del siglo pasado, se ha visto incrementado exponencialmente el comercio transfronterizo de bienes y servicios, por lo que la corrupción en el sector privado ha dejado de ser un problema meramente interno de un Estado para pasar a ostentar relevancia transnacional. Es por ello que se aborda más eficazmente mediante una actuación conjunta entre todos los países. En este sentido, el ofrecimiento y la aceptación de beneficios indebidos en el sector privado buscan predisponer la decisión sobre un acto o negocio –consistente en la adquisición de bienes o servicios– a favor de quien los da, respecto de quien los recibe, frente los demás competidores, suponiendo ello una distorsión de la competencia; alteración que puede provocar que la posición en el mercado de determinados empresarios dependa más de la concesión de un soborno que de las mejores prestaciones, calidad o precio de sus productos o servicios.

Estos y otros reflejos del potencial lesivo de estas conductas han acentuado la preocupación de los organismos supranacionales, focalizando su actuación –en el marco de la llamada “tolerancia cero” contra la corrupción– en la procura de una política criminal común, en aras a salvaguardar el correcto funcionamiento de las Administraciones públicas, de un lado, y de los sistemas de mercado, con especial atención a la tutela de la competencia, de otro. Destacan en este punto, como iniciativas más relevantes, los Convenios Civil y Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa de 1999 y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003. Entre los hitos más reseñables que contienen, se encuentra la necesidad de que los Estados prevean como delito determinadas conductas de corrupción relacionadas con el pago de sobornos, tanto en la esfera pública como en la privada. Con ello, se refuerza la presencia del Derecho penal en el ámbito económico, pasando a castigar comportamientos que hasta pocos años atrás, quedaban fuera del radio de acción de la más contundente herramienta del *ius puniendi* estatal. También las instituciones comunitarias se han ocupado de elaborar textos y normativas en contra de la corrupción. En el ámbito de estudio que nos ocupa, no puede dejar de mencionarse la Decisión Marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado, que, al igual que las anteriormente citadas, impone la necesidad de los Estados de criminalizar los comportamientos corruptos más allá del ámbito público. Esta es precisamente una de las razones de peso que llevaron al legislador penal español de 2010, tal y como se refiere expresamente en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, a introducir el delito de corrupción entre particulares en el Código penal, concretamente en el artículo 286 bis, como un delito más contra el mercado y los consumidores.

Pero no solamente a nivel normativo supranacional o internacional se ha puesto de relieve la importancia de combatir, desde todos los frentes, los actos de corrupción. De unos años a esta parte, singularmente desde el inicio de la grave crisis económica que ha soportado el mundo –y de la que todavía no nos hemos recuperado–, la ciudadanía se ha mostrado más concienciada respecto de los daños que este fenómeno delictivo nos infringe a todos; hemos comprendido que nos afectan las consecuencias de unas prácticas indeseables que, hasta hace unas décadas, fueron a lo sumo consideradas delitos sin víctimas. No es así en

la actualidad: sabemos que todos, como ciudadanos y como parte de la sociedad, somos titulares de una serie de valores, de unos bienes jurídicos de naturaleza colectiva, que son algo más que la mera suma de intereses particulares y respecto a los cuales demandamos que los Estados se obliguen a tutelar. En el caso español, la importancia que otorgamos a estos ilícitos, como uno de los problemas más graves que aquejan a nuestra sociedad, se refleja en los Barómetros que, periódicamente, realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas; indicador en el que, todavía hoy, la corrupción y el fraude ocupan el segundo lugar como el principal problema que existe actualmente en nuestro país, solo por debajo del paro, y cuya posición se mantiene desde finales del año 2012.

Centrándonos en la corrupción entre particulares, la repercusión de distintos casos que hemos ido conociendo en los últimos años ha venido propiciada por una mayor atención de los medios de comunicación. En el contexto europeo, han sido conocidos varios casos clásicos, algunos de ellos en Alemania, como el de *Korkengeld* –un supuesto en el que los representantes de una marca de champán francés ofrecieron 35 pfennigs por cada botella de su marca vendida a los camareros de distintos locales, con el fin de que recomendasen su producto y todo ello con conocimiento del dueño del negocio–, el escándalo de las basuras en Colonia –en el que, en el proceso de adjudicación a sobre cerrado del servicio de recogida de basuras, una de las empresas sobornó al representante del adjudicador para que le comunicara la oferta más económica para así mejorarla– o el caso del *Allianz-Arena* de Múnich –en el que se abonaron “comisiones” a fin de conocer información relevante para la adjudicación de la construcción de dicho estadio–, o, de otro lado, el caso *Siemens* que destapó una red de pagos millonarios por parte de dicha empresa a lo largo del mundo.

En España, a pesar de que la regulación penal de este delito –como hemos adelantado y podrá verse en esta tesis doctoral– es relativamente reciente y no exenta de ciertas oscuridades que trataremos de depurar a lo largo de nuestro trabajo, la expresión “corrupción privada” ha comenzado a adquirir cierta notoriedad en los medios, merced en gran parte a la aparición de ciertos casos sobre los que, sin embargo, todavía no ha recaído sentencia firme por parte de jueces y tribunales, si bien alguno de ellos se encuentra, al momento de redactar estas líneas, en fase de investigación. Pueden mencionarse el caso *Rato* –en que se investigaba al ex vicepresidente del Gobierno por supuestas irregulari-



dades en sus negocios privados y por el que se vieron indicios de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares; proceso actualmente archivado de forma provisional–, el caso *Neymar* –en el que se abrieron diligencias contra el ex jugador del F.C. Barcelona, el Santos y los presidentes de ambos clubes por estafa y corrupción entre particulares; en estos momentos en fase de Juicio Oral en la Audiencia Nacional– o la operación *Soule* –trama que investiga al todavía presidente de la Real Federación Española de Fútbol por delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental–.

Si, como decíamos anteriormente, el cumplimiento de las obligaciones supranacionales ratificadas por España se convirtió en el argumento principal del legislador penal para incorporar la corrupción privada al elenco de delitos previstos en el ordenamiento, distinto es el supuesto del fraude en el deporte, modalidad típica específica también incluida en el artículo 286 bis del Código, concretamente en el apartado 4º. En este caso, la iniciativa incriminatoria partió del poder legislativo interno y, ni la propia regulación ni su ubicación sistemática, fueron suficientemente motivadas, requisito que hubiera sido deseable en base a los principios rectores de un Derecho penal democrático.

Así, ante la falta de sustento normativo supranacional –el único instrumento existente es el Convenio del Consejo de Europa sobre Manipulación de Competiciones Deportivas, de fecha posterior a la incorporación del tipo en nuestro Código y aún no ratificado por España– y la insuficiente labor de justificación de nuestro redactor, habremos de buscar la razón de ser de la figura en la alarma social que generan los posibles hechos de corrupción en un ámbito tan emblemático como el deporte. En este contexto se explica la iniciativa de Proyecto de Ley contra el fraude en el deporte de 2009 –que partió de la Liga de Fútbol Profesional y a la que se sumaron otras instituciones como la Liga ACB de baloncesto–, que apostaba por la previsión penal de esta clase de conductas ilícitas, siguiendo la corriente político-criminal de “tolerancia cero” contra la corrupción: el objetivo declarado era luchar contra la “compra de partidos”, las “primas a terceros” y los sobornos a jugadores y árbitros tendentes a adulterar de modo fraudulento el resultado de un evento deportivo.

La entrada en vigor de la modalidad de fraude deportivo coexistió en el tiempo con uno de los primeros casos con mayor trascendencia mediática, el conocido como caso *Brugal*, en el que, al hilo de una investigación por delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en varias localidades de Alicante, se descubrió una trama de concesión masiva de dádivas para manipular resultados deportivos en la temporada 2009-2010 y propiciar el ascenso a Primera División del Hércules C.F. El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante decidió, sin embargo, no dar traslado de lo instruido a las autoridades deportivas, en contra de lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, por considerarlo una intromisión a la intimidad de los investigados, en la medida en que la figura delictiva no se encontraba todavía en vigor. Este hecho fue utilizado por los partidarios de la criminalización de la corrupción en el deporte para reforzar su postura, aludiendo a la ineficacia de los medios de investigación de la disciplina deportiva y la necesidad de contar con mecanismos probatorios propios del ordenamiento penal.

Desde la vigencia de la figura, se resaltan tres investigaciones judiciales que han llevado a la aplicación de este delito, dos de ellas relacionadas con el fútbol. La primera, actualmente archivada –aunque la Fiscalía ha recurrido esta decisión– en torno a la manipulación del resultado del encuentro Levante-Zaragoza, correspondiente a la 38ª jornada de Primera División de la temporada 2010-2011. La segunda, conocida como el caso *Osasuna*, en la que se dirime si varios dirigentes del club “rojillo” sobornaron a varios jugadores del Betis para que el equipo verdiblanco cosechara determinados resultados que beneficiaban al equipo navarro durante el final de la temporada 2013-2014. Actualmente, el caso se encuentra en fase de Juicio Oral. Por último, también debe citarse la llamada operación *Futures*, vinculada a supuestos amañados de partidos de tenis para apuestas por internet, que salió a la luz en diciembre de 2016 y por la que, en su momento, se detuvo a 34 personas.

Volviendo al plano jurídico, deben traerse a colación, en este momento, dos cuestiones referidas unas líneas atrás. De un lado, la inexistencia de resoluciones judiciales firmes, en forma de sentencia, que apliquen ninguna de las previsiones contenidas en el artículo 286 bis del Código penal. Esta realidad fue percibida por el redactor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código penal, para acometer una reforma profunda de los tipos objeto de esta investiga-

ción; cambios que son analizados en profundidad en los distintos apartados de esta tesis y cuyo objetivo perseguido, según el propio legislador, es “garantizar la aplicación de estos preceptos en todos los casos en los que, mediante el pago de sobornos, en beneficio propio o de tercero, se obtienen posiciones de ventaja en las relaciones económicas”.

De otro lado, exponemos nuestro propósito de que la investigación que presentamos pueda ser de utilidad en la aplicación práctica de las dos figuras delictivas estudiadas: los tipos de corrupción entre particulares y en el deporte. Es por ello que, en el examen de cada uno de los aspectos que componen este trabajo, se parte, como no puede ser de otro modo, de la literalidad del artículo 286 bis actualmente vigente, pero sin dejar de lado la versión original, en la medida en que su estudio sirva para dar luz a algunos de los puntos controvertidos de ambos tipos penales.

Se ha puesto de relieve por parte de la doctrina que los tipos del artículo 286 bis son fruto de una política-criminal volátil, en la que el legislador “no está muy seguro de lo que hace”, llegando a sostener que “no se ve razón para [afirmar] que (...) una tipificación *ad hoc* del soborno privado vaya a resolver un problema aún más complicado en su vertiente indagatoria, tanto dogmática como político-criminal y procesalmente”.<sup>1</sup> En este punto es en el que esperamos que esta tesis pueda ser de provecho y ello ha motivado los esfuerzos por concretar y clarificar los distintos elementos típicos de ambas figuras delictivas.

Por último, debemos reconocer algo que, no por evidente, debe dejar de apuntarse: la lucha contra la corrupción, en cualquiera de sus ámbitos, pero, en lo que aquí nos interesa, en las esferas privadas de la empresa y el deporte, no puede desplegarse únicamente desde la ley o desde la labor de jueces y tribunales, ni tan siquiera exclusivamente desde la Universidad y el ámbito académico. Es necesaria una anterior política educativa y preventiva, que posibilite la concienciación e implicación de la sociedad civil en su conjunto para liderar la lucha global anticorrupción. En la búsqueda de este fin, es reseñable la labor de *Transparency International*, organización no gubernamental orientada al combate contra este fenómeno ilícito, tanto a nivel nacional como

---

<sup>1</sup> QUERALT JIMÉNEZ, J.J.: “Notas sobre la corrupción privada en el Proyecto de Código Penal”, en *Iuris: Actualidad y práctica del Derecho*, nº 147, marzo 2010, pp. 15 y 17-18.

internacional, a través de la construcción y el fortalecimiento de sistemas de integridad y la comunicación de valores de integridad y rendición de cuentas. Y, en este sentido, tengo el privilegio de participar en esta tarea como miembro, desde su constitución en mayo de 2016, de la Comisión de Integridad y prevención de la corrupción en el Deporte de Transparencia Internacional España, capítulo nacional de dicha organización.

Como hemos tratado de exponer en la Primera Parte de esta tesis doctoral, la fenomenología de la corrupción despliega sus efectos perniciosos en múltiples sectores de nuestra sociedad y es labor de todos –especialmente de quienes dedicamos a su combate nuestro estudio o desempeño profesional–, por un lado, concienciar de que nos encontramos ante un problema que repercute a la sociedad en su conjunto –por la distracción de recursos públicos y privados que lleva aparejada– y, por otro lado, educar, prevenir y, en su caso, prever mecanismos sancionatorios proporcionados –sin renunciar a que estos posean naturaleza penal–, siempre que estén orientados a la lucha eficaz contra estos ilícitos y se respeten los principios y límites propios de un Estado social y democrático de Derecho.

## CONCLUSIONES

1. La corrupción es un fenómeno poliédrico, complejo, que muestra sus efectos lesivos en todos los sectores de una sociedad. Como manifestación delictiva, es concebida como una de las categorías típicas más características de la comunidad globalizada, destacando su transnacionalidad y sus vínculos con otras expresiones de criminalidad económica y delincuencia organizada. Por ello, en los últimos años, se ha intensificado la preocupación y concienciación respecto a la misma por parte de actores políticos y sociales, públicos y privados.
2. Una de las dificultades a la hora de abordar los comportamientos de corrupción viene dada por la ausencia de una definición universalmente válida, que acote las manifestaciones que han de ser consideradas como ilícitas. Así, las aproximaciones a un concepto realizadas desde diferentes disciplinas científicas han resultado insuficientes e incompletas. Tampoco desde el plano estrictamente jurídico ha sido posible, hasta el momento, llevar a término este propósito, en la medida en que se constata que la corrupción es una categoría delictiva cambiante: será entendida por tal lo que la norma determine en cada territorio, en cada momento histórico.
3. En el ámbito jurídico-penal, se ha experimentado una evolución de lo relevante desde el ámbito público a las manifestaciones en diversas esferas del sector privado. Por ello, –al menos a efectos de esta investigación–, la clave para definir la corrupción será el abuso o la utilización desviada de un poder de decisión, traducido en una actuación contraria a las normas o reglas que rijan el sector donde el sujeto desarrolle su actividad, con la expectativa de obtener una ganancia privada.
4. Un correcto tratamiento penal de las conductas de corrupción privada, objeto fundamental de esta investigación, requiere no solamente explorar la fenomenología de la corrupción, sino también acotar los parámetros de legitimidad de la intervención de dicha rama del ordenamiento en el ámbito socioeconómico, naturaleza que, a juicio de nuestro legislador, ostentan tales delitos.

En concreto, es tarea del jurista comprobar que existe un interés valioso para la sociedad y digno de tutela jurídica tras la incriminación de cualquier conducta. Y, tras ello, se precisa verificar que la concreta regulación cumple los más básicos principios limitativos del *ius puniendi* estatal, propios de un Estado social y democrático de Derecho. Debe procurarse que la descripción de conductas prohibidas satisfaga suficientemente los principios de lesividad, de proporcionalidad y de intervención mínima. En este sentido, se ha sostenido que la actuación del Derecho penal en el ámbito socioeconómico se justifica porque reacciona ante comportamientos altamente lesivos, que se incardinan en el contexto del provecho económico, realizados por sujetos que poseen una cierta cualificación –o, de otro lado, de los que se predicen especiales funciones y obligaciones para con la sociedad– y cuya comisión requiere la utilización de estructuras e instrumentos compartidos con la actividad económica lícita.

5. Respondiendo afirmativamente a lo anterior, es pertinente también, a fin de dotar de un mayor rigor a la investigación que presentamos, apreciar si posee legitimidad la sanción de los comportamientos de corrupción privada a través del Derecho penal. La clásica doctrina española sostuvo un debate aportando, como argumentos a favor de la tipificación, el cumplimiento de las obligaciones supranacionales contraídas por nuestro país y, así mismo, la ineficacia de otras disciplinas jurídicas para tutelar la competencia. En contra, sin embargo, se adujo la ausencia de un debate previo acerca del merecimiento y necesidad de pena de las conductas previstas en el artículo 286 bis CP, así como la falta de antijuridicidad material necesaria para considerar tales comportamientos como delito, en aplicación de los principios limitadores del *ius puniendi*.

En nuestra opinión, los argumentos expuestos son reflejo del intenso debate que suscitó la introducción de esta figura en nuestro Código, pero, tras siete años de vigencia del tipo en nuestro ordenamiento, solo cabría interrogarse ahora en torno a la legitimidad del bien jurídico protegido y a la adecuación de la concreta literalidad típica a los principios rectores del Derecho penal en un Estado social y democrático de Derecho; aspectos sobre los que se desarrolla el núcleo de esta tesis doctoral.

**6.** A efectos de este trabajo, elaboramos una definición de corrupción entre particulares según la cual incluimos “toda utilización desviada o abusiva de facultades o poderes derivados de una posición, cargo o desempeño empresarial o mercantil que, mediante el quebranto de una relación de confianza o la infracción de lo obligado por el sistema normativo referente, persigue la obtención de un beneficio o ventaja indebidos, y lesiona intereses económicos y de mercado relevantes”. La configuración de estos delitos comparte, por un lado, algunos elementos con las clásicas conductas de cohecho y, por otro, presenta aspectos propios –destacando que circunscribe su ámbito típico a la competencia en el mercado y no al buen funcionamiento de las Administraciones públicas–.

**7.** Se han aducido, como causas que pueden explicar la aparición de comportamientos de corrupción en el sector privado, de una parte, la influencia de la globalización y la consiguiente relajación de las fronteras nacionales y, de otra, los conocidos como procesos de privatización y la derivada confusión, en ocasiones, de lo público con lo privado. Así mismo, la literatura científica y las instituciones y organizaciones sociales han constatado que la corrupción entre particulares provoca efectos perversos en todas las esferas de una sociedad, en especial en la economía y el sistema económico constitucional –por la distorsión de la competencia, la consolidación de monopolios, el favorecimiento del crecimiento de la economía sumergida o los desincentivos al crecimiento– y en el sistema democrático, minando su legitimidad.

**8.** Decíamos en la conclusión número 5 que uno de los argumentos utilizados para justificar la incriminación de estos ilícitos, refrendado por el propio legislador, fue la necesidad por parte de España de cumplir con las obligaciones que había suscrito con las instituciones supranacionales; en concreto, con Naciones Unidas, el Consejo de Europa y las derivadas del Derecho comunitario.

Cronológicamente, el primer instrumento en ser aprobado fue el Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa –que se complementa con el Convenio civil, ambos de 1999–, que incluyó la prescripción de tipificar las conductas de corrupción activa y pasiva en el sector privado en sus artículos 7 y 8, como modalidades de soborno en una actividad mercantil a cambio de una actuación u omisión de un acto

incumpliendo los deberes. Así, esta norma supranacional configura el ilícito como una infracción de los deberes del sujeto corrupto. Esta producción normativa se completa con la existencia del GRECO, cuya labor fundamental se centra en mejorar la capacidad de los Estados parte para combatir la corrupción a través del control de cumplimiento de las prescripciones anticorrupción del Consejo de Europa. Precisamente la labor de este Grupo de Estados contra la Corrupción justifica que los distintos modelos de tipificación de estos comportamientos en el Derecho comparado se hayan relajado, aproximándose todos ellos al patrón marcado por esta organización. En un sentido similar delimita la figura la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción –elaborada en 2003–, que recomienda a los Estados parte su incriminación en el artículo 21. Por su parte, la Decisión Marco 2003/568/JAI, texto comunitario de referencia –utilizado por nuestro legislador para fundamentar la reforma introducida en la Ley Orgánica 5/2010– se dedica en exclusiva a establecer medidas de carácter penal y, así, imponer a los Estados la necesidad de sancionar a personas físicas y jurídicas por delitos de corrupción entre particulares.

9. Tradicionalmente han sido tres los criterios de incriminación de la corrupción en el sector privado en el Derecho comparado europeo. En un primer caso, el ordenamiento holandés (1967), el belga (1999) y el francés (hasta 2005) se sitúan en la línea de los instrumentos supranacionales revisados –particularmente, el Convenio del Consejo de Europa y la Convención de Naciones Unidas– y tutelan los intereses del titular o propietario de la empresa; en concreto, se busca salvaguardar la relación entre empleador y empleado y, dentro de ella, la lealtad y el cumplimiento de los deberes del segundo respecto del primero, contraídos en virtud de la relación que los une. Es la denominada tutela de la *dimensión privada* de la corrupción entre privados y pone su énfasis, consecuentemente, en el elemento típico del incumplimiento de las obligaciones. En segundo término, el ordenamiento alemán (1997) –de forma pura cuanto menos hasta la reforma del StGB de 2015 y, en la actualidad, como una de las conductas tipificadas– enfocó su respuesta penal ante esta corrupción a la protección de la competencia en el mercado. Se definió por los estudiosos como el *modelo de tutela público* y su núcleo se sitúa en el favorecimiento desleal de uno de los intervinientes en un mercado, producto de un soborno, respecto de los demás competidores. Parece ser este el patrón que inspira la literalidad de la Decisión Marco 2003/568/JAI –a pesar de que esta incluye también el elemento del incumplimiento de obligaciones– y, por



ello, se ha sostenido que es el bien jurídico declarado por el legislador español para justificar la redacción del artículo 286 bis CP. Por último, el ordenamiento italiano (2002) –hasta la reforma del *Codice civile* de abril de 2017– recogía el tercer gran criterio de criminalización de estas conductas: la tutela del patrimonio de la empresa del corrupto y, en abstracto, la protección de los intereses patrimoniales del empresario. Es la conocida como *corriente clásica*, aunque su presencia en el Derecho comparado era minoritaria. La consecuencia fundamental de este entendimiento era configurar el tipo como un delito de resultado, que exigía la verificación de un daño patrimonial concreto para poder asegurar la tipicidad de una determinada conducta.

**10.** El delito de corrupción entre particulares, junto con el subtipo de corrupción en el deporte, fue incorporado a nuestro ordenamiento jurídico-penal a través de la reforma del Código obrada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Inicialmente previsto en la Sección 4ª –“De la corrupción entre particulares”– del Capítulo XI –“De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores”– del Título XIII –“Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”–. En esta versión de vigencia, la figura de corrupción entre particulares se preveía en los tres primeros apartados del artículo 286 bis CP, quedando reservado el párrafo 4º para la previsión de la corrupción en el deporte.

La falta de aplicación práctica del artículo pudo ser el motivo que llevó al legislador de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, a acometer una profunda modificación del paradigma jurídico en torno a estos delitos. En primer término, se alteró la intitulación de la Sección 4ª, pasando a ser denominada “Delitos de corrupción en los negocios” y a incluir, junto con los ilícitos de corrupción privada, el de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, antes acogido en el antiguo artículo 445 CP. En lo que respecta a la literalidad típica, se intercambió el orden de tipificación de las modalidades típicas de corrupción pasiva y activa en el sector privado. En la versión vigente, además, se incluye un apartado 5º al artículo 286 bis –encargado de definir, a través de una cláusula de remisión, el concepto de “sociedad”; aplicable a las dos figuras delictivas del precepto– y un nuevo artículo 286 quarter CP destinado a prever supuestos “de especial gravedad”, aplicables a todas las conductas descritas en la Sección 4ª.

**11.** Durante la vigencia de la redacción original del tipo de corrupción privada, la cuestión en torno al bien jurídico protegido suscitó un intenso debate entre la doctrina. Y ello a pesar de la voluntad declarada del legislador de la Ley Orgánica 5/2010 de salvaguardar la “competencia justa y honesta” como mecanismo de tutela de las “reglas de buen funcionamiento del mercado”. Las posiciones dominantes oscilaron entre considerar tutelada la relación de lealtad entre el empresario y el trabajador y la protección de la competencia leal en el mercado. La *mens legislatoris*, de un lado, y la presencia del elemento del incumplimiento de obligaciones, de otro, llevaron a cierto sector de expertos a apostar por la tutela de un modelo híbrido o mixto, según el cual los ataques a la competencia, para ser penalmente relevantes, debían traducirse, también, en una actuación en contra de los deberes de fidelidad propios de la relación laboral interna. En este sentido, gozó de un cierto éxito la construcción doctrinal que circunscribía el objeto de tutela a la competencia *ad intra* y *ad extra*.

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015 la tutela de la competencia leal sale reforzada. La nueva intitulación de la Sección 4<sup>a</sup>, junto con la eliminación del elemento típico del incumplimiento de las obligaciones –sustituido por el del favorecimiento indebido frente a otros– refuerzan la protección del bien jurídico “competencia en el mercado”. La propia Exposición de Motivos de la citada Ley Orgánica sostiene que en la nueva Sección “se incluyen los delitos de pago de sobornos para obtener ventajas competitivas”.

En este sentido, el bien jurídico “competencia leal” que se defiende en este trabajo se conforma como un interés supraindividual y complejo, formado, de un lado, por un objeto de protección inmediato y otro de carácter mediato. El primero estaría conformado por los intereses y expectativas económicas de los competidores, concretados en la participación en el mercado sin desincentivos derivados de sobornos. Ello orientado a la salvaguarda de un interés más remoto, delimitado en el respeto a las reglas del buen funcionamiento de mercado; esto es, del orden concurrencial previsto en nuestra Constitución. Con todo, enunciamos esta “competencia leal” como “la protección de los intereses y expectativas económicas de los competidores a participar en un sector de actividad regido por los principios propios de la concurrencia leal, como medio para salvaguardar las reglas del funcionamiento del mercado derivadas del sistema económico constitucional”.

**12.** Los delitos de corrupción entre particulares se consideran ilícitos *de participación necesaria*, por cuanto, a pesar de que la consumación delictiva no requiere la perfección del acuerdo corrupto, sí se exige la intervención tendencial de varios sujetos: uno que promete, ofrece o concede el soborno; otro que lo solicita, acepta o recibe, así como otros posibles coexistentes –personas interpuestas, beneficiarios, etc.–. En ese punto, se puede afirmar que los tipos de corrupción –también los estudiados en esta tesis– son figuras plurisubjetivas. Así, por un lado, la modalidad de corrupción privada pasiva –prevista en el primer apartado del artículo 286 bis CP– está configurada como un delito especial impropio, que solo puede ser cometido por el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad, actuando por sí mismo o a través de una persona interpuesta. Por otro lado, la correlativa modalidad activa se concibe como un delito común, que puede ser perpetrado por cualquier persona, sin necesidad de que le sea exigible cualidad específica alguna. Esta última afirmación no obsta para reconocer que la realidad práctica puede poner de manifiesto que lo habitual será que el beneficio indebido sea prometido, ofrecido o concedido por una persona con alguna vinculación o interés en el mercado –singularmente el directivo, administrador, empleado o colaborador de una sociedad o empresa mercantil–, pero debe apostarse por considerar que el tipo penal no restringe, a priori, la cualidad de sujeto activo de la forma activa de corrupción en el sector privado.

**13.** En lo que respecta a las conductas típicas, la descripción contenida en los dos primeros apartados del precepto estudiado convierte el tipo de corrupción privada en un delito de mera actividad, de peligro abstracto y de encuentro, en la medida en que las acciones del sujeto corruptor y del corrupto tienden a encontrarse –aunque se insiste que, para la consumación delictiva no es preciso la efectiva entrega del beneficio indebido ni la realización del acto u omisión corrupta–, así como tampoco se exige la efectiva producción de un daño; basta con la sola realización de las acciones típicas. Es considerado también un tipo mixto alternativo, por cuanto la verificación de cualquiera de las conductas descritas supone la consumación de la figura. La forma pasiva se consuma, en primer término, con la recepción, solicitud o aceptación de un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, para sí o para un tercero. La cara activa, en segundo término, requiere la

promesa, ofrecimiento o concesión de tal beneficio o ventaja –que puede darse en provecho del sujeto activo o de terceros–.

**14.** La eliminación del elemento típico del incumplimiento de las obligaciones, con la reforma de 2015, fue sustituida por la dicción “como contraprestación para favorecer indebidamente a otro”, en la redacción del apartado primero y “como contraprestación para que le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a otros”, en el párrafo segundo. Esta alteración de la redacción típica no supone, sin embargo, potenciar el carácter sinalagmático de las prestaciones objeto del pacto corrupto –que, recuérdese, no es necesario que se agote para hablar de consumación delictiva–, sino que refuerza la relación causal entre el beneficio o ventaja no justificados y la actuación del corrupto. Dicho favorecimiento puede ir en provecho del corruptor o de un tercero, tanto en la modalidad activa como pasiva de corrupción privada, a diferencia de lo que sucedía con la redacción original del tipo en la que, dentro de la óptica de corrupción pasiva, la literalidad daba a entender que solo era reprochable el acto tendente a favorecer “a quien le otorga o del que espera el beneficio o ventaja”.

**15.** El ámbito de aplicación típico, tras la modificación de 2015, se extiende a supuestos “en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales”. Con esta nueva previsión, que elimina el calificativo “profesionales” referido a los servicios e incorpora la expresión “relaciones comerciales” –respecto del texto producto de la Ley Orgánica 5/2010–, se amplía el contexto mercantil o comercial en el que se pueden verificar conductas de corrupción privada merecedoras de sanción penal, llegando a incluir cualquier relación que anticipe o que incluso no implique en sentido estricto la contratación de bienes y servicios, siempre que pueda quedar abrigada por la descripción típica.

**16.** El delito de corrupción entre particulares se consuma, exclusivamente, a través de una actuación dolosa, siendo posible, en principio, la apreciación del dolo en todas sus categorías, incluida el dolo eventual. Esta tesis se fundamenta en entender que el favorecimiento indebido objeto de la contraprestación corrupta no posee la condición de elemento subjetivo del injusto –pues, de lo contrario, solo podría aceptarse la comisión delictiva a título de dolo directo–. En este sentido, se reconoce a este elemento típico una cierta carga subjetiva, como agente motivador de la voluntad del corrupto, pero no se desconoce su potencial desde el punto de vista objetivo, como configurador de la conducta

típica. Esta forma de entender el favorecimiento encaja mejor con la redacción de la norma tras la reforma de 2015 y aporta, además, efectos procesales positivos al reducir la carga probatoria de aspectos subjetivos que pueden resultar de difícil acreditación.

Por otra parte, no es posible la sanción penal de la corrupción entre particulares a título de imprudencia, por no estar expresamente prevista esta posibilidad en el artículo 286 bis CP.

**17.** En sede de tipo del injusto, se hace difícilmente imaginable que a las conductas de corrupción privada le puedan ser de aplicación alguna de las causas de justificación genéricas, así como tampoco parece adecuado atribuir tal valor al instituto jurídico del consentimiento. Del mismo modo, tampoco el precepto prevé ninguna causa de justificación específica. De otro lado, la culpabilidad podría, hipotéticamente, verse afectada por algunos supuestos de error, en concreto, de prohibición. Sin embargo, el radio de acción del delito –recuérdese, el ámbito del mercado, la compraventa de mercancías y la contratación de servicios– hace complicado sostener el desconocimiento del ilícito penal con efecto exculpatorio. En este sector de actividad participan personas generalmente con conocimientos; ámbito en el que, además, ya rigen normas sectoriales que prohíben, en sede administrativa, conductas muy similares a las sancionadas penalmente. En este punto, juegan un papel muy relevante también los códigos de buenas prácticas y de *compliance* adoptados por un cada vez mayor número de empresas.

**18.** Las consecuencias jurídico-penales derivadas de la comisión de este delito son, cumulativamente, la de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja. Resulta desmedida la atribución acumulada de tres consecuencias jurídicas severas, a todas luces desproporcionada en comparación con lo previsto en otros delitos socioeconómicos, como la estafa –en la que, además, se exige la producción de un concreto daño patrimonial, elemento ausente en la regulación de la corrupción entre particulares–.

De la horquilla de prisión recogida en el artículo 286 bis se destaca que excede de lo mandado por la Decisión Marco 2003/568/JAI, instru-

mento del que –según declara nuestro legislador– trae causa la introducción de esta figura delictiva en nuestro ordenamiento. Por otra parte, aunque se han resaltado las bondades de la pena de multa, en abstracto, para la lucha contra la delincuencia económica, la concreta elección por nuestro legislador de la multa proporcional puede revelarse como inadecuada –desde un punto de vista, por cuanto será de compleja aplicación en los casos en los que el beneficio o ventaja no revistan naturaleza económica y porque su aplicación puede convertir la figura en un delito de resultado y, desde otra óptica, por vincular la cuantía al valor del beneficio o ventaja y no a la entidad de la lesión irrogada al bien jurídico–, debiendo haberse optado por el sistema de días-multa. En lo que se refiere a la pena de inhabilitación especial, debe resaltarse que su inclusión en el tipo español fue derivada, de nuevo, por las obligaciones contenidas en la Decisión Marco comunitaria.

**19.** Estamos ante un delito perseguible de oficio, a tenor de lo que dispone, por exclusión, el artículo 287 CP, por lo que, para proceder, no será necesaria denuncia de la persona agraviada o perjudicada. Ello refuerza la idea de que el bien jurídico se conecta con los intereses generales en el mercado y, en concreto, con la competencia. En añadidura, el artículo 288 dispone que la sentencia se publicará en los periódicos oficiales y, si fuera solicitado por el perjudicado, se acordará su reproducción, total o parcial, por cualquier otro medio, a costa del condenado. Estas previsiones son igualmente aplicables al delito de corrupción en el deporte.

**20.** El apartado tercero del artículo 286 bis prevé una atenuación potestativa para el órgano jurisdiccional, de las conocidas como de “discrecionalidad reglada”, consistente en la posibilidad de aplicar la pena inferior en grado a la establecida en el artículo –tanto respecto a la prisión como a la inhabilitación especial– y reducir la multa a su prudente arbitrio, en atención a la cuantía del beneficio o valor de la ventaja o a la trascendencia de las funciones del culpable. El establecimiento de la rebaja punitiva se ha justificado, en un término, por la severidad de las penas previstas en este precepto y, de otro lado, porque trata de modular la respuesta penal a la actuación de sujetos con diferentes posiciones y capacidad de decisión dentro del ente empresarial y con relación al mercado. Sin embargo, resulta criticable que la menor afección al bien jurídico no haya cristalizado como uno de los criterios de aplicación de la atenuante.

**21.** La reforma de los delitos de corrupción en los negocios introducida en 2015 incorpora un nuevo artículo 286 quater destinado a recoger algunos supuestos de “especial gravedad”, en los que las respectivas penas se impondrán en su mitad superior, pudiendo llegarse –de nuevo, se concede tal posibilidad a jueces y tribunales– a la pena superior en grado, siempre que se dé alguna de las cuatro circunstancias enunciadas en el inicio del segundo párrafo de la norma. Se ha criticado, con fundamento, la redacción de esta figura pues, por un lado, la necesidad de intensificar las penas no viene recogida en la Decisión Marco –y puede derivar en una exacerbación de la respuesta penal contraria a toda racionalidad– y, por otro, los criterios de agravación escogidos por el legislador guardan escasa relación con el bien jurídico protegido.

**22.** El artículo 288 CP prevé expresamente atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas por delitos de corrupción en los negocios. En la concreción del sistema de responsabilidad, cobra una especial importancia el papel de los mecanismos de *compliance*, así como de los códigos de conducta y de buenas prácticas en un sector tan relevante como el empresarial que desarrolla su actividad en el contexto del mercado.

**23.** Junto con la figura de corrupción entre particulares, fue voluntad del legislador penal de 2010, como se ha dicho, incorporar en el apartado cuarto del artículo en estudio el subtipo de corrupción en el deporte. A pesar de que ha generado cierta controversia, la intervención del Derecho penal en la esfera deportiva se explica por la exponencial importancia de los intereses económicos involucrados en la práctica de algunas modalidades y disciplinas deportivas. En este sentido, el deporte ha dejado de ser una mera actividad privada para pasar a ostentar un innegable carácter público que justifica la atención de los poderes públicos y la mayor presencia regulatoria y sancionadora del ordenamiento jurídico y, por ello, también, de la disciplina criminal.

**24.** A diferencia de lo que sucedía con la corrupción privada, la inclusión del fraude deportivo en nuestro sistema legal no respondió a la necesidad de cumplir obligación supranacional alguna. Es más, en el momento de producirse la reforma de 2010 en España, no existía instrumento normativo internacional alguno en la materia, siendo que en

la actualidad solo encontramos el Convenio del Consejo de Europa sobre Manipulación de las Competiciones Deportivas, que no se encuentra en vigor, ni de forma general, ni, aún menos, para nuestro país.

Tampoco el examen del Derecho comparado muestra distintos modelos de incriminación que puedan ayudar a acotar el interés jurídico relevante en nuestro ordenamiento. No existen, en el seno de los distintos países, corrientes uniformes y cada una de las regulaciones existentes parecen responder más a la alarma social provocada por el conocimiento de escándalos y casos particulares que a la intención de apostar por una armonización de la política criminal en la materia.

**25.** A la vista de lo anterior, la tarea de concretar y acotar el bien jurídico tutelado debe abordarse siguiendo otros parámetros. Las disquisiciones doctrinales han basculado desde la negación de la existencia de un valor digno de salvaguarda penal hasta optar por la protección de los valores deportivos –singularizados en el denominado “juego limpio” o *fair play*– o la puesta en tutela de criterios económicos derivados de la práctica del deporte. En nuestra opinión, deben tomarse en consideración dos variables a la hora de delimitar el bien digno de protección: la tutela del resultado deportivo, requerida por la propia literalidad típica, y la ubicación sistemática del delito –entre los delitos socioeconómicos–.

Por todo ello, apostamos por una construcción ecléctica que puede referirse como “lealtad deportiva” –denominación que permite dar coherencia a este bien jurídico respecto del de corrupción privada– y categorizarse, al igual que esta, como un bien jurídico complejo y colectivo, con un valor protegido inmediatamente –la integridad e imprevisibilidad del resultado, requerido por la redacción de la norma– y un objeto tutelado de forma mediata, vinculado a la dimensión económica del deporte y circunscrito en los intereses y expectativas económicas de todos los actores e intervinientes en el hecho deportivo. Así, definimos este bien jurídico como la *integridad e imprevisibilidad del resultado obtenido mediante el respeto de las reglas de la modalidad deportiva, como medio de tutela de las expectativas económicas derivadas del correcto y leal desarrollo del acontecimiento deportivo*.

**26.** Al igual que sucedía en la modalidad de corrupción privada, el fraude deportivo es un delito plurisubjetivo, en el que pueden intervenir, potencialmente, varias categorías personales. En paralelo al tipo



previsto en los dos primeros apartados del artículo 286 bis, consideramos que la norma recoge una modalidad pasiva, delimitada como un delito especial impropio, de la que solo pueden ser sujeto activo el directivo, administrador, empleado o colaborador de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de esta, o el deportista, árbitro o juez que participa en el evento cuyo resultado se busca manipular; y una modalidad activa, para la que no existe obstáculo legal en considerar como delito común –aunque concordamos en reconocer que, en la práctica, lo habitual será que sean sujetos activos los vinculados a la entidad deportiva o aquellos con un interés directo en la prueba, encuentro o competición–, siendo posible, en ambos casos, la comisión de forma directa o a través de persona interpuesta.

**27.** La cláusula de remisión que da inicio al apartado cuarto supone que las conductas típicas se definen de igual modo a la corrupción privada. Así, la forma pasiva podría describirse, integrando todos los elementos presentes en el primer apartado del precepto, como “recibir, solicitar o aceptar un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro” y la forma activa, por remisión al numeral segundo, como “prometer, ofrecer o conceder un beneficio o ventaja no justificados, de cualquier naturaleza, para ellos o para terceros, como contraprestación para que le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a otros”.

**28.** Una de las particularidades del tipo de corrupción deportiva radica en que especifica en qué consiste el acto de favorecimiento indebido, debiendo concretarse este en la finalidad de “predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva”. Paralelamente a lo sostenido en la tipificación de la corrupción entre particulares, debe considerarse que este elemento determina el tipo objetivo, si bien no puede desconocerse una cierta potencialidad subjetiva como aspecto tendencial específico del comportamiento del sujeto activo.

**29.** Respecto de la predeterminación o alteración deliberada y fraudulenta, adquiere especial significación el debate en torno a las *primas*. Desde el punto de vista jurídico-penal, no ofrece controversia la

falta de antijuridicidad de los incentivos por ganar entregados al deportista por el propio club o entidad deportiva en la que desarrolla su actividad; premios en numerosas ocasiones públicos y conocidos, y asimilables a un complemento salarial por objetivos, tan habitual en el mundo empresarial. Por su parte, tampoco ofrece dudas que las primas a terceros otorgadas por perder o empatar entran de lleno en el ámbito típico del artículo 286 bis. 4 CP. La discusión surgió en torno a las primas entregadas por terceros por ganar, encontrándose diversas posturas contrapuestas en relación a la adecuación o no del reproche penal. Según nuestro entender, estas no deben ser consideradas típicas, pues una prima por ganar, aunque sea dada por un tercero, no deriva en una adulteración fraudulenta del resultado y, en todo caso, porque apostamos por una aplicación restrictiva del delito.

**30.** No adquiere relevancia penal, sin embargo, la adulteración del resultado de cualquier evento deportivo, sino simplemente de aquellos que ostenten *“especial relevancia económica o deportiva”*. Esta expresión sustituye al calificativo “profesionales” que se incluía en la redacción inicial de 2010 y que ahora ha pasado a formar parte de uno de los supuestos agravados recogidos en el artículo 286 quater CP. Del mismo modo, en la literalidad vigente el cuarto apartado incorpora un segundo párrafo que incluye una definición auténtica de lo que debe entenderse por *“especial relevancia económica o deportiva”*. Ambas circunstancias deben ser interpretadas de forma alternativa, de modo que bastará que se verifique cualquiera de ellas para considerar típico un determinado hecho ilícito de corrupción deportiva.

De *“especial relevancia económica”* debe considerarse aquella prueba, encuentro o competición deportiva en que *“la mayor parte de los participantes en la misma perciban cualquier tipo de retribución, compensación o ingreso económico por su participación en la actividad”*, debiendo interpretarse tal como aquel evento en el que, al menos la mitad más uno de los intervinientes, perciban emolumentos económicos derivados directamente de la participación y otorgados por el club o entidad deportiva a que pertenecen o por los organizadores del acontecimiento deportivo. De *“especial relevancia deportiva”*, de su lado, se entenderá *“la que sea calificada en el calendario deportivo anual aprobado por la federación deportiva correspondiente como competición oficial de la máxima categoría de la modalidad, especialidad, o disciplina”*. En este último caso, nos encontramos ante un elemento que con-

vierte al tipo en norma penal en blanco, al ser preciso acudir a la normativa administrativa deportiva para determinar el contenido del mismo. De acuerdo a nuestro parecer, habrá de entenderse como de “especial relevancia deportiva” la prueba, encuentro o competición deportiva oficial y de máxima categoría, organizadas por Federaciones o entidades de ámbito estatal, sin que exista obstáculo legal para considerar tales las organizadas por Federaciones autonómicas o, incluso, de ámbito territorial inferior.

**31.** De igual modo que la corrupción entre particulares, se concibe la comisión del tipo de fraude deportivo únicamente a título de dolo, no siendo posible la apreciación imprudente, por no estar expresamente prevista en el Código. A diferencia de la modalidad privada en el mercado, sin embargo, la contundencia con que la literalidad normativa expresa la finalidad en que se traduce el favorecimiento indebido –“predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta– entorpece la consideración, a efectos consumativos, del dolo eventual, si bien habrá de estarse a futuras interpretaciones jurisprudenciales al efecto.

**32.** Las penas previstas para la figura delictiva del apartado cuarto son las mismas, de nuevo por remisión, que las recogidas para la corrupción entre particulares. Son aplicables, en este sentido, las consideraciones vertidas en su momento. En añadidura, respecto de la corrupción en el deporte, se refuerzan las objeciones en lo relativo a la exacerbación de la respuesta punitiva –tanto cualitativa como cuantitativamente– y se plantean serios interrogantes en torno a la aplicabilidad de la inhabilitación especial, pues la redacción típica impide “*el ejercicio de industria o comercio*”; sectores que poco tienen que ver con el deporte, debiendo haberse optado por una consecuencia jurídica más acorde con el contexto en que se enmarca el subtipo al que nos referimos.

**33.** Resulta plenamente aplicable al fraude deportivo la atenuación potestativa del apartado tercero del artículo 286 bis CP. Su apreciación sigue la mecánica expuesta anteriormente, si bien se ha sostenido, respecto del tipo en el deporte, que la concreta elección de los criterios que dan lugar al privilegio punitivo puede derivar en problemas interpretativos, por no tener estos excesiva relación con la esfera del deporte.

**34.** Son predicables de la corrupción deportiva también los supuestos de “especial gravedad” recogidos en el artículo 286 quater. En el contexto que nos ocupa, serán aplicables no solamente las cuatro circunstancias previstas para la corrupción privada, sino que, además, el último inciso prevé dos específicas para el fraude en el deporte: que la adulteración tenga por finalidad influir en juegos de azar o apuestas deportivas, o bien que el evento deportivo sea calificado como oficial, profesional y de ámbito estatal o, en su caso, oficial y de ámbito internacional.

**35.** Respecto del fraude deportivo, la realidad práctica puede presentar interesantes relaciones concursales con otras figuras delictivas. A pesar de la singularidad de este delito, se muestra especialmente plausible la posibilidad de apreciar el concurso con el delito de estafa en supuestos de apuestas deportivas en las que, fruto de la adulteración del resultado, se verifica un daño patrimonial o económicamente evaluable. De la misma forma, no serán infrecuentes los casos de concurso entre la corrupción deportiva y el delito de dopaje, en la medida que se cometa este último para “modificar los resultados de las competiciones” en que participa el deportista al que se le suministren sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios.

**36.** También respecto de la corrupción en el deporte el artículo 288 CP prevé atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas, siguiendo el esquema y el sistema de atribución de la misma predicable respecto del delito de corrupción entre particulares. Con ello, suscita los mismos interrogantes que en dicho supuesto y, en el concreto contexto de la figura del artículo 286 bis. 4 CP, se plantea si la literalidad típica ha tomado en consideración las peculiaridades de los entes jurídicos deportivos, que oscilan entre un club deportivo –cuyo régimen jurídico es equiparable a una asociación y cuyos estatutos, precisamente, se inspiran en los mandatos de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación– hasta una Sociedad Anónima Deportiva, pasando por las Federaciones deportivas –entidades que, a pesar de regirse por el Derecho privado, tienen delegadas determinadas funciones de carácter público; son consideradas agentes colaboradores de la Administración pública–.

## INTRODUÇÃO

Realizar uma tese de doutoramento é ou, pelo menos, deve ser, algo mais do que uma simples aspiração académica. Não se trata apenas de conseguir a capacidade científica necessária para desenvolver uma investigação independente dentro do contexto universitário, mas de adquirir as competências e habilidades que permitem fazer-se perguntas e ser crítico para assim progredir numa concreta área do conhecimento. Em minha opinião, a investigação deve visar também a resolução de problemas da realidade; deve ser vista como uma ferramenta útil para a sociedade, capaz de detectar obstáculos ou deficiências e de contribuir, na medida do possível, com soluções adequadas.

Esta foi a motivação que me impeliu a iniciar os meus estudos de doutoramento e a decidir formar-me dentro do Programa de Doutoramento *“Estado de Derecho y Gobernanza Global”* da Universidade de Salamanca, focando o meu estudo em alguns aspetos jurídicos relacionados com a corrupção. E dentro dela, logo descobri que me aticava uma especial curiosidade a chamada corrupção privada, corrupção no sector privado ou, segundo a redação original do Código Penal espanhol –após a reforma da Lei Orgânica 5/2010–, corrupção entre particulares. Uma categoria jurídica nova –daí que durante os meus estudos de Mestrado ainda não fizesse parte do acervo jurídico vigente no nosso país–, que era definida pela escassa doutrina existente em esse momento como condutas “com corpo de corrupção e alma de outra coisa”; comportamentos que partilham com os clássicos crimes de suborno a denominação genérica de “corrupção” mas cujo âmbito lesivo está fora da Administração pública, centrado no âmbito económico, comercial ou empresarial –e no caso espanhol, também no desportivo– e em cujos ilícitos não intervém, em nenhuma das duas caras do acordo corrupto, autoridade ou funcionário público nenhum.

No que diz respeito à tradicional corrupção administrativa –aquela baseada no abuso de um poder público para obter uma vantagem ilegítima em benefício privado– era naquela altura e continua a ser comumente conhecido e aceite –assim foi salientado, entre outras

instituições, pelas Nações Unidas– tratar-se de um fenómeno social, político e económico complexo que afecta todos os países do mundo. A preocupação por esta, como tipologia delitiva, é considerada prejudicial para as instituições democráticas; responsável pela desaceleração do desenvolvimento económico e meio de cultivo idóneo para a instabilidade política. Estes ilícitos relacionam-se no sector público com a destruição das instituições democráticas, a quebra do Estado de Direito e o império da lei e a deslegitimação da burocracia e das estruturas administrativas. Tudo isso supõe uma retração do investimento público e privado e um desincentivo à criação de tecido empresarial, pelas dificuldades de suportar os custos derivados do pagamento de subornos.<sup>1</sup>

Efetivamente, a corrupção é uma das manifestações delitivas mais características das sociedades globalizadas, tendo adquirido nos últimos anos um incontestável carácter transnacional e relacionando-se, de forma evidente, com outras formas de delinquência económica organizada.<sup>2</sup> Os modelos de corrupção são copiados e transmitidos de uns países para outros e, do mesmo modo, os benefícios ilegais que esta gera, são transferidos para distintos territórios, implicando entidades, empresas e instituições financeiras de diferentes localizações. Por tudo isto, não é de estranhar que os governos, as organizações supranacionais e as não governamentais bem como as empresas transnacionais se preocupem pela dimensão global da corrupção.

Sendo isto assim, tal como supracitamos, nos últimos anos a inquietação dos diversos atores sociais pelos efeitos perversos da corrupção alargou-se também às condutas que se manifestam no âmbito privado. De novo por efeito da globalização, especialmente desde fins do século passado, o comércio transfronteiriço de bens e serviços, aumentou exponencialmente pelo que a corrupção no sector privado deixou de ser um problema meramente interno de um Estado para passar a ostentar relevância transnacional. É por isso que se trata

---

<sup>1</sup> Informação retirada da web do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crimes. Fonte: <https://www.unodc.org/lpo-brazil/es/corruptao/index.html>. Consultado a 2 de Novembro de 2017.

<sup>2</sup> CASTRESANA FERNÁNDEZ, C.: “Corrupción, globalización y delincuencia organizada”, em FABIÁN CAPARRÓS, E. A. e RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (coords.): *La corrupción en un mundo globalizado: análisis interdisciplinar*, Ratio Legis, Salamanca, 2004, pp. 213-215.

mais eficazmente mediante uma atuação conjunta entre todos os países.<sup>3</sup>

Neste sentido, o oferecimento e a aceitação de benefícios indevidos no sector privado buscam predispor a decisão sobre um ato ou negócio – consistente na aquisição de bens ou serviços– a favor de quem os dá, em relação a quem os recebe, face aos restantes competidores, supondo isso uma distorção da competência; alteração que pode fazer com que a posição no mercado de determinados empresários dependa mais da concessão de um suborno do que das melhores prestações, qualidade ou preço dos seus produtos ou serviços.

Estes e outros reflexos do potencial lesivo destas condutas acentuaram a preocupação dos organismos supranacionais, focalizando a sua atuação –no âmbito da denominada “tolerância zero” contra a corrupção– à procura de uma política criminal comum,<sup>4</sup> visando salvaguardar o correto funcionamento das Administrações públicas, de um lado, e dos sistemas de mercado, com especial atenção à tutela da competência, de outro. Destacam neste ponto, como iniciativas mais relevantes, os Convénios Civil e Penal sobre a Corrupção do Conselho da Europa de 1999 e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003. Entre os elementos fulcrais que contêm, é de salientar a necessidade de que os Estados prevejam como crime determinadas condutas de corrupção relacionadas com o pagamento de subornos, quer na esfera pública, quer na privada. Com isto, é reforçada a presença do Direito penal no âmbito económico, passando a castigar comportamentos que até há poucos anos ficavam fora da esfera de ação da mais contundente ferramenta do *ius puniendi* estatal. Também as instituições comunitárias elaboraram textos e normativas contra a corrupção. No âmbito de estudo que nos ocupa, é

---

<sup>3</sup> RASTRILLO LÓPEZ, P.: “Los delitos de corrupción tras la reforma del Código Penal por LO 1/2015”,

na web de ElDerecho.com, 14 de Novembro de 2016. Fonte: [http://www.elderecho.com/tribuna/penal/Delitos-corrupcion-reforma-Codigo-Penal\\_11\\_1021180001.html](http://www.elderecho.com/tribuna/penal/Delitos-corrupcion-reforma-Codigo-Penal_11_1021180001.html). Consultado a 2 de Novembro de 2017.

<sup>4</sup> CAMPANER MUÑOZ, J.: “La corrupción entre particulares”, em *Lex Nova Online*, p. 1. Disponível na web da Revista *Penamiento Penal*. Fonte: <http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/04/doctrina38516.pdf>. Consultado a 2 de Novembro de 2017.

imprescindível referir a Decisão Marco 2003/568/JAI do Conselho, de 22 de Julho de 2003, relativa à luta contra a corrupção no sector privado, que, tal como as anteriormente referidas, impõe a necessidade de os Estados criminalizarem os comportamentos corruptos para além do âmbito público. Esta é precisamente uma das razões de peso que levaram o legislador penal espanhol de 2010, tal e como é referido expressamente na Exposição de Motivos da lei Orgânica 5/2010, de 22 de Junho, a introduzir o crime de corrupção entre particulares no Código penal, nomeadamente no artigo 286 bis, como mais um crime contra o mercado e os consumidores.

Mas não só a nível normativo supranacional ou internacional foi posto em relevo a importância de combater, desde todos os frentes, os atos de corrupção. Nos últimos anos, especialmente desde o início da grave crise económica que o mundo suportou –e da qual ainda não nos recuperamos–, a cidadania tem-se mostrado mais consciencializada no que diz respeito aos danos que este fenómeno delitivo nos infringe a todos; ficamos a saber que nos afectam as consequências de unas práticas indesejáveis que, até há umas décadas, foram, no máximo, consideradas crimes sem vítimas. Não é assim atualmente: sabemos que todos, como cidadãos e como parte da sociedade, somos titulares de uma série de valores, de uns bens jurídicos de natureza colectiva, que são algo mais do que a simples soma de interesses particulares e respeito aos quais exigimos que os Estados se obriguem a tutelar.<sup>5</sup> No caso espanhol, a importância que outorgamos a estes ilícitos, como um dos problemas mais graves que afligem a nossa sociedade, fica manifesto nos Barómetros que, periodicamente, realiza o Centro de Investigações Sociológicas; indicador no qual, ainda hoje, a corrupção e o fraude ocupam o segundo lugar como o principal problema que existe atualmente no nosso país, apenas por debaixo do desemprego,<sup>6</sup> e cuja posição se mantém desde fins do ano 2012.

Focando a atenção na corrupção entre particulares, a repercussão de diferentes casos que fomos conhecendo ao longo dos últimos anos veio

---

<sup>5</sup> PLANCHADELL GARGALLO, A.: “Las víctimas en los delitos de corrupción (panorama desde las perspectivas alemana y española)”, em *Revista Estudios Penales y Criminológicos*, vol. 36, Publicaciones Universidad de Santiago de Compostela, 2016, pp. 70-71.

<sup>6</sup> O dado foi retirado do Estudo nº 3183, incluído no Barómetro do CIS de Julho de 2017, disponível na web do CIS. Fonte: [http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3180\\_3199/3183/es3183mar.pdf](http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3180_3199/3183/es3183mar.pdf). Consultado a 2 de Novembro de 2017.



propiciada por uma maior atenção dos meios de comunicação. No contexto europeu, foram divulgados varios casos clássicos, alguns deles na Alemanha, como o de *Korkengeld* –um suposto no qual os representantes de uma marca de champanhe francês ofereceram 35 pfennigs por cada garrafa da sua marca vendida aos empregados de diferentes estabelecimentos, com a finalidade de estes recomendarem o seu produto, e tudo isso com o conhecimento do dono do negócio–, o escândalo do lixo em Colónia –no qual, no processo de adjudicação a envelope fechado do serviço de recolha de resíduos, uma das empresas subornou o representante do adjudicador para que lhe comunicasse a oferta mais económica para assim melhorá-la– ou o caso do *Allianz-Arena* de Munique –no qual foram pagas “comissões” a fim de conhecer informação relevante para a adjudicação da construção do referido estádio–, ou, de outro lado, o caso *Siemens* que destapou uma rede de pagamentos milionários por parte da dita empresa pelo mundo fora.

Em Espanha, apesar de a regulação penal deste crime –como já dissemos e poderá ver-se nesta tese de doutoramento– ser relativamente recente e não isenta de certas carências que trataremos de depurar ao longo do nosso trabalho, a expressão “corrupção privada” começou a ganhar certa notoriedade nos meios, graças, em grande parte, ao aparecimento de certos casos sobre os quais, não obstante, ainda não há sentença firme por parte de juízes e tribunais, embora alguns deles se encontre, no momento de redigir estas linhas, em fase de investigação. Podemos referir o caso *Rato* –em que se investigava o ex-vice-presidente do Governo por supostas irregularidades nos seus negócios privados e pelo que se observaram indícios de crime contra as Finanças Públicas, lavagem de dinheiro e corrupção entre particulares;<sup>7</sup> processo atualmente arquivado de forma provisória–, o caso *Neymar* –no qual foram abertas diligências contra o ex-futebolista do F.C. Barcelona, o Santos e os presidentes de ambos clubes por fraude e corrupção entre particulares; nestes

---

<sup>7</sup> Podem ser consultados alguns dados do caso na notícia intitulada “Las 9 claves del ‘caso Rato’”, publicada na web de El País, 6 de Outubro de 2015. Fonte: [https://politica.elpais.com/politica/2015/10/05/actualidad/1444053279\\_203956.html](https://politica.elpais.com/politica/2015/10/05/actualidad/1444053279_203956.html). Consultado a 2 de Novembro de 2017.

momentos em fase de Julgamento Oral na Audiencia Nacional<sup>8</sup> ou a operação *Soule* –conspiração que investiga o ainda presidente da Real Federação Espanhola de Futebol por crimes de administração desleal, apropriação indevida, corrupção entre particulares e falsidade documental<sup>9</sup>.

Se, como dizíamos anteriormente, o cumprimento das obrigações supranacionais ratificadas por Espanha se tornou o argumento principal do legislador penal para incorporar a corrupção privada ao elenco de crimes previstos na ordenação, diferente é o suposto da fraude no desporto, modalidade típica específica também incluída no artigo 286 bis do Código, nomeadamente no número 4º. Neste caso, a iniciativa incriminatória partiu do poder legislativo interno e, nem a própria regulamentação nem a sua localização sistemática, foram suficientemente motivadas, requisito que teria sido desejável em base aos princípios reitores de um Direito penal democrático.

Deste modo, perante a falta de sustento normativo supranacional –o único instrumento existente é o Convénio do Conselho da Europa sobre Manipulação de Competições Desportivas, de data posterior à incorporação do tipo no nosso Código e ainda não ratificado por Espanha– e a insuficiente labor de justificação do nosso redator, teremos de procurar a razão de ser da figura no alarme social que geram os possíveis factos de corrupção num âmbito tão emblemático como o desporto. Neste contexto torna-se inteligível a iniciativa de Projeto de Lei contra a fraude no desporto de 2009 –que partiu da Liga de Futebol Profissional e à qual aderiram outras instituições como a Liga ACB de basquetebol–, que apostava pela previsão penal deste tipo de condutas ilícitas, seguindo a corrente político-criminal de “tolerância zero” contra a corrupção: o objetivo declarado era lutar contra a “manipulação de jogos”, as “gratificações a terceiros” e os

---

<sup>8</sup> A situação atual do caso pode conhecer-se na notícia intitulada “*El juez abre juicio oral y fija fianza de más de 3 millones al Barça, al Santos y sus presidentes por Neymar*”, publicada na web de El País, 5 de Maio de 2017. Fonte: [https://elpais.com/deportes/2017/05/04/actualidad/1493903711\\_548466.html](https://elpais.com/deportes/2017/05/04/actualidad/1493903711_548466.html). Consultado a 2 de Novembro de 2017.

<sup>9</sup> O enfoque deste caso ppde ser consultado, entre outras fontes, na notícia intitulada “*Villar y su hijo, detenidos en una operación contra la corrupción en la Federación Española de Fútbol*”, publicada na web de El Economista, 18 de Julho de 2017. Fonte: <http://www.eleconomista.es/empresasfinanzas/noticias/8504162/07/17/Macro-operacion-contra-la-corrupcion-en-la-Federacion-Espanola-de-Futbol-.html>. Consultado a 2 de Novembro de 2017.

subornos a futebolistas e árbitros tendentes a adulterar de modo fraudulento o resultado de um evento desportivo.

A entrada em vigor da modalidade de fraude desportiva coexistiu no tempo com um dos primeiros casos com maior transcendência mediática, o conhecido como caso *Brugal*, no qual, na sequência de uma investigação por crimes de suborno, extorsão e tráfico de influências na adjudicação de contratos públicos em concursos de gestão dos serviços de recolha de lixo em várias povoações de Alicante, foi descoberta uma conspiração de concessão massiva de dádivas para manipular resultados desportivos na temporada 2009-2010 e propiciar a promoção à Primeira Divisão do Hércules C.F.<sup>10</sup> O titular do Tribunal de Instrução número 7 de Alicante decidiu, no entanto, não notificar a instrução às autoridades desportivas, contrariamente ao solicitado pelo Ministério Público Anticorrupção, por ser considerado uma intromissão na vida privada dos arguidos, na medida em que a figura delitiva não se encontrava ainda em vigor. Este facto foi utilizado pelos partidários da criminalização da corrupção no desporto para reforçar a sua posição, aludindo à ineficácia dos meios de investigação da disciplina desportiva e à necessidade de contar com mecanismos provatórios próprios do ordenamento penal.

Desde a vigência da figura, são salientadas três investigações judiciais que levaram à aplicação deste crime, duas delas relacionadas com o Futebol. A primeira, atualmente arquivada –se bem que o Ministério tenha recorrido esta decisão– no que diz respeito à manipulação do resultado do jogo Levante-Zaragoza, correspondente à 38ª jornada da Primeira Divisão da temporada de 2010-2011. A segunda, conhecida como o caso *Osasuna*, na qual se dirime se alguns dirigentes do clube “rojillo” subornaram varios futebolistas do Betis para que a equipa verde branca conseguisse determinados resultados que beneficiavam a equipa navarra durante o fim da temporada 2013-2014. Atualmente,

---

<sup>10</sup> Para estudarmos a fundo o tratamento mediático deste caso, pode ser consultada a notícia intitulada “El 'caso Brugal' destapa el uso masivo de sobornos para ascender a Primera”, publicada na web de El País, 5 de Agosto de 2010. Fonte: [https://el-pais.com/diario/2010/08/05/deportes/1280959202\\_850215.html](https://el-pais.com/diario/2010/08/05/deportes/1280959202_850215.html). Consultado a 2 de Novembro de 2017.

o caso encontra-se em fase de Julgamento Oral.<sup>11</sup> Finalmente, deve também ser referida a denominada operação *Futures*, vinculada a supostas manipulações de resultados de ténis para apostas na internet, que saiu à luz em Dezembro de 2016 e pela qual, na altura, foram detidas 34 pessoas.<sup>12</sup>

Voltando ao plano jurídico, é preciso referirmos, neste momento, duas questões citadas anteriormente. De um lado, a inexistência de resoluções judiciais firmes, em forma de sentença, que apliquem nenhuma das previsões contidas no artigo 286 bis do Código Penal. Esta realidade foi percebida pelo redator da Lei Orgânica 1/2015, de 30 de Março, pela qual é modificado o Código Penal, para acometer uma reforma profunda dos tipos objeto desta investigação; mudanças que são analisadas em profundidade nos diferentes secções desta tese e cujo objetivo, segundo o próprio legislador, é “garantir a aplicação destes preceitos em todos os casos nos quais, mediante o pagamento de subornos, em benefício próprio ou de terceiros, se obtêm posições de vantagem nas relações económicas”.

Por outro lado, expomos o nosso propósito de que a investigação que apresentamos possa ser de utilidade na aplicação prática das duas figuras delitivas estudadas: os tipos de corrupção entre particulares e no desporto. É por isso que, no exame de cada um dos aspectos que compõem este trabalho, se parte, como não podia ser de outra maneira, da literalidade do artigo 286 bis atualmente vigente, mas sem deixar de lado a versão original, na medida em que o seu estudo sirva para dar luz a alguns dos pontos controversos de ambos tipos penais.

Tem sido salientado pela doutrina que os tipos do artigo 286 bis são fruto de uma política-criminosa versátil, na qual o legislador “não tem a certeza do que faz”, chegando a sustentar que “não há razão para [afirmar] que (...) uma tipificação ad hoc do suborno privado irá resolver um problema ainda mais complicado na sua vertente

---

<sup>11</sup> Mais informação na notícia intitulada “El juez abre juicio oral contra los 18 acusados en el caso Osasuna”, publicada na web de Iusport, 30 de Março de 2017. Fonte: <https://iusport.com/not/33676/eljuez-abre-juicio-oral-contra-los-18-acusados-en-el-caso-osasuna/>. Consultado a 2 de Novembro de 2017.

<sup>12</sup> Pode ser ampliado na notícia intitulada: “34 detenidos en una redada por amaños de partidos de tenis para apuestas en Internet”, publicada na web de El Mundo, 1 de Dezembro de 2016. Fonte: <http://www.elmundo.es/deportes/2016/12/01/583f70aee2704e75638b467c.html>. Consultado a 2 de Novembro de 2017.

indagatória, quer dogmática quer político-criminosa e processualmente”.<sup>13</sup> É este ponto onde esperamos que esta tese possa ser de proveito e isso motivou os esforços por concretizar e clarificar os diferentes elementos típicos de ambas figuras delitivas.

Finalmente, devemos reconhecer algo que, não por evidente, deve deixar de ser referido aqui: a luta contra a corrupção, em qualquer dos seus âmbitos. No entanto, no que aquí nos interessa, nas esferas privadas da empresa e do desporto, não pode ser aplicado apenas desde a lei ou desde a lida de juízes e tribunais, nem tampouco exclusivamente desde a Universidade e o âmbito académico. É necessária uma política anterior educativa e preventiva, que possibilite a consciencialização e implicação da sociedade civil em seu conjunto para liderar a luta global anticorrupção. Na procura deste fim, é de salientar o trabalho de *Transparency International*, organização não governamental que tem em vista o combate contra este fenómeno ilícito, tanto a nível nacional como internacional, através da construção e o fortalecimento de sistemas de integridade e a comunicação de valores de integridade e rendição de contas.<sup>14</sup> E, Neste sentido, tenho o privilégio de participar nesta tarefa como membro, desde a sua constituição em Maio de 2016, da Comissão de Integridade e Prevenção da Corrupção no Desporto de Transparência Internacional Espanha, capítulo nacional da dita organização.

Como tratamos de patentear na Primeira Parte desta tese de doutoramento, a fenomenologia da corrupção alarga os seus efeitos perniciosos em múltiplos sectores da nossa sociedade e é tarefa de todos –nomeadamente daqueles que dedicamos a combatê-la o nosso estudo ou desempenho profissional–, por um lado, consciencializar de que nos encontramos perante um problema que diz respeito à sociedade em seu conjunto– pelo desvio de recursos públicos e privados que leva consigo– e, por outro lado, educar, prevenir e, em seu caso, prever mecanismos de sanção proporcionados –sem renunciar a

---

<sup>13</sup> QUERALT JIMÉNEZ, J.J.: “Notas sobre la corrupción privada en el Proyecto de Código Penal”, em *Iuris: Actualidad y práctica del Derecho*, nº 147, Março 2010, pp. 15 y 17-18.

<sup>14</sup> Informação obtida da seção “Misión y organización” de la web de Transparencia Internacional España. Fonte: <http://transparencia.org.es/mision-y-organizacion/>. Consultado a 2 de Novembro de 2017.

que estes possuam natureza penal–, sempre que estiverem orientados à luta eficaz contra estes ilícitos e forem respeitados os princípios e limites próprios de um Estado social e democrático de Direito.

## RESUMO

A presente investigação de doutoramento visa a análise dogmática do crime de corrupção entre particulares -contido, em suas figuras atenuada e básica no artigo 286 bis e na sua forma agravada no artigo 286 *quater*, ambos do Código Penal-, tanto na sua modalidade de corrupção privada empresarial como na correspondente de corrupção no desporto.

Na curta trajetória de vigência do crime, incorporado ao Código em 2010 através da reforma obrada pela Lei Orgânica 5/2010, este não foi objeto de excessiva apreciação por parte de juízes e tribunais, não existindo, no momento de finalização desta tese, salvo erro ou omissão, nenhuma sentença firme que o aplique. Contamos apenas com algumas resoluções em forma de auto relativas aos escassos procedimentos incoados até à data. Esta quase total falta de aplicação do crime tem sido justificada, de um lado, pela ausência de um debate prévio sobre a necessidade de o incorporar ao nosso ordenamento jurídico -esta foi fundamentada apenas na necessidade de cumprir as obrigações comunitárias e internacionais contraídas por Espanha- e, de outro, pelas escuridades e deficiências que apresentava a redação original do tipo. Isto levou o nosso legislador penal a introduzir uma intensa reforma em 2015, quer do ponto de vista dogmático -com alterações de relevância na literalidade do artigo- quer político-criminal -procedendo a reorganizar a Seção 4ª do Capítulo XI do Título XIII, originariamente denominada “da corrupção entre particulares”, passou a intitular-se “Crimes de corrupção nos negócios” e a acrescentar à figura de corrupção privada a de corrupção nas operações comerciais internacionais, antes recolhida no artigo 445-.

Este contexto marca o objetivo fundamental do nosso trabalho: sendo a tarefa fundamental a análise dogmática dos diferentes elementos das duas figuras delitivas, a investigação incorpora considerações de política criminal que visam, de um lado, encontrar os argumentos que justificam a concreta incriminação prevista no nosso ordenamento penal e, de outro, facilitar a tarefa hermenêutica que possibilite esclarecer aqueles aspetos escuros que possa conter a redação vigente do artigo 286 bis do Código Penal.

Para a consecução dos objetivos propostos, a tese de doutoramento conta com uma estrutura dividida em três Partes bem diferenciadas, estando cada uma delas composta por Capítulos. A primeira delas, dedicada a aspetos preliminares e ao estudo da normativa supranacional na matéria e os modelos de tipificação da corrupção privada no Direito comparado. Nomeadamente, o primeiro dos Capítulos foi dedicado a estudar a fundo a relação entre corrupção e Direito penal e, mais concretamente, a ponderar a pertinência da intervenção desta disciplina jurídica no âmbito socioeconómico e, dentro dele, a considerar os argumentos para incriminar os comportamentos de corrupção privada.

O segundo Capítulo é destinado a explorar a corrupção privada como fenómeno delitivo. Deste modo, são estudados, por um lado, os caracteres que esta compartilha com as condutas tradicionalmente consideradas como de corrupção pública e, por outro lado, aqueles elementos singulares dos ilícitos que se manifestam no sector privado. Já o terceiro Capítulo contém uma análise dos instrumentos normativos supranacionais que vinculam Espanha e determinam a necessidade de prever penalmente a corrupção entre particulares e, no quarto, são examinadas diferentes regulações de ordenamentos jurídicos do nosso âmbito, a fim de se compreenderem os diferentes modelos de tipificação deste crime que coexistem no contexto europeu.

A Segunda Parte focaliza a análise dogmática dos diferentes elementos do crime de corrupção entre particulares em Espanha, tipificado nos três primeiros e o quinto parágrafos do artigo 286 bis e no início do 286 *quater* do Código Penal. No quinto Capítulo do nosso trabalho, primeiro desta Parte, concretiza-se qual o bem jurídico tutelado pela norma espanhola e, a seguir, são considerados os diferentes elementos típicos, tanto da modalidade de corrupção privada ativa como passiva. O Capítulo seis é dedicado aos sujeitos ativos e o número sete trata as condutas típicas. O número oito, por outro lado, visa o tipo subjetivo do crime e os Capítulos nove e dez, as restantes questões da teoria jurídica do crime: antijuridicidade, culpabilidade, punibilidade e condições objetivas de perseguibilidade, por um lado, e *iter criminis*, autoria e participação, por outro.

Esta Parte segunda é completada com mais dois Capítulos: o primeiro –undécimo da tese de doutoramento– examina o tipo atenuado e os tipos agravados de corrupção privada, e o duodécimo aponta alguns



aspectos interessantes referidos à responsabilidade penal das pessoas jurídicas em relação à figura objeto de estudo.

Finalmente, a nossa investigação apresenta uma Terceira Parte na qual procedemos ao exame da modalidade específica de corrupção no desporto, prevista no quarto e quinto parágrafos do artigo 286 bis e no 286 *quater* do Código Penal. O esquema de conteúdos é praticamente idêntico ao estabelecido para o crime de corrupção privada, se bem que sejam dedicados dois Capítulos a enfrentar brevemente questões prévias. Deste modo, o décimo terceiro contem notas introdutórias, referentes à relevância social do desporto e à pertinência da sanção penal da fraude desportiva e o décimo quarto examina, sucintamente, instrumentos supranacionais e Direito comparado.

Seguindo o esquema, como dissemos, o décimo quinto Capítulo estuda o bem jurídico protegido pelo tipo espanhol, o décimo sexto os sujeitos ativos e o décimo sétimo as condutas típicas. Posteriormente, o décimo oitavo expõe elementos de penalidade e analisa a aplicabilidade do tipo atenuado e dos tipos agravados, o décimo nono destina-se a examinar algumas situações de concursos de crimes e, finalmente, o vigésimo recolhe algumas notas relativas à responsabilidade penal das pessoas jurídicas vinculada à figura de corrupção no desporto.

A metodologia de investigação utilizada nesta tese de doutoramento é substancialmente teórica, focada no exame dogmático de cada um dos temas referidos anteriormente. Para tal, servimo-nos de fontes normativas, quer nacionais quer supranacionais, complementadas com as contribuições doutriniais mais relevantes sobre a matéria. Da mesma forma, utilizamos diversos relatórios e documentos com um valor jurídico relevante. De outro lado, a quase nula aplicabilidade prática destes crimes no nosso país dificulta a referência a resoluções judiciais, sendo a maioria relativas aos clássicos crimes de corrupção.

A nossa investigação parte da premissa de reconhecer que as figuras delitivas contidas no artigo 286 bis do Código Penal são relativamente inovadoras no nosso sistema jurídico. Por isso, apesar de na exposição de cada um dos temas tratados se seguir uma linha argumental que pretende ser congruente, presta-se atenção às diferentes teses ou opiniões doutriniais existentes, optando pela que consideramos mais

adequada conforme à legalidade vigente ou, incorporando elementos inovadores que, a nosso entender, possam completar e dar coerência aos diferentes elementos dos crimes de corrupção entre particulares e no desporto.

## CONCLUSÕES

1. A corrupção é um fenómeno poliédrico, complexo, que mostra os seus efeitos lesivos em todos os sectores de uma sociedade. Como manifestação delitiva, é concebida como uma das categorias típicas mais características da comunidade globalizada, destacando a sua transnacionalidade e os seus vínculos com outras expressões de criminalidade económica e delinquência organizada. Por isso, nos últimos anos, tornou-se mais intensa a preocupação e consciencialização no que diz respeito à mesma por parte de atores políticos e sociais, públicos e privados.

2. Uma das dificuldades à hora de tratar os comportamentos de corrupção vem dada pela ausência de uma definição universalmente válida, que delimite as manifestações que devem ser consideradas como ilícitas. Assim, as aproximações a um conceito realizadas desde diferentes disciplinas científicas resultaram insuficientes e incompletas. Tão-pouco desde o plano estritamente jurídico foi possível, até ao momento, levar a cabo este propósito, na medida em que se constata que a corrupção é uma categoria delitiva cambiante: será entendida por tal aquilo que a norma determine em cada território, em cada momento histórico.

3. No âmbito jurídico-penal, houve uma evolução relevante desde o âmbito público às manifestações em diversas esferas do sector privado. Por isso, –pelo menos a efeitos desta investigação–, a chave para definir a corrupção será o abuso ou a utilização desviada de um poder de decisão, traduzido numa atuação contrária às normas ou regras que rijam o sector onde o sujeito desenvolva a sua atividade, com a expectativa de obter um lucro privado.

4. Um correto tratamento penal das condutas de corrupção privada, objeto fundamental desta investigação, requer não só explorar a fenomenologia da corrupção, mas também delimitar os parâmetros de legitimidade da intervenção da dita subdivisão do ordenamento no âmbito socioeconómico, natureza que, segundo o nosso legislador, ostentam tais crimes.

Concretamente, é tarefa do jurista comprovar que existe um interesse valioso para a sociedade e digno de tutela jurídica após a incriminação de qualquer conduta. E, depois disso, é necessário verificar que a concreta regulação cumpre os mais básicos princípios limitativos do *ius puniendi* estatal, próprios de um Estado social e democrático de Direito. Deve procurar-se que a descrição de condutas proibidas satisfaça suficientemente os princípios de lesividade, de proporcionalidade e de intervenção mínima. Neste sentido, tem-se afirmado que a atuação do Direito penal no âmbito socioeconómico é justificada porque reage perante comportamentos altamente lesivos, que se incardinam no contexto do proveito económico, realizados por sujeitos que possuem uma certa qualificação –ou, de outro lado, daqueles que se predicam especiais funções e obrigações para com a sociedade– e cuja comissão requer a utilização de estruturas e instrumentos compartilhados com a atividade económica lícita.

5. Respondendo afirmativamente ao anterior, é pertinente também, a fim de dotar de um maior rigor a investigação que apresentamos, apreciar se possui legitimidade a sanção dos comportamentos de corrupção privada através do Direito Penal. A clássica doutrina espanhola susteve um debate apresentando, como argumentos a favor da tipificação, a observância das obrigações supranacionais contraídas pelo nosso país e, assim mesmo, a ineficácia de outras disciplinas jurídicas para tutelar a competência. Em contra, não obstante, aduziu-se a ausência de um debate prévio acerca do merecimento e necessidade de pena das condutas previstas no artigo 286 bis CP, assim como a falta de antijuridicidade material necessária para considerar tais comportamentos como crime, em aplicação dos princípios limitadores do *ius puniendi*.

Em nossa opinião, os argumentos expostos são reflexo do intenso debate que suscitou a introdução desta figura em nosso Código, mas, depois de sete anos de vigência do tipo em nosso ordenamento, apenas caberia interrogar-se agora em torno à legitimidade do bem jurídico protegido e à adequação da concreta literalidade típica aos princípios reitores do Direito penal num Estado social e democrático de Direito; aspetos sobre os quais se desenvolve o núcleo desta tese de doutoramento.

6. A efeitos deste trabalho, elaboramos uma definição de corrupção entre particulares segundo a qual incluímos “toda utilização

desviada ou abusiva de faculdades ou poderes derivados de uma posição, cargo ou desempenho empresarial ou mercantil que, mediante o quebranto de uma relação de confiança ou a infração do obrigado pelo sistema normativo referente, visa a obtenção de um benefício ou vantagem indevidos, e lesiona interesses económicos e de mercado relevantes”. A configuração destes crimes compartilha, por um lado, alguns elementos com as clássicas condutas de corrupção e, por outro, apresenta aspetos próprios –destacando que circunscreve o seu âmbito típico à competência no mercado e não ao bom funcionamento das Administrações públicas–.

7. Foram apresentadas, como causas que podem explicar a aparição de comportamentos de corrupção no sector privado, de uma parte, a influência da globalização e o consequente relaxamento das fronteiras nacionais e, de outra, os conhecidos como processos de privatização e a derivada confusão, em ocasiões, do público com o privado. Do mesmo modo, a literatura científica e as instituições e organizações sociais constataram que a corrupção entre particulares provoca efeitos perversos em todas as esferas de uma sociedade, especialmente na economia e no sistema económico constitucional –pela distorção da competência, a consolidação de monopólios, o favorecimento do crescimento da economia submersa e os desincentivos ao crescimento– e no sistema democrático, minando a sua legitimidade.

8. Dizíamos na conclusão número 5 que um dos argumentos utilizados para justificar a incriminação destes ilícitos, referendado pelo próprio legislador, foi a necessidade por parte da Espanha de cumprir com as obrigações que tinha subscrito com as instituições supranacionais; nomeadamente, com as Nações Unidas, o Conselho da Europa e as derivadas do Direito comunitário.

Cronologicamente, o primeiro instrumento em ser aprovado foi o Convénio penal sobre a corrupção do Conselho da Europa –que se complementa com o Convénio civil, ambos de 1999–, que incluiu a prescrição de tipificar as condutas de corrupção ativa e passiva no sector privado nos seus artigos 7 e 8, como modalidades de suborno numa atividade mercantil em troca de uma atuação ou omissão de um ato incumprindo os deveres. Deste modo, esta norma supranacional

configura o ilícito como uma infração dos deveres do sujeito corrupto. Esta produção normativa é completada com a existência do GRECO, cuja tarefa fundamental visa melhorar a capacidade dos Estados parte para combater a corrupção através do controle do cumprimento das prescrições anticorrupção do Conselho da Europa. Precisamente o trabalho deste Grupo de Estados contra a Corrupção justifica que os diferentes modelos de tipificação destes comportamentos no Direito comparado se tenham relaxado, aproximando-se todos eles ao padrão marcado por esta organização. De maneira análoga delimita a figura a Convenção das Nações Unidas contra a corrupção –elaborada em 2003–, que recomenda aos Estados parte a sua incriminação no artigo 21. Por outro lado, a Decisão Marco 2003/568/JAI, texto comunitário de referência –utilizado pelo nosso legislador para fundamentar a reforma introduzida na Lei Orgânica 5/2010– dedica-se em exclusiva a estabelecer medidas de carácter penal e, assim, impor aos Estados a necessidade de sancionar pessoas físicas e jurídicas por crimes de corrupção entre particulares.

9. Tradicionalmente três foram os critérios de incriminação da corrupção no sector privado no Direito comparado europeu. Num primeiro caso, o ordenamento holandês (1967), o belga (1999) e o francês (até 2005) situam-se na linha dos instrumentos supranacionais revistos –particularmente, o Convénio do Conselho da Europa e a Convenção das Nações Unidas– e tutelam os interesses do titular ou proprietário da empresa; concretamente, procura-se salvaguardar a relação entre empregador e empregado e, dentro dela, a lealdade e o cumprimento dos deveres do segundo em relação ao primeiro, contraídos em virtude da relação que os une. É a denominada tutela da *dimensão privada* da corrupção entre privados e salienta, consequentemente, o elemento típico do incumprimento das obrigações. Em segundo lugar, o ordenamento alemão (1997) –de forma pura pelo menos até à reforma do StGB de 2015 e, atualmente, como uma das condutas tipificadas– focou a sua resposta penal perante esta corrupção à proteção da competência no mercado. Foi definido pelos estudiosos como o *modelo de tutela público* e o seu núcleo situa-se no favorecimento desleal de um dos intervenientes num mercado, produto de um suborno, em relação aos restantes competidores. Parece ser este o padrão que inspira a literalidade da Decisão Marco 2003/568/JAI –apesar de esta incluir também o elemento do incumprimento de obrigações– e, por conseguinte, sustentou-se que é o bem jurídico declarado pelo legislador espanhol para justificar a

redação do artigo 286 bis CP. Finalmente, o ordenamento italiano (2002) –até à reforma do *Codice civile* de abril de 2017– recolhia o terceiro grande critério de criminalização destas condutas: a tutela do património da empresa do corrupto e, em abstrato, a proteção dos interesses patrimoniais do empresário. É a conhecida como *corrente clássica*, se bem que a sua presença no Direito comparado fosse minoritária. A consequência fundamental deste entendimento era configurar o tipo como um crime de resultado, que exigia a verificação de um dano patrimonial concreto para poder garantir a tipicidade de uma determinada conduta.

**10.** O crime de corrupção entre particulares, juntamente com o subtipo de corrupção no desporto, foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico-penal através da reforma do Código obrada pela Lei Orgânica 5/2010, de 22 de junho. Inicialmente previsto na Seção 4<sup>a</sup> –“ da corrupção entre particulares”– do Capítulo XI –“Dos crimes relativos à propriedade intelectual e industrial, ao mercado e aos consumidores”– do Título XIII –“Crimes contra o património e contra a ordem socioeconómica”–. Nesta versão de vigência, a figura de corrupção entre particulares era prevista nos três primeiros parágrafos do artigo 286 bis CP, ficando reservado o parágrafo 4<sup>o</sup> para a previsão da corrupção no desporto.

A falta de aplicação prática do artigo pode ter sido o motivo que levou o legislador da Lei Orgânica 1/2015, de 30 de Março, a empreender uma profunda modificação do paradigma jurídico em torno a estes crimes. Em primeiro lugar, foi alterada a intitulação da Seção 4<sup>a</sup>, passando a ser denominada “Crimes de corrupção nos negócios” e a incluir, juntamente com os ilícitos de corrupção privada, o de corrupção nas transações comerciais internacionais, antes recolhido no antigo artigo 445 CP. No que diz respeito à literalidade típica, trocou-se a ordem de tipificação das modalidades típicas de corrupção passiva e ativa no sector privado. Na versão vigente, além do mais, é incluído um parágrafo 5<sup>o</sup> ao artigo 286 bis –incumbido de definir, através de uma cláusula de remissão, o conceito de “sociedade”; aplicável às duas figuras delitivas do preceito– e um novo artigo 286 *quater* CP destinado a prever supostos “de especial gravidade”, aplicáveis a todas as condutas descritas na Seção 4<sup>a</sup>.

**11.** Durante a vigência da redação original do tipo de corrupção privada, a questão em torno ao bem jurídico protegido provocou um intenso debate entre a doutrina. E isto apesar da vontade declarada do legislador da Lei Orgânica 5/2010 de salvaguardar a “competência justa e honesta” como mecanismo de tutela das “regras do bom funcionamento do mercado”. As posições dominantes oscilaram entre considerar tutelada a relação de lealdade entre o empresário e o trabalhador e a proteção da competência leal no mercado. A *mens legislatoris*, de um lado, e a presença do elemento do incumprimento de obrigações, de outro, levaram certo sector de expertos a apostar pela tutela de um modelo híbrido ou misto, segundo o qual os ataques à competência, para ser penalmente relevantes, deviam traduzir-se, também, numa atuação contra os deveres de fidelidade próprios da relação laboral interna. Neste sentido, gozou de um certo êxito a construção doutrinal que circunscrevia o objeto de tutela à competência *ad intra* e *ad extra*.

Com a entrada em vigor da Lei Orgânica 1/2015 a tutela da competência leal sai reforçada. A nova designação da Seção 4<sup>a</sup>, juntamente com a eliminação do elemento típico do incumprimento das obrigações –substituído pelo do favorecimento indevido frente a outros– tornam mais forte a proteção do bem jurídico “competência no mercado”. A própria Exposição de Motivos da referida Lei Orgânica defende que na nova Seção “se incluem os crimes de pagamento de subornos para obter vantagens competitivas”.

Neste sentido, o bem jurídico “competência leal” defendido neste trabalho configura-se como um interesse supra-individual e complexo, formado, de um lado, por um objeto de proteção imediato e outro de caráter mediato. O primeiro estaria representado pelos interesses e expectativas económicas dos competidores, concretizados na participação no mercado sem desincentivos derivados de subornos. Isto orientado à salvaguarda de um interesse mais remoto, delimitado no respeito às regras do bom funcionamento de mercado; isto é, da ordem concorrencial previsto na nossa Constituição. Por enquanto, enunciamos esta “competência leal” como “a proteção dos interesses e expectativas económicas dos competidores a participar num sector de atividade regido pelos princípios próprios da concorrência leal, como meio para salvaguardar as regras do funcionamento do mercado derivadas do sistema económico constitucional”.



**12.** Os crimes de corrupção entre particulares são considerados ilícitos *de participação necessária*, pois apesar de a consumação delitiva não requerer a perfeição do acordo corrupto, exige sim a intervenção tendencial de vários sujeitos: um que promete, oferece ou concede o suborno; outro que o solicita, aceita ou recebe, assim como outros possíveis coexistentes –pessoas interpostas, beneficiários, etc.–. Nesse ponto, podemos afirmar que os tipos de corrupção –também os estudados nesta tese– são figuras plurissubjetivas. Assim, por um lado, a modalidade de corrupção privada passiva –prevista no primeiro parágrafo do artigo 286 bis CP– está configurada como um crime especial impróprio, que só pode ser cometido pelo diretivo, administrador, empregado ou colaborador de uma empresa mercantil ou de uma sociedade, atuando por si mesmo ou através de uma pessoa interposta. Por outro lado, a correlativa modalidade ativa é concebida como um crime comum, que pode ser perpetrado por qualquer pessoa, sem necessidade de lhe ser exigida qualidade específica alguma. Esta última afirmação não obsta para reconhecer que a realidade prática pode pôr de manifesto que o habitual será que o benefício indevido seja prometido, oferecido ou concedido por uma pessoa com alguma vinculação ou interesse no mercado –nomeadamente o diretivo, administrador, empregado ou colaborador de uma sociedade ou empresa mercantil–, mas deve apostar-se por considerar que o tipo penal não restringe, *a priori*, a qualidade de sujeito ativo da forma ativa de corrupção no sector privado.

**13.** No que diz respeito às condutas típicas, a descrição contida nos dois primeiros parágrafos do preceito estudado converte o tipo de corrupção privada num crime de mera atividade, de perigo abstrato e de encontro, na medida em que as acções do sujeito corruptor e do corrupto tendem a encontrar-se –se bem que se insista em que, para a consumação delitiva não é preciso a efetiva entrega do benefício indevido nem a realização do ato ou omissão corrupta–, assim como também não se exige a efetiva produção de um dano; basta apenas com a realização das ações típicas. É considerado também um tipo misto alternativo, por quanto a verificação de qualquer das condutas descritas supõe a consumação da figura. A forma passiva é consumada, em primeiro lugar, com a recepção, pedido ou aceitação de um benefício ou vantagem não justificados de qualquer natureza, para si ou para um terceiro. A cara ativa, em segundo lugar, requer a promessa,

oferecimento ou concessão de tal benefício ou vantagem –que pode dar-se em proveito do sujeito ativo ou de terceiros–.

**14.** A eliminação do elemento típico do incumprimento das obrigações, com a reforma de 2015, foi substituída pela dição “como contraprestação para favorecer indevidamente outrem”, na redação do parágrafo primeiro e “como contraprestação para que lhe favoreça indevidamente a ele ou a um terceiro perante outros”, no parágrafo segundo. Esta alteração da redação típica não supõe, no entanto, potenciar o caráter sinalagmático das prestações objeto do pacto corrupto –que, relembre-se, não é necessário que se esgote para se falar de consumação delitiva–, senão que vem reforçar a relação causal entre o benefício ou vantagem não justificados e a atuação do corrupto. Dito favorecimento pode ir em proveito do corruptor ou de um terceiro, tanto na modalidade ativa como passiva de corrupção privada, diferentemente ao que acontecia com a redação original do tipo na qual, dentro da óptica de corrupção passiva, a literalidade dava a entender que apenas era censurável o ato tendente a favorecer “a quem o outorga ou de quem espera o benefício ou vantagem”.

**15.** O âmbito de aplicação típico, após a modificação de 2015, alarga-se a supostos “Na aquisição ou venda de mercadorias, ou na contratação de serviços ou nas relações comerciais”. Com esta nova previsão, que elimina o qualificativo “profissionais” referido aos serviços e incorpora a expressão “relações comerciais” –em relação ao texto produto da Lei Orgânica 5/2010–, é ampliado o contexto mercantil ou comercial no qual podem ser verificadas condutas de corrupção privada merecedoras de sanção penal, chegando a incluir qualquer relação que antecipe o que inclusivamente não implique em sentido estrito a contratação de bens e serviços, sempre que possa ficar protegida pela descrição típica.

**16.** O crime de corrupção entre particulares é consumado, exclusivamente, através de uma atuação dolosa, sendo possível, em princípio, a apreciação do dolo em todas as suas categorias, incluído o dolo eventual. Esta tese fundamenta-se em entender que o favorecimento indevido objeto da contraprestação corrupta não possui a condição de elemento subjetivo do injusto –pois, caso contrário, só poderia ser aceite a comissão delitiva a título de dolo direto–. Neste sentido, reconhece-se a este elemento típico uma certa carga subjetiva, como agente motivador da vontade do corrupto, mas não se ignora o

seu potencial do ponto de vista objetivo, como configurador da conduta típica. Esta forma de entender o favorecimento condiz melhor com a redação da norma após a reforma de 2015 e acrescenta, aliás, efeitos processuais positivos ao reduzir a carga probatória de aspetos subjetivos que podem resultar de difícil acreditação.

Por outra parte, não é possível a sanção penal da corrupção entre particulares a título de imprudência, por não estar expressamente prevista esta possibilidade no artigo 286 bis CP.

**17.** No que diz respeito ao tipo de injusto, torna-se dificilmente imaginável que possam ser de aplicação às condutas de corrupção privada alguma das causas de justificação genéricas, assim como tampouco parece adequado atribuir tal valor ao instituto jurídico do consentimento. Do mesmo modo, o preceito também não prevê nenhuma causa de justificação específica. Por outro lado, a culpabilidade poderia, hipoteticamente, ver-se afetada por alguns supostos de erro, principalmente, de proibição. Não obstante, o raio de ação do crime –lembre-se, o âmbito do mercado, a compra-venda de mercadorias e a contratação de serviços– torna complicado manter o desconhecimento do ilícito penal com efeito exculpatório. Neste sector de atividade participam pessoas geralmente com conhecimentos; âmbito no qual, aliás, vigoram já normas sectoriais que proíbem, em sede administrativa, condutas muito similares às sancionadas penalmente. Neste ponto, jogam um papel muito relevante também os códigos de boas práticas e de *compliance* adoptados por um cada vez maior número de empresas.

**18.** As consequências jurídico-penais derivadas da comissão deste crime são, cumulativamente, a de prisão de seis meses a quatro anos, inabilitação especial para o exercício de indústria ou comércio por tempo de um a seis anos e multa do tanto ao triplo do valor do benefício ou vantagem. Resulta desmedida a atribuição acumulada de três consequências jurídicas severas, sem dúvida desproporcionada em comparação com o previsto em outros crimes socioeconómicos, como a estafa –na qual, aliás, é exigida a produção de um concreto dano patrimonial, elemento ausente na regulação da corrupção entre particulares–.

Da margem de prisão recolhida no artigo 286 bis é de salientar que excede do mandado pela Decisão Marco 2003/568/JAI, instrumento do qual –segundo declara o nosso legislador– traz causa a introdução desta figura delitiva no nosso ordenamento. Por outra parte, embora tenham sido destacadas as bondades da pena de multa, em abstrato, para a luta contra a delinquência económica, a concreta eleição por nosso legislador da multa proporcional pode revelar-se como inadequada –de um ponto de vista, uma vez que será de complexa aplicação nos casos nos quais o benefício ou vantagem não revistam natureza económica e porque a sua aplicação pode tornar a figura num crime de resultado e, desde outra óptica, por vincular a quantia ao valor do benefício ou vantagem e não à entidade da lesão irrogada ao bem jurídico–, devendo ter-se optado pelo sistema de dias-multa. No que diz respeito à pena de inabilitação especial, deve salientar-se que a sua inclusão no tipo espanhol foi derivada, novamente, pelas obrigações contidas na Decisão Marco comunitária.

**19.** Encontramo-nos perante um crime perseguível de ofício, conforme ao disposto, por exclusão, no artigo 287 CP, pelo qual, para proceder, não será necessária denúncia da pessoa agravada ou prejudicada. Isto vem reforçar a ideia de que o bem jurídico se encontra conectado com os interesses gerais no mercado e, nomeadamente, com a competência. Aliás, o artigo 288 dispõe que a sentença será publicada nos jornais oficiais e, se for solicitado pelo prejudicado, será acordada a sua reprodução, total ou parcial, por qualquer outro meio, e todo o custo ficará por conta do condenado. Estas previsões são igualmente aplicáveis ao crime de corrupção no desporto.

**20.** O parágrafo terceiro do artigo 286 bis prevê uma atenuação potestativa para o órgão jurisdicional, das conhecidas como de “discrecionariedade regrada”, consistente na possibilidade de aplicar a pena inferior em grau à estabelecida no artigo –tanto no que diz respeito à prisão como à inabilitação especial– e reduzir a multa a seu prudente arbítrio, em atenção à quantia do benefício ou valor da vantagem ou à transcendência das funções do culpado. O estabelecimento da redução punitiva foi justificado, por um lado, pela severidade das penas previstas neste preceito e, por outro, porque trata de modular a resposta penal à atuação de sujeitos com diferentes posições e capacidade de decisão dentro do ente empresarial e com relação ao mercado. No entanto, resulta criticável que a menor afeção

ao bem jurídico não tenha cristalizado como um dos critérios de aplicação da atenuante.

**21.** A reforma dos crimes de corrupção nos negócios introduzida em 2015 incorpora um novo artigo 286 *quater* destinado a recolher alguns supostos de “especial gravidade”, nos quais as respetivas penas serão impostas em sua metade superior, podendo atingir-se –de novo, é outorgada tal possibilidade a juízes e tribunais– a pena superior em grau, sempre que concorrerem alguma das quatro circunstâncias enunciadas no início do segundo parágrafo da norma. Tem sido criticada, com fundamento, a redação desta figura pois, por um lado, a necessidade de intensificar as penas não vem recolhida na Decisão Marco –e pode derivar numa exacerbação da resposta penal contrária a toda racionalidade– e, por outro, os critérios de agravação escolhidos pelo legislador guardam escassa relação com o bem jurídico protegido.

**22.** O artigo 288 CP prevê expressamente atribuir responsabilidade penal às pessoas jurídicas por crimes de corrupção nos negócios. Na concretização do sistema de responsabilidade, ganha uma especial importância o papel dos mecanismos de *compliance*, assim como dos códigos de conduta e de boas práticas num sector tão relevante como o empresarial que desenvolve a sua atividade no contexto do mercado.

**23.** Juntamente com a figura de corrupção entre particulares, foi vontade do legislador penal de 2010, como já foi dito, incorporar no parágrafo quarto do artigo em estudo o subtipo de corrupção no desporto. Apesar de ter originado certa controvérsia, a intervenção do Direito penal na esfera desportiva explica-se pela exponencial importância dos interesses económicos envolvidos na prática de algumas modalidades e disciplinas desportivas. Neste sentido, o desporto deixou de ser uma simples atividade privada para passar a ostentar um incontestável carácter público que justifica a atenção dos poderes públicos e a maior presença regulatória e sancionadora do ordenamento jurídico e, por conseguinte, também, da disciplina criminal.

**24.** De modo diferente ao que acontecia com a corrupção privada, a inclusão da fraude desportiva no nosso sistema legal não respondeu

à necessidade de cumprir obrigação supranacional alguma. Pelo contrário, no momento de se produzir a reforma de 2010 em Espanha, não existia qualquer instrumento normativo internacional na matéria, sendo que na atualidade apenas encontramos o Convénio do Conselho da Europa sobre Manipulação das Competições Desportivas, que não se encontra em vigor, nem de forma geral, nem, menos ainda, para o nosso país.

Tampouco o exame do Direito comparado apresenta diferentes modelos de incriminação que possam ajudar a delimitar o interesse jurídico relevante no nosso ordenamento. Não existem, no seio dos diferentes países, correntes uniformes e cada uma das regulamentações existentes parecem responder mais ao alarma social provocado pelo conhecimento de escândalos e casos particulares do que à intenção de apostar por uma harmonização da política criminal na matéria.

**25.** Tendo em conta o anterior, a tarefa de concretizar e delimitar o bem jurídico tutelado deve ser abordado seguindo outros parâmetros. As disquisições doutrinárias têm oscilado entre a negação da existência de um valor digno de salvaguarda penal e a proteção dos valores desportivos –singularizados no denominado “jogo limpo” ou *fair play*– ou o tutelado de critérios económicos derivados da prática do desporto. Em nossa opinião, devem ser tidas em conta duas variáveis à hora de delimitar o bem digno de proteção: a tutela do resultado desportivo, requerida pela própria literalidade típica, e a ubiquação sistemática do crime –entre os crimes socioeconómicos–.

Por tudo isto, apostamos por uma construção eclética que pode ser referida como “lealdade desportiva” –denominação que permite dar coerência a este bem jurídico em relação ao de corrupção privada– e ser categorizada, igualmente, como um bem jurídico complexo e coletivo, com um valor protegido imediatamente –a integridade e imprevisibilidade do resultado, requerido pela redação da norma– e um objeto tutelado de forma mediata, vinculado à dimensão económica do desporto e circunscrito nos interesses e expectativas económicas de todos os atores e intervenientes no facto desportivo. Desta maneira, definimos este bem jurídico como a *integridade e imprevisibilidade do resultado obtido mediante o respeito das regras da modalidade desportiva, como meio de tutela das expectativas económicas derivadas do correto e leal desenvolvimento do acontecimento desportivo*.

**26.** Tal como acontecia na modalidade de corrupção privada, a fraude desportiva é um crime plurissubjetivo, no qual podem intervir, potencialmente, várias categorias pessoais. De modo paralelo ao tipo previsto nos dois primeiros parágrafos do artigo 286 bis, consideramos que a norma recolhe uma modalidade passiva, delimitada como um crime especial impróprio, da qual apenas podem ser sujeito ativo o diretivo, administrador, empregado ou colaborador de uma entidade desportiva, qualquer que seja a forma jurídica desta, ou o desportista, árbitro ou juiz que participa no evento cujo resultado se pretende manipular; e uma modalidade ativa, para a qual não existe obstáculo legal em considerar como crime comum –se bem que concordemos em reconhecer que, na prática, o habitual será que sejam sujeitos ativos os vinculados à entidade desportiva ou aqueles com um interesse direto na prova, encontro ou competição–, sendo possível, em ambos os casos, a comissão de forma direta o através de pessoa interposta.

**27.** A cláusula de remissão que dá início ao parágrafo quarto supõe que as condutas típicas são definidas de igual modo à corrupção privada. Assim, a forma passiva poderia ser descrita, integrando todos os elementos presentes no primeiro parágrafo do preceito, como “receber, solicitar ou aceitar um benefício ou vantagem não justificados de qualquer natureza, para si ou para um terceiro, como contraprestação para favorecer indevidamente outrem” e a forma ativa, por remissão ao numeral segundo, como “prometer, oferecer ou conceder um benefício ou vantagem não justificados, de qualquer natureza, para eles ou para terceiros, como contraprestação para que ele ou um terceiro seja favorecido indevidamente frente a outros”.

**28.** Uma das particularidades do tipo de corrupção desportiva baseia-se em que especifica em que consiste o ato de favorecimento indevido, devendo concretizar-se este na finalidade de “predeterminar ou alterar de maneira deliberada e fraudulenta o resultado de uma prova, encontro ou competição desportiva”. Paralelamente ao estabelecido na tipificação da corrupção entre particulares, deve considerar-se que este elemento determina o tipo objetivo, não podendo ser ignorada uma certa potencialidade subjetiva como aspeto tendencial específico do comportamento do sujeito ativo.

**29.** No que diz respeito à predeterminação ou alteração deliberada e fraudulenta, ganha especial significação o debate em relação às *peitas*. Do ponto de vista jurídico-penal, não oferece controvérsia a falta de antijuridicidade dos incentivos por vencer entregados ao desportista pelo próprio clube ou entidade desportiva na qual desenvolve a sua atividade; prémios em inúmeras ocasiões públicos e conhecidos, e assimiláveis a um complemento salarial por objetivos, tão habitual no mundo empresarial. Por outro lado, tampouco oferece dúvidas o facto de as primas a terceiros outorgadas por perder ou empatar entrarem em cheio no âmbito típico do artigo 286 bis. 4 CP. A discussão surgiu em torno às peitas entregues por terceiros por vencer, encontrando-se diversas atitudes contrapostas em relação à adequação ou não do reproche penal. Segundo o nosso entender, estas não devem ser consideradas típicas, visto que uma peita por ganhar, embora seja dada por um terceiro, não deriva numa adulteração fraudulenta do resultado e, seja como for, porque apostamos por uma aplicação restritiva do crime.

**30.** Não adquire relevância penal, no entanto, a adulteração do resultado de qualquer evento desportivo, mas simplesmente daqueles que ostentem “*especial relevância económica ou desportiva*”. Esta expressão substitui o qualificativo “profissionais” que era incluída na redação inicial de 2010 e que agora passou a fazer parte de um dos supostos agravados recolhidos no artigo 286 *quater* CP. Do mesmo modo, na literalidade vigente o quarto parágrafo incorpora um segundo trecho que inclui uma definição autêntica daquilo que deve ser entendido por “especial relevância económica ou desportiva”. Ambas as circunstâncias devem ser interpretadas de forma alternativa, de modo que bastará que se verifique qualquer delas para considerar típico um determinado facto ilícito de corrupção desportiva.

De “especial relevância económica” deve considerar-se aquela prova, encontro ou competição desportiva na qual “a maior parte dos participantes na mesma recebem qualquer tipo de retribuição, compensação ou rendimento económico pela sua participação na atividade”, devendo interpretar-se tal como aquele evento no qual, pelo menos metade mais um dos intervenientes, receberem emolumentos económicos derivados diretamente da participação e outorgados pelo clube ou entidade desportiva à qual pertençam ou pelos organizadores do acontecimento desportivo. De “especial relevância desportiva”, por outra parte, deverá entender-se “aquela



que for qualificada no calendário desportivo anual aprovado pela federação desportiva correspondente como competição oficial da máxima categoria da modalidade, especialidade, ou disciplina”. Neste último caso, encontramos-nos perante um elemento que converte o tipo em norma penal em branco, ao ser preciso acudir à normativa administrativa desportiva para determinar o conteúdo do mesmo. De acordo com nosso parecer, deverá entender-se como de “especial relevância desportiva” a prova, encontro ou competição desportiva oficial e de máxima categoria, organizadas por Federações ou entidades de âmbito estatal, sem que exista obstáculo legal para considerar tais as organizadas por Federações autonómicas ou, inclusivamente, de âmbito territorial inferior.

**31.** De igual modo que a corrupção entre particulares, é concebida a comissão do tipo de fraude desportiva apenas a título de dolo, não sendo possível a apreciação imprudente, por não estar expressamente prevista no Código. Ao contrário da modalidade privada no mercado, no entanto, a contundência com que a literalidade normativa exprime a finalidade em que se traduz o favorecimento indevido – “predeterminar ou alterar de maneira deliberada e fraudulenta – estorva a consideração, a efeitos consumativos, do dolo eventual; não obstante será preciso estar atentos a futuras interpretações jurisprudenciais ao efeito.

**32.** As penas previstas para a figura delitiva do parágrafo quarto são as mesmas, de novo por remissão, que as recolhidas para a corrupção entre particulares. São aplicáveis, neste sentido, as considerações vertidas em seu momento. Por acréscimo, no que diz respeito à corrupção no desporto, são reforçadas as objecções em relação à exacerbação da resposta punitiva –tanto qualitativa como quantitativamente– e são expostos sérios interrogantes em torno à aplicabilidade da inhabilitação especial, pois a redação típica impede “*o exercício de indústria ou comércio*”; sectores que pouco têm a ver com o desporto, devindo ter-se optado por uma consequência jurídica mais acorde com o contexto em que se insere o subtipo ao qual nos referimos.

**33.** Resulta plenamente aplicável à fraude desportiva a atenuação potestativa do parágrafo terceiro do artigo 286 bis CP. A sua apreciação

segue a mecânica exposta anteriormente, apesar de se ter dito, em relação ao tipo no desporto, que a concreta escolha dos critérios que dão lugar ao privilégio punitivo pode derivar em problemas interpretativos, por estes não terem excessiva relação com a esfera do desporto.

**34.** São predicáveis da corrupção desportiva também os supostos de “especial gravidade” recolhidos no artigo 286 *quater*. No contexto que nos ocupa, serão aplicáveis não só as quatro circunstâncias previstas para a corrupção privada, senão que, aliás, o último inciso prevê duas específicas para a fraude no desporto: que a adulteração tenha por finalidade influir em jogos de azar ou apostas desportivas, ou bem que o evento desportivo seja qualificado como oficial, profissional e de âmbito estatal ou, em seu caso, oficial e de âmbito internacional.

**35.** No que diz respeito à fraude desportiva, a realidade prática pode apresentar interessantes relações concorrentes com outras figuras delitivas. Apesar da singularidade deste crime, apresenta-se especialmente plausível a possibilidade de apreciar o concurso com o crime de estafa em supostos de apostas desportivas nas quais, fruto da adulteração do resultado, se verifica um dano patrimonial ou economicamente avaliável. Da mesma forma, não serão infrequentes os casos de concurso entre a corrupção desportiva e o crime de dopagem, na medida em que se cometa este último para “modificar os resultados das competições” em que participar o desportista ao qual forem subministradas substâncias ou grupos farmacológicos proibidos, assim como métodos não regulamentares.

**36.** Também em relação à corrupção no desporto o artigo 288 CP prevê atribuir responsabilidade penal às pessoas jurídicas, seguindo o esquema e o sistema de atribuição da mesma, predicável no que diz respeito ao crime de corrupção entre particulares. Com isto, suscita os mesmos interrogantes que no referido suposto e, no concreto contexto da figura do artigo 286 bis. 4 CP, questiona-se se a literalidade típica tomou em consideração as peculiaridades dos entes jurídicos desportivos, que oscilam entre um clube desportivo –cujo regime jurídico é equiparável a uma associação e cujos estatutos, precisamente, se inspiram nos mandados da Lei Orgânica 1/2002, de 22 de Março, reguladora do Direito de Associação– até uma Sociedade Anónima Desportiva, passando pelas Federações desportivas –

entidades que, apesar de se regerem pelo Direito privado, têm delegadas determinadas funções de carácter público; são consideradas agentes colaboradores da Administração pública-.



## BIBLIOGRAFÍA

### BIBLIOGRAFÍA IMPRESA.

ABANTO VÁSQUEZ, M.A.: “Delitos contra el mercado, viejas prácticas, nuevas figuras: delitos contra la libre y leal competencia”, en SERRANO-PIEDRECASAS, J.R. y DEMETRIO CRESPO, E. (dirs.): *Cuestiones actuales de Derecho Penal empresarial*, Colex, Madrid, 2010.

AGUDO FERNÁNDEZ, E.; JAÉN VALLEJO, M. y PERRINO PÉREZ, A.L.: *Derecho Penal de las personas jurídicas*, Dykinson, Madrid, 2016.

AGUIAR, A.: “Sobre la compra de partidos de fútbol”, en la web de Iusport, 10 de mayo de 2007.

ALCAIDE ZUGAZA, L.: “Corrupción: obstáculo al crecimiento y a la competitividad”, en *Economía exterior: estudios de la revista Política Exterior sobre la internacionalización de la economía española*, nº 31, 2004.

ALEMANY BELLIDO, J.I.: “OCDE y España: distintas listas de paraísos fiscales”, en la web de Cinco Días, 21 de junio de 2010.

ÁLVAREZ VIZCAYA, M.: “Fraude en el deporte”, en *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, nº 4, marzo-agosto 2013.

ANARTE BORRALLA, E.: “Lección XXI. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (18). Corrupción entre particulares y corrupción deportiva”, en BOIX REIG, J. (dir.): *Derecho Penal. Parte Especial*, vol. II, Iustel, Madrid, 2012.

- “Los delitos de corrupción en los negocios tras la reforma penal de 2015: bases político-criminales y técnico-jurídicas”, en *Revista Jueces para la Democracia. Información y debate*, nº 87, noviembre 2016.

ANARTE BORRALLA, E. y ROMERO SÁNCHEZ, C.: “El delito de corrupción deportiva. Aspectos metodológicos, dogmáticos y político-criminales”, en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, nº 14, artículo 20, 2012.

ANDRÉS ALVEZ, R.: “Análisis del Convenio del Consejo de Europa sobre la manipulación de las competiciones deportivas”, en *Revista Jurídica de Derecho de Deporte y Entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y música*, nº 44, Aranzadi, Navarra, 2014.

ANDRÉS DOMÍNGUEZ, A.C.: “El nuevo delito de corrupción entre privados (art. 286 bis CP)”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J.; COBOS GÓMEZ DE LINARES, M.A.; GÓMEZ PAVÓN, P.; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A. y MARTÍNEZ GUERRA, A. (coords.): *Libro Homenaje al profesor Luis Rodríguez Ramos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

ARGANDOÑA, A.: “La corrupción en el sector privado”, Documento de Investigación, nº 531, Cátedra Economía y Ética, IESE Business School, diciembre 2003, p. 3. Disponible en la web del IESE Business School. Universidad de Navarra.

ARJONA TRUJILLO, A.M.: “La corrupción política: una revisión de la literatura”, Documento de trabajo 02-14, Serie de Economía 04, Universidad Carlos III de Madrid, julio 2002. Disponible en la web de la Universidad Carlos III.

ASTIAZARÁN IRIONDO, J.L.: “Capítulo 1. Introducción general”, en CARDENAL CARRO, M.; GARCÍA CABA, M.M. y GARCÍA SILVERO, E.A. (coords.): *¿Es necesaria la represión penal para evitar los fraudes en el deporte profesional?*, Laborum, Murcia, 2009.

BACIGALUPO, E.: *Teoría y práctica del Derecho penal*, tomo I, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset-Marcial Pons, Madrid, 2009.

- “Corrupción entre particulares (Artículo 286 bis del Código Penal)”, en BACIGALUPO, E.: *Compliance y Derecho Penal*, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2011.
- «Compliance» y derecho penal. *Prevención de la responsabilidad penal de directivos y de empresas*, Hammurabi, Buenos Aires, 2012.

BAJO FERNÁNDEZ, M. y BACIGALUPO SAGGESE, S.: *Derecho penal económico*, 2ª ed., Editorial universitaria Ramón Areces, Madrid, 2010.

BAJO FERNÁNDEZ, M.; FEIJÓO SÁNCHEZ, B.J. y GÓMEZ-JARA DÍEZ, C.: *Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Adaptada a la Ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal*, 2ª ed., Civitas-Thomson Reuters, Navarra, 2016.

BALDAN, E.L.: *Fundamentos do Direito Penal Econômico*, Juruá Editora, Curitiba, 2010.

BAÑERES SANTOS, F.: “La corrupción entre privados (art. 286 bis, 287 y 288)”, en QUINTERO OLIVARES, G. (dir.): *La Reforma Penal de 2010: análisis y comentarios*, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2010.

- “El delito de corrupción entre particulares”, en *Revista Jurídica de Catalunya*, vol. 110, nº 4, Barcelona, 2011.

BAÑERES SANTOS, F. y NIETO MARTÍN, A.: “Corrupción entre privados”, en *La Armonización del Derecho Penal español: Una evolución legislativa*, Boletín de Información del Ministerio de Justicia, año LX, suplemento al nº 2015, junio 2006.

BARRA GALLARDO, N.: *Fenómenos de corrupción en el mundo actual. Relación entre lo privado y lo público*, LexisNexis, Santiago de Chile, 2007.

BARRENA CRESPO, L.: “El delito de corrupción deportiva”, en la web de Iusport, 16 de enero de 2014.

BENAVIDES SCHILLER, A.: “Acerca de la corrupción pública y privada en España a la luz de los delitos contra la Administración Pública (Título XIX del Libro II CP español)”, en *Cuadernos de Política Criminal*, nº 108, Época II, Dykinson, Madrid, 2012.

BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: *El delito de “fraudes deportivos”. Aspectos criminológicos, político-criminales y dogmáticos del artículo 286bis.4 del Código Penal*, Dykinson, Madrid, 2011.

BENITO SÁNCHEZ, C.D. y CERINA, G.: “Apuntes sobre los delitos de corrupción: problemas actuales y perspectiva de reforma”, en DIEGO DÍAZ-SANTOS, M.R., MATELLANES RODRÍGUEZ, N.P. y FABIÁN CAPARRÓS, E.A. (coords.): *De los delitos y de las penas, hoy: la nueva reforma del Código Penal*, Ratio Legis, Salamanca. 2009.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.: *Apuntes de Derecho Mercantil*, 11ª ed., Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2010.

- “Artículo 2. Ámbito objetivo”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.): *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2011.

BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I.: “La tutela de la competencia en la propuesta de Anteproyecto de nuevo Código Penal”, en BARBERO SANTOS, M. (coord.): *Los delitos socio-económicos*, Universidad Complutense, Madrid, 1985.

BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. y CERINA, G.: “¿Un delito de corrupción privada? Obligaciones internacionales y soluciones adoptadas en el Derecho Comparado”, en *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, nº 89, marzo-abril, 2011.

- “Algunos problemas del nuevo delito corrupción en el deporte”, en *Revista General de Derecho Penal*, nº 18, Iustel, Madrid, 2012.

BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. y FABIÁN CAPARRÓS, E.A.: “Corrupción y derecho penal: nuevos perfiles, nuevas respuestas”, en *Revista Brasileira de Ciências Criminais*, nº 81, 2009.

BERGÉS TARILONTE, M.: “El delito de corrupción privada”, en la web de LegalToday, 15 de mayo de 2012.

BERNAL DEL CASTILLO, J.: “Los delitos de soborno en el Derecho Penal español y británico”, en *Cuadernos de Política Criminal*, nº 116, Época II, Dykinson, Madrid, septiembre 2015.

BIDINO, C.: “O problema específico da corrupção no setor privado (no Brasil e em Portugal)”, en CRUZ SANTOS, C., BIDINO, C. y THAÍS DE MELO, D. (coords.): *A corrupção: reflexões (a Partir da Lei, da Doutrina e da Jurisprudência) sobre o seu Regime Jurídico-Criminal em Expansão no Brasil e em Portugal*, Coimbra Editora, Coimbra, 2009.

BLANCO CORDERO, I.: “La reforma de los delitos de corrupción mediante la Ley Orgánica 5/2010: nuevos delitos y aumento de penas”, en *Diario La Ley*, nº 7534, Sección Tribuna, LaLey, Madrid, 23 de diciembre de 2010.

- “Sección 4.<sup>a</sup> De la corrupción entre particulares. Artículo 286 bis”, en GÓMEZ TOMILLO, M. (dir.): *Comentarios al Código Penal*, Lex Nova, Valladolid, 2010.

BOLEA BARDON, C.: “El delito de corrupción privada. Bien jurídico, estructura típica e intervinientes”, en *InDret. Revista para el análisis del Derecho*, nº 2, Barcelona, marzo 2013.

- “Deberes del administrador y prácticas de *kick-back*”, en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, nº 17, artículo 17, 2015.



- “El delito de corrupción privada: bien jurídico y *ratio legis*”, en CASTRO MORENO, A. y OTERO GONZÁLEZ, P. (dirs.): *Prevención y tratamiento punitivo de la corrupción en la contratación pública y privada*, Dykinson, Madrid, 2016.

BRODY, R.G. y KIEHL, K.A.: “From white-collar crime to red-collar crime”, en *Journal of Financial Crimes*, vol. 17, issue 3, 2010.

BUERBA PANDO, A. de: “El delito de corrupción entre particulares”, en *Pérez-Llorca. Newsletter*, enero-marzo 2011. Disponible en la web de Pérez-Llorca Abogados.

BUSTOS RAMÍREZ, J.: *Manual de Derecho Penal* (aumentada y corregida por HORMAZÁBAL MALARÉE), 4ª ed., PPU, Barcelona, 1994.

BUSTOS RAMÍREZ, J.: “Principios fundamentales de un Derecho penal democrático”, en *Revista de Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica*, nº 8, marzo 2004.

CAÍNZOS, J.A.: “Aplicación extraterritorial de la Ley penal española a los delitos de corrupción entre particulares y en las transacciones económicas internacionales”, *Client briefing*, Clifford Chance, marzo 2014, p. 2. Disponible en la web de Clifford Chance.

CALVO CARAVACA, A.L.: *Derecho Antitrust Europeo. Parte General: la competencia*, tomo I, Colex, Madrid, 2009.

CALVO PELLICER, S.: “Corrupción entre particulares. De pícaro a delincuente”, en la web de LegalToday, 2 de mayo de 2017.

CAMPANER MUÑOZ, J.: “La corrupción entre particulares”, en *Lex Nova Online*. Disponible en la web de la Revista *Pensamiento Penal*.

CARBAJO CASCÓN, F.: “Aspectos jurídico-mercantiles de la corrupción”, en FABIÁN CAPARRÓS, E. A. (coord.): *La corrupción: aspectos jurídicos y económicos*, Ratio Legis, Salamanca, 2000.

- “Corrupción y derecho privado patrimonial”, en RODRÍGUEZ GARCÍA, N. y FABIÁN CAPARRÓS, E.A. (coords.): *Corrupción y delincuencia económica*, Universidad de Santo Tomás-Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2008.

CARTIER-BRESSON, J : “Les «réseaux de corruption et la stratégie des « 3S »”: Sleep-Silence-Smile, en M. BORGHI y P. MEYER-BISCH (eds.), *La*

*corruption, l'envers des droits de l'homme*, Éditions Universitaires Fribourg Suisse, Friburgo, 1995.

CARUSO FONTÁN, M.V.: "El concepto de corrupción. Su evolución hacia un nuevo delito de fraude en el deporte como forma de corrupción en el sector privado", en *Revista Foro. Nueva época*, nº 9, 2009.

CASTILLO CODES, E. del: "La responsabilidad penal de las personas jurídicas", en la web de Noticias Jurídicas, Madrid, 1 de diciembre de 2011.

CASTRESANA FERNÁNDEZ, C.: "Corrupción, globalización y delincuencia organizada", en FABIÁN CAPARRÓS, E. A. y RODRÍGUEZ GARCÍA, N. (coords.): *La corrupción en un mundo globalizado: análisis interdisciplinar*, Ratio Legis, Salamanca, 2004.

CASTRO MORENO, A.: "El nuevo delito de corrupción en el deporte", en *Revista Jurídica de Derecho de Deporte y Entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y música*, nº 28, Aranzadi, Navarra, 2010.

- "El nuevo delito de corrupción privada", texto de la conferencia impartida en las XXXII Jornadas de la Abogacía General del Estado. "El nuevo Código Penal", Ministerio de Justicia-Abogacía General del Estado, Madrid, 18 de noviembre de 2010. Disponible en la web del Ministerio de Justicia.
- "Capítulo 38. Corrupción en el deporte", en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J. y GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. (dirs.): *Comentarios a la Reforma penal de 2010*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.
- "Capítulo 22. Corrupción entre particulares", en ORTIZ DE URBINA GIMENO, I. (coord.): *Memento Práctico Francis Lefebvre. Penal Económico y de la Empresa. 2011-2012*, ediciones Francis Lefebvre, Madrid, 2011.
- "Capítulo 23. Corrupción en los negocios. Sección 1. Contratación de mercancías y servicios", en OLIVA-AYALA Abogados: *Memento Práctico Francis Lefebvre. Penal Económico y de la Empresa. 2016-2017*, ediciones Francis Lefebvre, Madrid, 2016.
- "Capítulo 23. Corrupción en los negocios. Sección 2. Deporte", en OLIVA-AYALA Abogados: *Memento Práctico Francis Lefebvre. Penal Económico y de la Empresa. 2016-2017*, ediciones Francis Lefebvre, Madrid, 2016.

- “Capítulo 23. Corrupción en los negocios. Sección 4. Tipos agravados”, en OLIVA-AYALA Abogados: *Memento Práctico Francis Lefebvre. Penal Económico y de la Empresa. 2016-2017*, ediciones Francis Lefebvre, Madrid, 2016.

CERINA, G. y BRAVO, C.: “La Corrupción en el sector privado. Apuntes de derecho comprado e internacional”, en ROMERO GUZMÁN, J.J. (coord. y ed.), RODRÍGUEZ GARCÍA, N. y OLIVARES, J.M. (eds. asociados), *Buen Gobierno y Corrupción. Algunas perspectivas*, cap. XI, Ediciones Derecho UC, Santiago de Chile, 2008.

CHAMBOST, E.: *Los paraísos fiscales*, Pirámide, Madrid, 1982.

COLANTUONI, L.: “Capítulo 4. Fraude y apuestas deportivas en el fútbol profesional: Casos recientes en Italia y análisis comparativo”, en BOSCH CAPDEVILA, E. y FRANQUET SUGRAÑES, M.T. (coords.): *Dopaje, fraude y abuso en el deporte*, Bosch, Barcelona, 2007.

COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA, M.: “Sección Cuarta. De la corrupción entre particulares”, en CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C. (dir.): *Código Penal comentado. Con concordancias y jurisprudencia*, 3ª ed., Tomo 1, Bosch, Barcelona, 2012.

CONTRERAS ALFARO, L.H.: *Corrupción y principio de oportunidad penal. Alternativas en materia de prevención y castigo a la respuesta penal tradicional*, Ratio Legis, Salamanca, 2005.

CORTE IBÁÑEZ, L. de la, y GIMÉNEZ-SALINAS FRAMIS, A.: *Crimen.org. Evolución y claves de la delincuencia organizada*, Ariel, Barcelona, 2010.

CORTÉS BECHIARELLI, E.: *El delito de dopaje*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007.

- “La llamada corrupción entre particulares”, en JUANES PECES, A. (dir.); ALBA FIGUERO, M.C.: (coord.): *Reforma del Código Penal. Perspectiva económica tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio. Situación Jurídico-Penal del Empresario*, El Derecho, Madrid, 2010.
- *El delito de corrupción deportiva*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.

CUESTA ARZAMENDI, J.L. de la: “Iniciativas internacionales contra la corrupción”, en *Revista Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología*, nº 17, 2003.

- “Armonización penal en la Unión Europea”, en DA COSTA ANDRADE, M.; ANTUNES, M.J. y AIRES DE SOUSA, S. (dirs.): *Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias*, vol. I, Coimbra Editora-Universidade de Coimbra, Coímbra, 2009.
- “La corrupción ante el Derecho y la Justicia”, en *Diario La Ley*, nº 8153, Sección Tribuna, LaLey, Madrid, 20 de septiembre de 2013.

CUESTA ARZAMENDI, J.L. de la, y BLANCO CORDERO, I.: “La criminalización de la corrupción en el sector privado: ¿asignatura pendiente del Derecho Penal español?”, en DÍEZ RIPOLLÉS, J. L. (coord.): *La Ciencia del Derecho Penal ante el nuevo siglo: libro homenaje al Profesor Doctor D. José Cerezo Mir*, Tecnos, Madrid, 2002.

CUESTA ARZAMENDI, J.L. de la (dir.); DE LA MATA BARRANCO, N.J. (coord.): *Responsabilidad penal de las personas jurídicas*, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2013; GÓMEZ TOMILLO, M.: *Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas*, 2ª ed., Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2015.

CUGAT MAURI, M.: “Artículo 445”, en CÓRDOBA RODA, J. y GARCÍA ARÁN, M.: *Comentarios al Código Penal. Parte Especial*, tomo II, Marcial Pons, Madrid, 2004.

- “Corrupción privada”, en BOIX REIG, J. (dir.): *Diccionario de Derecho Penal Económico*, Iustel, Madrid, 2008.

DEMETRIO CRESPO, E.: “Consideraciones sobre la corrupción y los delitos contra la Administración Pública”, en FERRÉ OLIVÉ, J.C. (ed.): *Fraude y corrupción en la Administración Pública. Delitos financieros, fraude y corrupción en Europa*, vol. III, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2002.

- “La corrupción como freno decisivo a la consolidación del Estado de Derecho: respuesta penal”, en BERDUGO DE LA TORRE, I. y RIVERO ORTEGA, R. (eds.), *El Estado de derecho latinoamericano: integración económica y seguridad jurídica en Iberoamérica*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2003.

- “El significado político del Derecho penal económico”, en DEMETRIO CRESPO, E. (*dir.*) y MAROTO CALATAYUD, M. (*coord.*): *Crisis financiera y Derecho Penal Económico*, Editorial B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2014.

DIMITRIS ZIOUVAS, L.M.: “Alemania”, en el artículo “Sistemas penales comparados: Corrupción en el sector privado”, en *Revista Penal*, nº 11, 2003.

ENCINAR DEL POZO, M.A.: “La transparencia de las relaciones mercantiles y la reforma del Código Penal de 2010”, en *Cuadernos de Política Criminal*, nº 103, Época II, Dykinson, Madrid, 2011.

- *El Delito de Corrupción Privada en el Ámbito de los Negocios*, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2016.

ESCUADERO MUÑOZ, M.: “El delito de corrupción en el deporte: el delito de dopaje”, en *Revista Foro FICP. Tribuna y Boletín de la FICP*, nº 2017-1, Fundación Internacional de Ciencias Penales, Madrid, mayo 2017.

ESER, A.: “Deporte y Justicia Penal”, en *Revista Penal*, nº 6, 2000.

ESTEVE PARDO, J.: “La regulación de la economía desde el Estado garante”, documento disponible en la web de la Universidad de Cantabria.

ESTÉVEZ SÁNCHEZ DE ROJAS, C.: *Delito de corrupción entre particulares*, Fe d’erratas, Madrid, 2013.

FABIÁN CAPARRÓS, E.A.: “La corrupción política y económica: anotaciones para el desarrollo de su estudio”, en FABIÁN CAPARRÓS, E.A. (*coord.*): *La corrupción: aspectos jurídicos y económicos*, Ratio Legis, Salamanca, 2000.

FARALDO CABANA, P.: “Hacia un delito de corrupción en el sector privado”, en *Revista Estudios Penales y Criminológicos*, vol. 23, Publicaciones Universidad de Santiago de Compostela, 2001.

FEIJOO SÁNCHEZ, B.: “Imputación objetiva en el Derecho penal económico: el alcance del riesgo permitido. Reflexiones sobre la conducta típica en el Derecho penal del mercado de valores e instrumentos financieros y de la corrupción entre particulares”, en

SILVA SÁNCHEZ, J.M. y MIRÓ LINARES, F. (dirs.): *La teoría del delito en la práctica penal económica*, LaLey, Madrid, 2013.

FERNÁNDEZ AJENJO, J.A.: *El control de las administraciones públicas y la lucha contra la corrupción. Especial referencia al Tribunal de Cuentas y al a Intervención General de la Administración del Estado*, Civitas-Thomson Reuters, Navarra, 2011.

FERNÁNDEZ BAUTISTA, S.: “Capítulo X. El delito de corrupción entre particulares (art. 286 bis CP): una interpretación restrictiva”, en QUERALT JIMÉNEZ, J.J. y SANTANA VEGA, D.M. (dirs.): *Corrupción pública y privada en el Estado de Derecho*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

FERNÁNDEZ CASTEJÓN, E.B.: “Corrupción en los negocios: el «favorecimiento indebido» como elemento nuclear del nuevo artículo 286 bis tras la reforma de 2015”, en *Cuadernos de Política Criminal*, nº 117, Época II, Dykinson, Madrid, diciembre 2015.

FERNÁNDEZ PANTOJA, P.: “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la actividad deportiva: estudio comparativo de los sistemas jurídico-penales italiano y español”, en MORILLAS CUEVA, L. y MANTOVANI, F. (dirs.); BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F. (coord.): *Estudios sobre Derecho y Deporte*, Dykinson, Madrid, 2008.

FERRÉ OLIVÉ, J.C.: “Corrupción en el sector privado”, en FERRÉ OLIVÉ, J.C. (ed.): *Korupcja w sektorze prywatnym: harmonizacja ustawodawstwa karnego w zakresie zwalczania przestępstw finansowych, wyludzen i korupcji, oszustwo informatyczne i przestępstwa w internecie: materiały z konferencji w Krakowie 10-13 lipca 2003 (Corrupción en el sector privado)*, Wydawnictwo Naukowe Acholar, Varsovia, 2004.

FLÓREZ, M.: “Prólogo”, en RODRÍGUEZ GARCÍA, N. y FABIÁN CAPARRÓS, E.A. (coords.): *Corrupción y delincuencia económica*, Universidad de Santo Tomás-Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2008.

FOFFANI, L.: “La corrupción en el sector privado: la experiencia italiana y de Derecho comparado”, en *Revista Penal*, nº 12, 2003.

- “La corrupción «privada»: hacia una armonización penal en Europa”, en DE LA CUESTA ARZAMENDI, J.L., PÉREZ MACHIO, A.I., UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, J.I. (dirs.): *Armonización penal en Europa*, Instituto Vasco de Administración Pública, San Sebastián, 2013.

GARCÍA ALBERO, R.: "Corrupción en los negocios y modificación del cohecho", en QUINTERO OLIVARES, G. (dir.): *Comentario a la reforma penal de 2015*, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2015.

GARCÍA CABA, M.M.: "Las conductas fraudulentas en el deporte y su hipotética represión penal. A propósito del proyecto de ley de la LFP", en *Revista Jurídica de Derecho de Deporte y Entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y música*, nº 22, Aranzadi, Navarra, 2008.

- "Breve comentario a la lei portuguesa 50/2007, de 31 de agosto, por la que se establece un nuevo régimen de responsabilidad penal por comportamientos susceptibles de afectar a la verdad, la lealtad y la corrección de la competición deportiva y sus resultados y su posible extrapolación al ordenamiento español", en *Revista Jurídica de Derecho de Deporte y Entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y música*, nº 25, 2009.
- "Capítulo 4. ¿Hacia una (necesaria) presencia del Derecho penal para garantizar la integridad de la competición profesional? A propósito del Proyecto de Ley de la LFP contra el fraude en el deporte", en CARDENAL CARRO, M.; GARCÍA CABA, M.M. y GARCÍA SILVERO, E.A. (coords): *¿Es necesaria la represión penal para evitar los fraudes en el deporte profesional?*, Laborum, Murcia, 2009.

GARCÍA GUTIÉRREZ, G.: "Protección de la competencia a través del derecho penal", en *Con-texto. Revista de Derecho y Economía*, nº 37, Universidad Externado de Colombia, 2012.

GARCÍA MEXÍA, P.: *Los conflictos de intereses y la corrupción contemporánea*, Aranzadi, Pamplona, 2001.

GARCÍA SILVERO, E.A.: "Capítulo 6. Iniciativas para la reforma del deporte profesional y la represión del fraude deportivo en España", en CARDENAL CARRO, M.; GARCÍA CABA, M.M. y GARCÍA SILVERO, E.A. (coords): *¿Es necesaria la represión penal para evitar los fraudes en el deporte profesional?*, Laborum, Murcia, 2009.

GARCÍA VICENTE, J.R.: "Corrupción y Derecho privado: notas generales", en FABIÁN CAPARRÓS, E. A. (coord.): *La corrupción: aspectos jurídicos y económicos*, Ratio Legis, Salamanca, 2000.

GARZÓN VALDÉS, E.: "Acerca del concepto de corrupción", en LAPORTA, F.J. y ÁLVAREZ, S. (eds.): *La corrupción política*, Alianza Editorial, Madrid, 1997.

GIL NOBAJAS, M.S.: "El delito de corrupción en los negocios (art. 286 bis): análisis de la responsabilidad penal del titular de la empresa, el administrador de hecho y la persona jurídica en un modelo puro de competencia", en *Revista Estudios Penales y Criminológicos*, vol. 35, Publicaciones Universidad de Santiago de Compostela, 2015.

- "Capítulo XI. Corrupción en los negocios privados: ¿es posible responsabilizar penalmente al administrador de hecho, al titular de la empresa y a la persona jurídica?", en QUERALT JIMÉNEZ, J.J. y SANTANA VEGA, D.M. (dirs.): *Corrupción pública y privada en el Estado de Derecho*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017.

GIL VILLA, F.: *La cultura de la corrupción*, Maia, Madrid, 2008.

GILI PASCUAL, A.: "Bases para la delimitación del ámbito típico en el delito de corrupción privada. Contribución al análisis del art. 286 bis del Código Penal según el Proyecto de reforma de 2007", en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, nº 9, artículo 13, 2007.

- "La tipificación penal del fraude en competiciones deportivas. Problemas técnicos y aplicativos", en *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 3ª época, nº 8, UNED, julio 2012.
- "Pago de comisiones en el ámbito de los negocios y kick-backs: entre la administración desleal, la apropiación indebida y la corrupción privada", en *Cuadernos de Política Criminal*, nº 109, Época II, Dykinson, Madrid, 2013.
- *El delito de corrupción en el sector privado*, Marcial Pons, Madrid, 2017.

GIUNTA, F.: "Deporte y Derecho penal: a propósito de la «Calciopoli»", en MORILLAS CUEVA, L. y MANTOVANI, F. (dirs.); BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F. (coord.): *Estudios sobre Derecho y Deporte*, Dykinson, Madrid, 2008.

GÓMEZ BERMÚDEZ, J.: "Prevención y sanción de la corrupción pública y privada", texto de la conferencia impartida en las XXXII Jornadas de la Abogacía General del Estado. "El nuevo Código Penal", Ministerio de



Justicia-Abogacía General del Estado, Madrid, 18 de noviembre de 2010. Disponible en la web del Ministerio de Justicia.

GÓMEZ GÓMEZ, C.M.: “El análisis económico de la corrupción”, en *Quórum: revista de pensamiento Iberoamericano*, Universidad de Alcalá, Madrid, nº 10, 2004.

GÓMEZ-JARA DÍEZ, C.: “Corrupción en el sector privado: ¿competencia desleal y/o administración desleal?”, en *Icade. Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales*, nº 74, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, mayo-agosto 2008.

GÓMEZ MARTÍN, V.: “¿Delitos de posición con infracción de deber? Reflexiones sobre el ejemplo de la corrupción médica privada”, en *Cuadernos de Política Criminal*, nº 118, Época II, Dykinson, Madrid, mayo 2016.

GONZÁLEZ BLESÁ, F.J.: “Delito de Corrupción entre particulares: Comentarios y críticas al artículo 286 Bis CP”, en la web de Noticias Jurídicas, Madrid, 26 mayo 2012.

GONZÁLEZ RUS, J.J.: “Reformas pretendidas en los delitos relativos al mercado y los consumidores y en los delitos societarios por el Proyecto de Ley LO 121/000119, de modificación del Código Penal”, en BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F. (coord.): *Reforma del Código Penal. Respuestas para una sociedad del siglo XXI*, Dykinson, Madrid, 2008.

GOROSTIZA JIMENEZ, I.: “Delitos de corrupción entre particulares – en los negocios”, en *Boletín Jurídico Vaciero Abogados*, enero 2016. Disponible en la web de Vaciero Abogados.

GUÉREZ TRICARICO, P.: “Capítulo 7. Causas de justificación. V Consentimiento”, en MOLINA FERNÁNDEZ, F. (coord.): *Memento Práctico Francis Lefebvre. Penal*, ediciones Francis Lefebvre, Madrid, 2016.

GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, M.: “La responsabilidad penal del empresario en el Derecho español: aspectos generales y de aplicación práctica”, en *Anuario de Derecho Penal Económico y de la Empresa*, nº 2, Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa, 2012.

HASSEMER, W.: “¿Puede haber delitos que no afecten a un bien jurídico penal?”, en HEFENDEHL, R. (ed.): *La teoría del bien jurídico*.

*¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?*, Marcial Pons, Madrid, 2007.

HEFENDEHL, R.: “¿Debe ocuparse el Derecho Penal de riesgos futuros? Bienes jurídicos colectivos y delitos de peligro abstracto” (trad. SALAZAR ORTUÑO, E.), en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, nº 4, artículo 14, 2002.

HEINE, G.: “Comparative Analysis”, en HEINE, G. y ROSE, T.O.: *Private Commercial Bribery. A comparison of National and Supranational legal structures*, Editions Iuscrim, Friburgo, 2003.

HERNÁNDEZ VIGUERAS, J.: *Los paraísos fiscales*, Akal, Madrid, 2005.

HINOJO GONZÁLEZ, P.: “Una aproximación económica a la corrupción”, en *Revista Jueces para la Democracia. Información y debate*, nº 85, marzo 2016.

HORMAZÁBAL MALARÉE, H.: *Bien jurídico y Estado social y democrático de Derecho*, 2ª ed., LexisNexis, Santiago de Chile, 2006.

IBARS VELASCO, D.: “Corrupción en el deporte”, en QUINTERO OLIVARES, G. (dir.): *Comentario a la reforma penal de 2015*, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2015.

IGLESIAS RÍO, M.A. y MEDINA ARNÁIZ, T.: “Herramientas preventivas en la lucha contra la corrupción en el ámbito de la Unión Europea”, en *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, tomo II, 2004.

IRIARTE IBARGÜEN, A. y MARTÍNEZ DÍAZ, C.: “Libertad de competencia”, en el la web del *Diccionario Económico* del Diario *Expansión*.

JAÉN VALLEJO, M.: “Delitos de corrupción en los negocios”, en la web de Lefebvre - El Derecho, 24 de junio de 2015.

JIMÉNEZ ASENSIO, R.: “Función Pública y corrupción”, en el blog La Mirada Institucional, 2 de marzo de 2016.

JUANES PECES, A.: “Principios inspiradores de la reforma del Código Penal operada en virtud de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio”, en JUANES PECES, A. (dir.): *Reforma del Código Penal. Perspectiva económica tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio. Situación jurídico-penal del empresario*, El Derecho, Madrid, 2010.

KAHLO, M.: “Sobre la relación entre el concepto de bien jurídico y la imputación objetiva en Derecho penal”, en HEFENDEHL, R. (ed.): *La teoría del bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?*, Marcial Pons, Madrid, 2007.

KINDHÄUSER, U.: “Presupuestos de la corrupción punible en el Estado, la economía y la sociedad. Los delitos de corrupción en el Código penal alemán”, en *Política Criminal*, nº 3, 2007.

LAMO DE ESPINOSA, E.: “Corrupción política y ética económica”, en *Revista de Occidente*, nº 179, Madrid, 1996.

LEÓN LLEÓ, A.: “Comentario al laudo del caso TAS 2014/A/3475 Charline Van Snick c. Federación Internacional de Judo (FIJ)”, en *Revista Jurídica de Derecho de Deporte y Entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y música*, nº 45, Aranzadi, Navarra, 2014.

LIZCANO ÁLVAREZ, J.: “Efectos económicos de la corrupción”, en la web de El País, 8 de septiembre de 2011.

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J.: *Tratado de Derecho penal. Parte General*, Civitas-Thomson Reuters, Navarra, 2010.

- “Capítulo V. Del cohecho”, en CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C. (dir.): *Código Penal comentado. Con concordancias y jurisprudencia*, 3ª ed., Tomo II, Bosch, Barcelona, 2012.

MAGRO SERVET, V.: “La corrupción en el deporte en la reforma del Código Penal (nuevo artículo 286 bis.4)”, en *Diario La Ley*, nº 8493, Sección Doctrina, LaLey, Madrid, 4 de marzo de 2015.

MALEM SEÑA, J.F.: *Globalización, comercio internacional y corrupción*, Gedisa, Barcelona, 2000.

- *La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos*, Gedisa, Barcelona, 2002.
- “La corrupción en el deporte”, en *Fair Play. Revista de Filosofía, Ética y Derecho del Deporte*, vol. 2, nº 2, 2014.
- *Pobreza, corrupción, (in)seguridad jurídica*, Marcial Pons, Madrid, 2017

MANES, V.: “La incidencia de las “decisiones marco” en la interpretación en materia penal: perfiles de derecho sustantivo. Comentario de la sentencia de 16 de junio 2005 -Causa C-105/03 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas -Gran Sala-(demanda de pronunciamiento prejudicial propuesto por el Juez de Instrucción del Tribunal de Florencia en el procedimiento Pupino)” (trad. TORRES FERNÁNDEZ, M.E.), en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, nº 9, artículo 07, 2007.

MANZANARES SAMANIEGO, J.L.: *La reforma del Código Penal de 2015. Conforme a las Leyes Orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo*, LaLey, Madrid, 2015.

MARTÍN YESTE, C.: “El delito de fraude deportivo tras la reforma penal de 2015”, en la web de Iusport, 29 de julio de 2015.

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: “4. El nuevo delito de corrupción entre particulares (art. 286 bis)”, en VIVES ANTÓN, T.S.; ORTS BERENGUER, E.; CARBONELL MATEU, J.C.; GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. y MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: *Derecho Penal. Parte Especial*, 3ª ed. actualizada de acuerdo con la Ley Orgánica 5/2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

- *Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte especial*, 3ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.
- “Lección 2ª. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (Capítulo XI del Título XIII: arts. 270-288)”, en PUENTE ABA, L.M. (coord.): *Derecho Penal Económico y de la Empresa*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M.I.: “Corrupción privada y corrupción en el deporte”, en MUÑOZ CONDE, F. (dir.): *Análisis de las reformas penales. Presente y futuro*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.

MARTÍNEZ GONZÁLEZ-TABLAS, A.: “Aspectos más relevantes de la globalización económica”, en BARAÑANO CID, M. (dir.): *La globalización económica. Incidencia en las relaciones sociales y económicas*, Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2002.

MARTINS DOS SANTOS FIDALGO FONSECA, R.: “Da corrupção no sector privado”, en *Jusjournal*, nº 1657, 26 de marzo de 2013.

MATA BARRANCO, N.J. de la: “Corrupción en el sector público y corrupción en el sector privado: novedades del Anteproyecto de

Reforma del Código Penal de 2008”, en *El Anteproyecto de modificación del Código Penal de 2008. Algunos aspectos. Cuadernos penales José María Lidón*, nº 6, Deusto Publicaciones, 2009.

MATELLANES RODRÍGUEZ, N.: “Lección 6. El tipo doloso de acción”, en DEMETRIO CRESPO, E. (coord.): *Lecciones y materiales para el estudio del Derecho penal. Teoría del delito*, tomo II, 2ª ed. Revisada y actualizada, Iustel, Madrid, 2015.

- “Lección 11. Las causas de justificación”, en DEMETRIO CRESPO, E. (coord.): *Lecciones y materiales para el estudio del Derecho penal. Teoría del delito*, tomo II, 2ª ed. Revisada y actualizada, Iustel, Madrid, 2015.
- “Lección 12. Las causas de justificación en el Código Penal español”, en DEMETRIO CRESPO, E. (coord.): *Lecciones y materiales para el estudio del Derecho penal. Teoría del delito*, tomo II, 2ª ed. Revisada y actualizada, Iustel, Madrid, 2015.

MAZO, E.S.: “¿Hacia dónde avanza la industria deportiva desde la perspectiva de la consultoría?”, en la web de Expansión, 18 de marzo de 2017.

MELLA MÁRQUEZ, J.M.: “Los costes económicos de la corrupción”, en el blog EconoNuestra, 8 de marzo de 2013.

MENDOZA BUERGO, B.: “Capítulo XVIII. El nuevo delito de corrupción entre particulares (art. 286 bis del CP)”, en DÍAZ-MAROTO y VILLAREJO, J. (dirs.), RODRÍGUEZ MOURULLO, G. (pr.): *Estudios sobre las reformas del Código Penal (operadas por las LO 5/2010, de 22 de junio y 3/2011, de 28 de enero)*, Civitas-Thomson Reuters, Navarra, 2011.

- “Sección 17. Corrupción entre particulares”, en *Memento Práctico Francis Lefebvre. Penal 2011*, ediciones Francis Lefebvre, Madrid, 2011.
- “Sección 18. Disposiciones comunes a los delitos contra la propiedad intelectual, industrial, delitos relativos al mercado y a los consumidores y la corrupción privada”, en *Memento Práctico Francis Lefebvre. Penal 2011*, ediciones Francis Lefebvre, Madrid, 2011.

- “Capítulo 35. Delitos patrimoniales y contra el orden socioeconómico. Sección 18. Corrupción en los negocios”, en MOLINA FERNÁNDEZ, F. (coord.): *Memento Práctico Francis Lefebvre. Penal*, ediciones Francis Lefebvre, Madrid, 2016.

MIR PUIG, S.: *Derecho penal. Parte general*, 7ª ed., Reppertor, Barcelona, 2004.

MIRÓ LLINARES, F.: “Capítulo vigésimo. Delitos contra bienes inmateriales, corrupción y receptación: análisis y consideraciones críticas ante la nueva Reforma penal”, en MORILLAS CUEVA, L. (dir.): *Estudios sobre el Código Penal reformado (Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015)*, Dykinson, Madrid, 2015.

MOLINA BLÁZQUEZ, C.: *Protección jurídica de la lealtad en la competencia*, Montecorvo, Madrid, 1993.

MOLINA FERNÁNDEZ, F.: “Capítulo 7. Causas de justificación. I. Sistema de causas de justificación”, en MOLINA FERNÁNDEZ, F. (coord.): *Memento Práctico Francis Lefebvre. Penal*, ediciones Francis Lefebvre, Madrid, 2016.

- “Capítulo 8. Imputabilidad y causas de inimputabilidad. Sección 1. Estructura y fundamento de la culpabilidad”, en MOLINA FERNÁNDEZ, F. (coord.): *Memento Práctico Francis Lefebvre. Penal*, ediciones Francis Lefebvre, Madrid, 2016.

MONROY ANTÓN, A.J.: “El nuevo Código Penal, contra los corruptos en el deporte”, en *Diario La Ley*, nº 7534, Sección Tribuna, LaLey, Madrid, 23 de diciembre de 2010.

MORALES PRATS, F.: “Artículo 286 bis.4”, en QUINTERO OLIVARES, G. (dir.); MORALES PRATS, F. (coord.): *Comentarios al Código Penal Español*, tomo II (Artículos 234 a DF. 7ª), 7ª ed., Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2016.

MORALES PRATS, F. y MORÓN LERMA, E.: “Capítulo 5. Corrupción entre particulares (comentario al art. 286 bis del CP)”, en *La Corrupción a Examen*, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2012.

MORÁN, G.M.: “El derecho comparado como disciplina jurídica: la importancia de la investigación y la docencia del derecho comparado y la utilidad del método comparado en el ámbito jurídico”, en *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, nº 6, 2002.

MORENO CARRASCO, F.: “Panorama de la corrupción en el mundo del deporte. Realidad global y elementos a considerar”, en *Revista Jurídica de Derecho de Deporte y Entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y música*, nº 53, 2016.

MORILLAS CUEVA, L.: “Capítulo 3. El tratamiento jurídico del fraude en el deporte en el Derecho comparado. Las experiencias de Italia, Portugal y Alemania”, en CARDENAL CARRO, M.; GARCÍA CABA, M.M. y GARCÍA SILVERO, E.A. (coords): *¿Es necesaria la represión penal para evitar los fraudes en el deporte profesional?*, Laborum, Murcia, 2009.

MORILLAS CUEVA, L. y BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F.: “Capítulo 15. Derecho penal y deporte profesional. El tratamiento penal de la violencia y el fraude en el deporte”, en PALOMAR OLMEDA, A. (dir.); TEROL GÓMEZ, R. (coord.): *Derecho del deporte profesional*, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2017.

MORONI, M.: “La frode sportiva tra diritto, etica e storia”, en *Revista Internacional de Derecho y Ética del Deporte*, vol. 1, nº 1, 2014.

MUÑOZ COMPANY, M.J.: “El delito de corrupción en el deporte. Reformas de 2010 y 2015”, en *Revista Foro FICP. Tribuna y Boletín de la FICP*, nº 2015-3, Fundación Internacional de Ciencias Penales, Madrid, noviembre 2015.

MUÑOZ CONDE, F.: *Derecho Penal. Parte Especial*, 17ª ed., revisada y puesta al día, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.

MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M.: *Derecho Penal. Parte General*, 8ª ed., revisada y puesta al día, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

MUÑOZ CUESTA, F.J.: “La corrupción entre particulares: problemas que plantea su aplicación”, en *Revista Aranzadi Doctrinal*, nº 8, Aranzadi, Navarra, diciembre 2011.

- “Capítulo 3. La corrupción entre particulares: problemas que plantea su aplicación”, en *La Corrupción a Examen*, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2012.

MUÑOZ RUIZ, J.: “El nuevo delito de corrupción en el deporte”, en *Revista Andaluza de Derecho del Deporte*, nº 9, diciembre 2010.

MURIEL PATINO, M.V.: "Economía, corrupción y desarrollo", en FABIÁN CAPARRÓS, E. A. (coord.): *La corrupción: aspectos jurídicos y económicos*, Ratio Legis, Salamanca, 2000.

MUSCO, E.: "El fraude en la actividad deportiva", en *Revista Penal*, nº 7, 2001.

- "Art. 2635", en MUSCO, E.: *I nuovi reati societari*, 3ª ed., Giuffrè Editore, Milán, 2007.

NAVARRO FRÍAS, I. y MELERO BOSCH, L.V.: "Corrupción entre particulares y tutela del mercado", en *Indret. Revista para el análisis del Derecho*, nº 4/2011, Barcelona, octubre 2011.

- "El nuevo delito de corrupción entre particulares", en ROMEO CASABONA, C.M. y FLORES MENDOZA, F. (eds.): *Nuevos instrumentos jurídicos en la lucha contra la delincuencia económica y tecnológica*, Marcial Pons, Granada, 2013.

NAVARRO MASSIP, J.: "El delito de corrupción entre particulares", en *Revista Aranzadi Doctrinal*, nº 11/2011, Aranzadi, Navarra, marzo 2011.

- "Capítulo 4. El delito de corrupción entre particulares", en *La Corrupción a Examen*, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2012.

NEVADO-BATALLA MORENO, P.T.: "Bases constitucionales del Derecho Administrativo" en *Notas sobre Derecho Administrativo I*, 2ª ed., Ratio Legis, Salamanca, 2003.

NEILA NEILA, J.M.: *La responsabilidad penal ante delitos cometidos por administradores sociales y personas jurídicas*, Bosch, Barcelona, 2012.

NIETO MARTÍN, A.: "La corrupción en el sector privado (reflexiones desde el ordenamiento español a la luz del Derecho comparado)", en *Revista Penal*, nº 10, 2002.

- "España", en el artículo "Sistemas penales comparados: Corrupción en el sector privado", en *Revista Penal*, nº 11, 2003.
- "Lección XXVIII. Protección penal de la competencia, los mercados financieros y los consumidores (I)", en GÓMEZ RIVERO, M.C. (coord.): *Nociones fundamentales de Derecho Penal. Parte Especial (adaptado al EEES)*, Tecnos, Madrid, 2010.
- "La privatización de la lucha contra la corrupción", en ARROYO ZAPATERO, L. y NIETO MARTÍN, A. (dirs.): *El Derecho Penal*



- Económico en la era compliance*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
- “Lección X. Protección penal de la competencia, los mercados financieros y los consumidores (I)”, en GÓMEZ RIVERO, M.C. (dir.): *Nociones fundamentales de Derecho Penal. Parte Especial*, vol. II, 2ª ed. adaptada a las LO 1/2015 de reforma del Código Penal, Tecnos, Madrid, 2015.
  - “Lección XXI. Corrupción y abuso de poder (I)”, en GÓMEZ RIVERO, M.C. (dir.): *Nociones fundamentales de Derecho Penal*, vol. II, 2ª ed. adaptada a las LO 1/2015 de reforma del Código Penal, Tecnos, Madrid, 2015.
- NIÑO, L.F.: *El bien jurídico como referencia garantista*, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2008.
- NÚÑEZ CASTAÑO, E.: “Lección XII. Delitos societarios”, en GÓMEZ RIVERO, M.C. (dir.): *Nociones fundamentales de Derecho Penal*, vol. II, 2ª ed. adaptada a las LO 1/2015 de reforma del Código Penal, Tecnos, Madrid, 2015.
- OBSERVATORIO DE DERECHO PENAL ECONÓMICO 2012 DE LA CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y FORENSE UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS-KPMG: “El delito de corrupción entre particulares respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en *Diario La Ley*, nº 7920, Sección Dictamen, LaLey, Madrid, 2012.
- OLAIZOLA NOGALES, I.: “Algunas reflexiones sobre la corrupción entre privados (art. 286 bis CP español)”, en *Revista Foro FICP. Tribuna y Boletín de la FICP*, nº 2013-1, Fundación Internacional de Ciencias Penales, Madrid, mayo 2013.
- ONTIVEROS ALONSO, M. (coord.): *La responsabilidad penal de las personas jurídicas: fortalezas, debilidades y perspectivas de cara al futuro*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.
- ORBEGOZO, X.: “El nuevo delito de corrupción entre particulares: un paso significativo contra el soborno de directivos de empresas”, en la web de Lefebvre - El Derecho, 1 de mayo de 2011.
- ORÚE CRUZ, J.R.: *Derecho de Competencia. Una introducción*, Lea Grupo Editorial, Managua, 2008.

OTERO GONZÁLEZ, P.: “La corrupción en el sector privado: El nuevo delito previsto en el art. 286 bis 1, 2 y 3 del Código Penal”, en *La Ley Penal*, nº 78, noviembre 2011.

- “Corrupción entre particulares (Delito de)”, en *Eunomia. Revista en Cultura de la Legalidad*, nº 3, septiembre 2012-febrero 2013.

PALOMO DEL ARCO, A.: “El delito de corrupción en el sector privado como ejemplo de incidencia del Derecho comunitario en el Derecho penal de los Estados miembros”, en *Revista General de Derecho Penal*, nº 1, mayo 2004.

PELÁEZ MARTOS, J.M.: *Blanqueo de Capitales. Obligaciones de empresas y profesionales en la nueva ley*, Edición Fiscal CISS. Wolsters Kluwer, Madrid, 2010.

PERALTA, J.: “Elementos subjetivos del ilícito en la determinación de la pena”, en *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, tomo 63, nº 1, Ministerio de Justicia – Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2010.

PÉREZ FERRER, F.: “El delito de corrupción entre particulares en el Código Penal español tras la reforma de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio”, en *La nueva regulación de la corrupción. Cuadernos Digitales de Formación*, nº 1, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2012.

PÉREZ GÓMEZ, R.: “La regulación en el nuevo código penal del delito de corrupción en los negocios. Definición y elementos que lo integran”, en *Revista de Derecho vLex*, nº 136, septiembre 2015.

PÉREZ MOSTEIRO, A.M.: *La Reforma de la Ley de Competencia Desleal*, Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, Madrid, 2011.

PLANCHADELL GARGALLO, A.: “Las víctimas en los delitos de corrupción (panorama desde las perspectivas alemana y española)”, en *Revista Estudios Penales y Criminológicos*, vol. 36, Publicaciones Universidad de Santiago de Compostela, 2016.

PLATA CABALLERO, N. de la: “Tema 5. La organización deportiva del sector privado”, en GAMERO CASADO, E. (coord.): *Fundamentos de Derecho Deportivo (adaptado a estudios no jurídicos)*, Tecnos, Madrid, 2012.

PORRES ORTIZ DE URBINA, E. de: “El delito de corrupción privada”, en la web de Lefebvre - El Derecho, 15 de septiembre de 2012.

POZUELO PÉREZ, L.: “Capítulo 43. Delitos contra la Administración pública. Sección 6. Cohecho”, en MOLINA FERNÁNDEZ, F. (coord.): *Memento Práctico Francis Lefebvre. Penal*, ediciones Francis Lefebvre, Madrid, 2016.

PRAT WESTERLINDH, C.: “El delito de corrupción en el deporte”, en *La Ley Penal*, nº 81, LaLey, Madrid, abril 2011.

PUENTE ABA, L.M.: “Corrupción en los negocios (art. 286 bis CP)”, en GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. (dir.); MATA LLÍN EVANGELIO, A. y GÓRRIZ ROYO, E. (coords.): *Comentarios a la reforma del Código Penal de 2015*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.

- “Tipos agravados en relación con los arts. 286 bis y ter (art. 286 quáter)”, en GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. (dir.); MATA LLÍN EVANGELIO, A. y GÓRRIZ ROYO, E. (coords.): *Comentarios a la reforma del Código Penal de 2015*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.
- “Corrupción en el deporte (arts. 286 bis 4 y 286 quater *in fine*)”, en GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. (dir.); MATA LLÍN EVANGELIO, A. y GÓRRIZ ROYO, E. (coords.): *Comentarios a la reforma del Código Penal de 2015*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.

QUERALT JIMÉNEZ, J.J.: “§ 17 Delitos societarios, resistencia a las agencias de control, información privilegiada, corrupción privada”, en QUERALT JIMÉNEZ, J.J.: *Derecho penal español. Parte especial*, 6ª ed. revisada y actualizada, Atelier, Barcelona, 2010.

- “La corrupción privada. Apuntes a la novela LO 5/2010”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J.; COBOS GÓMEZ DE LINARES, M.A.; GÓMEZ PAVÓN, P.; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A. y MARTÍNEZ GUERRA, A. (coords.): *Libro Homenaje al profesor Luis Rodríguez Ramos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
- “Notas sobre la corrupción privada en el Proyecto de Código Penal”, en *Iuris: Actualidad y práctica del Derecho*, nº 147, marzo 2010.

RASTRILLO LÓPEZ, P.: “Los delitos de corrupción tras la reforma del Código Penal por LO 1/2015”, en la web de Lefebvre - El Derecho, 14 de noviembre de 2016.

REDONDO ILLESCAS, S. y GARRIDO GENOVÉS, V.: *Principios de criminología*, 4ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

REIS BRAVO, J. dos: “Fraude e corrupção: repensar um modelo contemporâneo de prevenção e controlo da criminalidade económico-financiera”, en DE FARIA COSTA, J., FERNANDES GODINHO, I. y AIRES DE SOUSA, S. (org.): *Os crimes de fraude e a corrupção no espaço europeu*, Coimbra Editora, Coimbra, 2014.

REYES RODRÍGUEZ, A.D.: *Fraudes en el deporte. Los avatares de la disciplina entre una “cultura” de la hipocresía y el cosmopolitismo mundano*, Editorial Club Universitario, Alicante, 2012.

RIBAS JUNIOR, S.: *Corrupção pública e privada. Quatro aspectos*, Editora Fórum, Belo Horizonte, 2014.

RÍOS CORBACHO, J.M.: “El fraude en el fútbol”, en MILLÁN GARRIDO, A. (coord.): *Cuestiones actuales del fútbol profesional*, Bosch, Barcelona, 2012.

- “De nuevo sobre el fraude en el deporte”, en *Cuadernos de Política Criminal*, nº 119, Época II, Dykinson, Madrid, 2016.

ROCA AGAPITO, L.: “La política criminal frente al dopaje. Análisis político criminal de la reforma del Código Penal llevada a cabo por LO 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte”, en *Diario La Ley*, nº 6660, Sección Doctrina, LaLey, Madrid, 27 de febrero de 2007.

RODRÍGUEZ PUERTA, M.J.: “Capítulo VII. El nuevo delito de corrupción privada: luces y sombras”, en AGÚNDEZ, M.A. y MARTÍNEZ-SIMANCAS, J. (dirs.); ALBIÑANA, C. (coord.): *Cuadernos de Derecho para Ingenieros. Cumplimiento normativo. Compliance*, 1ª ed., LaLey, Madrid, 2012.

- “Artículo 286 quater”, en QUINTERO OLIVARES, G. (dir.); MORALES PRATS, F. (coord.): *Comentarios al Código Penal Español*, tomo II (Artículos 234 a DF. 7ª), 7ª ed., Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2016.

RODRÍGUEZ PUERTA, M.J. y MORÓN LERMA, E. “Artículo 286 bis” en QUINTERO OLIVARES, G. (dir.); MORALES PRATS, F. (coord.): *Comentarios al Código Penal Español*, tomo II (Artículos 234 a DF. 7ª), 7ª ed., Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2016.

ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, A.: “El empresario (I). Concepto, clases y responsabilidad”, en URÍA, R. y MENÉNDEZ, A.: *Curso de Derecho Mercantil*, tomo I, 2ª ed., Civitas-Thomson Reuters, Navarra, 2006.

ROMA VALDÉS, A.: “Los delitos con ocasión del deporte. Por una mejora en su tipificación en el derecho penal español”, en *Revista Jurídica de Derecho de Deporte y Entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y música*, nº 16, Aranzadi, Navarra, 2006.

- *Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Manual sobre su tratamiento penal y procesal*, Rasche, Madrid, 2012.

ROS RAVENTÓS, I. de: “El delito de corrupción entre particulares”, en la web de Cinco Días, 6 de octubre de 2010.

ROSAS OLIVA, J.I.: “Consideraciones para la tipificación de un delito contra la corrupción en el sector privado en España”, en *Cuadernos de Política Criminal*, nº 99, Época II, Dykinson, Madrid, 2009.

ROSE, T.O.: “Introduction”, en HEINE, G., HUBER, B. y ROSE, T.O. (ed.): *Private Commercial Bribery. A comparison of National and Supranational legal structures*, Editions Iuscrim, Friburgo, 2003.

RUIZ DE VELASCO Y DEL VALLE, A.: *Manual de Derecho Mercantil*, 3ª ed., Universidad Pontificia de Comillas-ICAI-ICADE, Madrid, 2007.

RUIZ RODRÍGUEZ, L.R.: “Limitaciones técnicas, jurídicas e ideológicas para el conocimiento y sanción de la criminalidad económica”, en *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 3ª época, nº 1, UNED, 2009.

- “Lección 4ª. Delitos relativos al mercado y a los consumidores, y la corrupción en los negocios”, en TERRADILLOS BASOCO, J.M. (coord.): *Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Penal. Derecho Penal. Parte especial (Derecho Penal económico)*, tomo IV, 2ª ed. Revisada y actualizada, Iustel, Madrid, 2016.

SÁENZ DE PIPAÓN Y MENGES, J.: “La represión penal de la corrupción privada”, en *Revista El Notario del siglo XXI*, nº 27, Colegio Notarial de Madrid, septiembre-octubre 2009.

SAIZ VÉLEZ, J.E., MANTILLA BAUTISTA, S.I. y CÁRDENAS BELTRÁN, J.M.: “Corrupción: una descripción del concepto y de las limitaciones

metodológicas para su medición”, en *Revista Gestión & Sociedad*, vol. 4, nº 1, Universidad de LaSalle, enero-junio 2011.

SÁNCHEZ BLANCO, A.: *El sistema económico de la Constitución Española (Participación Institucional de las Autonomías Territoriales y dinámica social en la economía)*, Civitas, Madrid, 1992.

SÁNCHEZ-BOTE, J.A.: “El delito de corrupción deportiva en la reforma del código penal”, en la web de Iusport, 1 de abril de 2015.

SÁNCHEZ MELGAR, J.: “La corrupción en el sector privado”, en *Revista Xurídica Galega*, nº 3, 2009.

SÁNCHEZ-OSTIZ, P., ÍÑIGO, E. y RUIZ DE ERENCHUN, E.: “Bien jurídico”, en *Crimina 3.4. Materiales docentes para la asignatura “El sistema español: los delitos”*, Área de Derecho Penal. Universidad de Navarra, enero 2012.

SANTANA, D. y GÓMEZ MARTÍN, V.: “Artículo 286 bis”, en CORCOY BIDASOLO, M. y MIR PUIG, S. (dirs.): *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

SANZ MULAS, N.: “Capítulo 12. Criminalidad y poder: política criminal frente a la corrupción y la delincuencia de cuello blanco”, en *Política Criminal. Actualizada a las reformas de 2015*, Ratio Legis, Salamanca, 2016.

- “Corrupción privada y administración desleal”, en FERRÉ OLIVÉ, J.C. (ed.): *Korupcja w sektorze prywatnym: harmonizacja ustawodawstwa karnego w zakresie zwalczania przestępstw finansowych, wyludzen i korupcji, oszustwo informatyczne i przestępstwa w internecie: materiały z konferencji w Krakowie 10-13 lipca 2003 (Corrupción en el sector privado)*, Wydawnictwo Naukowe Acholar, Varsovia, 2004.

SCHAEFER, J.M.: “El deporte, los artículos deportivos y la industria del deporte”, en la web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, septiembre de 2012.

SCHLOSS, M.J.: “Gobernabilidad, corrupción y desarrollo. Experiencias internacionales para transitar del dicho al hecho”, en la web de Transparencia Internacional España.

SCHMITT DE BEM, L.: *Responsabilidad penal en el deporte*, Juruá, Lisboa, 2015.

- “Corrupção (e fraudes) no esporte. Novamente sobre a corrupção no cenário esportivo”, en la web Emporio do Direito, 5 de febrero de 2016.

SCHÜNEMANN, B.: “El principio de protección de bienes jurídicos como punto de fuga de los límites constitucionales de los tipos penales y de su interpretación”, en HEFENDEHL, R. (ed.): *La teoría del bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?*, Marcial Pons, Madrid, 2007.

SCIUMBATA, G.: *I reati societari*, 2ª ed., Giuffrè Editore, Milán, 2008.

SEMINARA, S.: “Quale modello di intervento penale per l’ordinamento italiano?”, en ACQUAROLI, R. y FOFFANI, L. (eds.): *La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e prospettive di Riforma*, Giuffrè Editore, Milán, 2003.

SEQUEROS SAZATORNIL, F. y DOLZ LAGO, M.J.: *Delitos societarios y conductas afines. La responsabilidad penal y civil de la sociedad, sus socios y administradores*, 3ª ed., LaLey-Wolters Kluwer, Madrid, 2013.

SERRANO GÓMEZ, A. y SERRANO MAÍLLO, A.: *Derecho Penal. Parte Especial*, 13ª ed., Dykinson, Madrid, 2008.

SILVA SÁNCHEZ, J.M.: *La expansión del Derecho penal. Aspectos de la Política criminal en las sociedades postindustriales*, 3ª ed., B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2011.

- “V. El delito de corrupción entre particulares (artículo 286 bis)”, en SILVA SÁNCHEZ, J.M. (dir.): *El nuevo Código Penal. Comentarios a la reforma*, La Ley, Madrid, 2012.
- “¿Pueden los notarios pagar comisiones para captar clientes?”, en Notario del Siglo XXI, nº 41, Colegio Notarial de Madrid, enero-febrero 2012. Disponible en la web de El Notario del Siglo XXI.

SOTO NAVARRO, S.: “Concreción y lesión de los bienes jurídicos colectivos. El ejemplo de los delitos ambientales y urbanísticos”, en *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, tomo 58, nº 3, Ministerio de Justicia – Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2005.

SWEENEY, G.: “Executive summary”, en *Global Corruption Report (2015): Sport*, Transparency International, 2016.

TAK, P.: “Il reato di corruzione privata in Olanda”, en ACQUAROLI, R. y FOFFANI, L. (eds.): *La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e prospettive di Riforma*, Guiffrè Editore, Milán, 2003.

- “Introduction” en “The Netherlands”, en HEINE, G., HUBER, B. y ROSE, T.O. (ed.): *Private Commercial Bribery. A comparison of National and Supranational legal structures*, Editions Iuscrim, Friburgo, 2003.

TERRADILLOS BASOCO, J.M.: “Lección 1. Delitos contra el orden socioeconómico”, en TERRADILLOS BASOCO, J.M. (coord.): *Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Penal. Derecho Penal. Parte especial (Derecho Penal económico)*, tomo IV, 2ª ed. Revisada y actualizada, Iustel, Madrid, 2016.

TIEDEMANN, K.: *Manual de Derecho penal económico. Parte general y especial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

TORRES, L.: “El TAS declara ilegales las primas a terceros por ganar”, en la web de Iusport. 12 de octubre de 2014.

ÜBERHOFEN, M.: “Germany”, en en HEINE, G., HUBER, B. y ROSE, T.O. (ed.): *Private Commercial Bribery. A comparison of National and Supranational legal structures*, Editions Iuscrim, Friburgo, 2003.

URBANO CASTILLO, E. de: “Capítulo 2. ¿Están tipificados actualmente los fraudes deportivos? Compras de partidos, primas a terceros y sobornos arbitrales ante el Código Penal vigente”, en CARDENAL CARRO, M.; GARCÍA CABA, M.M. y GARCÍA SILVERO, E.A. (coords): *¿Es necesaria la represión penal para evitar los fraudes en el deporte profesional?*, Laborum, Murcia, 2009.

VALEIJE ÁLVAREZ, I.: “Visión general sobre las resoluciones e iniciativas internacionales en materia de corrupción”, en *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, nº 7, 2003.

VALLS PRIETO, J.: “La protección de bienes jurídicos en el deporte”, en MORILLAS CUEVA, L. y MANTOVANI, F. (dirs.); BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F. (coord.): *Estudios sobre Derecho y Deporte*, Dykinson, Madrid, 2008.

- “La intervención del Derecho penal en la actividad deportiva”, en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, nº 11, artículo 14, 2009.



VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C.: *Código Penal comentado. (Actualizado por las Leyes Orgánicas: 1/2015, de 30 de marzo y 2/2015, de 30 de marzo)*, Atelier, Barcelona, 2015.

VEGA GUTIÉRREZ, J.Z.: “El delito de corrupción en los negocios (art. 286 bis CP español)”, en *Revista Foro FICP. Tribuna y Boletín de la FICP*, nº 2017-1, Fundación Internacional de Ciencias Penales, Madrid, mayo 2017.

VENTAS SASTRE, R.: “El nuevo delito de fraude en las competiciones deportivas profesionales”, en *Revista Jurídica de Derecho de Deporte y Entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y música*, nº 31, Aranzadi, Navarra, 2011.

VENTURA PÜSCHEL, A.: “Sobre la tipificación de la *mal llamada “corrupción entre particulares”* (o de cómo la pretendida política criminal común de la Unión Europea entiende la competencia en el mercado)”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J. (dir.): *La adecuación del Derecho penal español al ordenamiento de la Unión Europea. La política criminal europea*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.

- “Capítulo 37. Corrupción entre particulares”, en ÁLVAREZ GARCÍA, F.J. y GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. (dirs.): *Comentarios a la Reforma penal de 2010*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

VERCHER NOGUERA, A.: “Introducción”, en FABIÁN CAPARRÓS, E. A. (coord.): *La corrupción: aspectos jurídicos...*, op. cit.

VICENT CHULIÁ, F.: *Introducción al Derecho Mercantil*, 23ª ed., vol. I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.

VICENTE MARTÍNEZ, R. de: *Derecho Penal del Deporte*, Bosch, Barcelona, 2010.

- “Fraude y corrupción en el deporte profesional”, en MILLÁN GARRIDO, A. (coord.): *La reforma del régimen jurídico del deporte profesional*, Reus, Madrid, 2010.
- “Lección 4. La tipicidad”, en DEMETRIO CRESPO, E. (coord.): *Lecciones y materiales para el estudio del Derecho penal. Teoría del delito*, tomo II, 2ª ed. Revisada y actualizada, Iustel, Madrid, 2015.

- “Administradores, directivos, entidades deportivas y *compliance* penal”, en *Revista Española de Derecho Deportivo*, nº 40 (2017-2), Reus, Madrid, 2017.

VILLORIA MENDIETA, M.: *La lucha contra el crimen organizado en la Unión Europea*, Documentos de Seguridad y Defensa. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, Ministerio de Defensa, Madrid, abril 2012.

VON HIRSCH, A.: “El concepto de bien jurídico y el «principio del daño»”, en HEFENDEHL, R. (ed.): *La teoría del bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?*, Marcial Pons, Madrid, 2007.

#### FUENTES ELECTRÓNICAS.

Banco de España: <http://www.bde.es/>.

Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México: <http://www.juridicas.unam.mx/>.

Blog EconoNuestra. Diario Público: <http://blogs.publico.es/econonuestra/>.

Blog de Sage España: <http://blog.sage.es/>.

Blog La Mirada Institucional: <https://rafaeljimenezasensio.com/>.

Boletín Oficial del Estado: <https://www.boe.es/>.

Caixa Bank Research: <http://www.caixabankresearch.com/>.

Cinco Días. El País Economía: <https://cincodias.elpais.com/>.

Clifford Chance: <https://www.cliffordchance.com/>.

CMS: <https://cms.law/en/ESP/>.

Consejo de Europa: <http://www.coe.int/>.

Consejo General de Colegios Profesionales de la Educación Física y del Deporte: <http://www.consejo-colef.es/>.

Consejo General del Poder Judicial: <http://www.poderjudicial.es/>.

- Consejo Superior de Deportes: <http://www.csd.gob.es/>.
- Convenios del Consejo de Europa: <http://conventions.coe.int/>.
- Diccionario del Español Jurídico: <http://dej.rae.es/>.
- Diccionario de la Real Academia Española: <http://dle.rae.es/>.
- DSQ Abogados: <http://dsqabogados.com/>.
- Eur-lex: <http://eur-lex.europa.eu/>.
- Expansión: <http://www.expansion.com/>.
- Gestión y Administración: <http://www.gestionyadministracion.com/>.
- IESE Bussiness School. Universidad de Navarra: <http://www.iese.edu/>.
- Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça I.P: <http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/>.
- Intereconomia.com: <https://intereconomia.com/>.
- Iusport: <https://iusport.com/>.
- Lefebvre - El Derecho: <http://www.elderecho.com/>.
- LegalToday: <http://www.legaltoday.com/>.
- Max-Planck-Institut: <https://www.mpicc.de/>.
- Ministerio de Justicia de España: <http://www.mjusticia.gob.es/>.
- Normattiva. Il portale della legge vigente: <http://www.normattiva.it/>.
- Noticias Jurídicas: <https://noticias.juridicas.com/>.
- OCDE: <http://www.oecd.org/>.
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: <http://www.unodc.org/>.
- Oficina de Publicaciones de la Universidad de La Salle (Colombia): <https://revistas.lasalle.edu.co/>.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: <http://www.wipo.int/>.

Parlamento Europeo: <http://www.europarl.europa.eu/>.

Pensamiento Penal: <http://www.pensamientopenal.com.ar/>.

Pérez-Llorca Abogados: <https://www.perezllorca.com/>.

Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa: <http://www.pgdlisboa.pt/>.

Pymerang: <http://www.pymerang.com/>.

Real Federación Española de Fútbol: <http://www.rfef.es/>.

Revista de Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica:  
<http://www.cienciaspenalescr.com/>.

Transparencia Internacional España: <http://transparencia.org.es/>.

Transparency International: <https://www.transparency.org/>.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea: <http://curia.europa.eu/>.

UEFA: <http://www.uefa.com/>.

Unión Europea: <http://europa.eu/>.

Universidad Carlos III: <https://www.uc3m.es/>.

Universidad de Cantabria: <http://web.unican.es/>.

Universidad de Navarra: <http://www.unav.es/>.

Universitat de Valencia: <http://www.uv.es/>.

Vaciero Abogados: <http://www.vaciero.es/>.

## DOCUMENTOS E INFORMES.

### 1. España.

*Informe del Consejo Fiscal sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal*, elaborado el 19 de noviembre de 2008.

*Informe del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal*, elaborado en Madrid, el 26 de febrero de 2009.

*Dictamen nº 1.404/2009 del Consejo de Estado al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal*, aprobado el 29 de octubre de 2009.

*Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, Comisión de Educación y Deporte, IX Legislatura, nº 556, 26 de mayo de 2010.

## 2. Consejo de Europa.

*Explanatory Report to the Criminal Law Convention on Corruption* (European Treaty Series – nº 173) elaborado en Estrasburgo, el 27 de enero de 1999.

## 3. Grupo de Estados contra la Corrupción. Consejo de Europa.

*Informe de Evaluación relativo a España*, adoptado en la 42ª Reunión Plenaria, 15 de mayo de 2009. GRECO.

*Informe de Cumplimiento relativo a España*, adoptado en la 50ª Reunión Plenaria, 1 de abril de 2011. GRECO.

*Segundo Informe de Cumplimiento*, adoptado en la 60ª Reunión Plenaria, 21 de junio de 2013. GRECO.

*Primer Apéndice al segundo Informe de Cumplimiento*, adoptado en la 65ª Reunión Plenaria, 10 de octubre de 2014. GRECO.

*Segundo Apéndice al segundo Informe de Cumplimiento*, adoptado en la 70ª Reunión Plenaria, 4 de diciembre de 2015. GRECO.

*Informe de Evaluación relativo a Italia*, adoptado en la 54ª Reunión Plenaria, 23 de marzo de 2012. GRECO.

## 4. Naciones Unidas.

*Guía legislativa para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción*. Segunda edición revisada, elaborado en Nueva York, 2012.

## 5. Unión Europea.

*Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo. Una política global de la UE contra la corrupción*, elaborado en Bruselas, el 28 de mayo de 2003 –COM (2003) 317 final.

*Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de 13.9.05 dictada en el asunto C-176/03 (Comisión contra Consejo)*, elaborada en Bruselas, el 23 de noviembre de 2005 –COM (2005) 583 final.

*Informe de la Comisión al Consejo basado en el artículo 9 de la Decisión marco del Consejo 2003/568/JAI de 22 de julio de 2003 relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado*, elaborado en Bruselas, el 18 de junio de 2007 [SEC (2007) 808] –COM (2007) 328 final.

*Libro Blanco sobre el Deporte*, de la Comisión de las Comunidades Europeas, elaborado en Bruselas, el 11 de julio de 2007 – COM (2007) 391 final.

*Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre Lucha contra la corrupción en la UE*, elaborado en Bruselas, el 6 de junio de 2011 –COM (2011) 308 final.

*Informe de la Comisión al Consejo basado en el artículo 9 de la Decisión marco del Consejo 2003/568/JAI de 22 de julio de 2003 relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado*, elaborado en Bruselas, el 6 de junio de 2011 [SEC (2011) 663 final] –COM (2011) 309 final.

*Informe al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la lucha contra la corrupción en la UE*, elaborado en Bruselas, el 3 de febrero de 2014 – COM (2014) 38 final.

#### 6. *Transparency International.*

*Global Corruption Report (2015): Sport*, Transparency International, 2016.

### RESOLUCIONES ARBITRALES Y JUDICIALES.

#### 1. *España.*

Auto Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona, de 11 de enero de 2016.

*1.1. España. Tribunal Supremo.*

STS 3738/1993, de 6 de noviembre.

STS 705/2002, de 18 de abril.

STS 816/2006, de 26 de julio.

STS 1307/2006, de 22 de diciembre.

STS 362/2008, de 13 de junio.

STS 232/2012, de 5 de marzo.

STS 265/2015, de 29 de abril.

*2. Portugal.*

Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 6 de marzo de 2013.

*Tribunal de Justicia de la Unión Europea.*

STJCE de 3 de julio de 1997, Asunto C-296/95.

*3. Tribunal de Arbitraje Deportivo.*

Laudo TAS (CAS 2014/A/3628). UEFA vs. Eskisehirspor Kulübü.

